

Concepción, veintidós de junio de dos mil veintitrés.-

**VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: Intervinientes.** Que con fecha ocho, nueve, doce, trece, catorce, quince y dieciséis de junio de dos mil veintitrés, ante una Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, integrada por los jueces titulares Cecilia Grant del Río, Jaime Vejar Carvajal y el juez interino Felipe Vega Letelier, se celebró la audiencia de juicio oral en causa **RUC N° 1901144183-4 RIT N° 388 -2022**, seguida en contra de imputado **Héctor Hernán Herrera Villa**, cédula nacional de identidad N° **13.382.226-7**, chileno, nacido el 13 de mayo de 1978, 45 años de edad, divorciado, estudios medios completos, funcionario público con domicilio en calle Ignacio Serrano S/N, comuna de Florida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 277 del Código Procesal Penal. El acusado estuvo representado por los abogados Humberto Alarcón Corsí y Pelayo Vial Campos, siendo parte acusadora el Ministerio Público, representado por el fiscal adjunto Nelson Vigueras Caamaño. Asimismo, actuaron como querellantes el Instituto Nacional de Derechos Humanos representado por la abogada Carolina Alvear Durán y el Consejo de Defensa del Estado representado por la abogada Brenda Torres Mondaca.

**SEGUNDO: Forma de realización del juicio.** Se deja constancia que el juicio se realizó de manera semi presencial, estando presentes en la sala de juicio los magistrados Cecilia Grant del Río y Felipe Vega Letelier; el Ministerio Público, la defensa y el acusado, y de forma remota mediante plataforma ZOOM el magistrado Jaime Vejar Carvajal. De igual manera se deja constancia que los testigos y peritos declararon en el tribunal.

**TERCERO: Hechos de la acusación:** Que los hechos y circunstancias que fueron objeto de la acusación y contenidos en el auto de apertura de juicio oral de trece de diciembre de 2022 del Juzgado de Garantía de Concepción, son los siguientes:

*“El día 22 de octubre de 2019, alrededor de las 19:30 horas, en las inmediaciones de la Plaza Condell de la comuna de Concepción, la víctima Gastón Alejandro Santibáñez Palomera, tras haber concluido su jornada laboral como obrero de la construcción en calle Aníbal Pinto esquina Manuel Rodríguez, Concepción, y mientras caminaba rumbo a su domicilio por calle Bulnes con Paicavi de la misma comuna, fue sometido al control de una patrulla militar integrada por al menos 3 funcionarios del Ejército de Chile, armados dos de ellos con fusiles de guerra y un tercero, identificado como el Sargento Héctor Hernán Herrera Villa, quien estaba a cargo de una escuadra de militares, con un arma de fuego del tipo escopeta de repetición, con capacidad para alojar 5 cartuchos, marca Winchester, calibre 12, serie 424803, quien se encontraba en el ejercicio de sus funciones consistente en el control del cumplimiento del toque de queda decretado por la autoridad para*



*mantener el orden público. Don Gastón Santibáñez Palomera fue fiscalizado por una patrulla militar del Ejército, existiendo alrededor de 70 militares desplegados en el sector donde caminaba, militares armados con fusiles de guerra y el clase o Sargento que va a cargo, provisto de una escopeta con munición antidisturbios.*

*En estas circunstancias, el Sargento del Ejército de Chile don Héctor Herrera Villa, abusando de su cargo y funciones, infringiendo la normativa sobre Reglas Para el uso de la Fuerza en estado de emergencia (RUF), estando ya la víctima bajo su custodia y control, encontrándose impedida de desplazamiento libre ya que era apuntada con la escopeta que portaba el imputado, además de encontrarse rodeado de personal militar, y sin que efectuara siquiera intento de fuga o agresión a quienes lo fiscalizaban, procedió el imputado a aplicar apremios ilegítimos a la víctima, consistentes en dispararle a quemarropa a unos 30 centímetros de distancia con la escopeta que portaba, impactando la pierna derecha de Santibáñez Palomera, hiriéndole a la altura del muslo, para luego violentamente reducirlo y detenerlo en el mismo lugar, trasladándolo a Avenida Paicaví, lugar donde es arrojado al suelo, recibiendo presiones en el sentido que debía señalar que se había caído.*

*Producto del disparo la víctima sufrió un trauma por proyectil de alta energía, debió ser sometido a una intervención quirúrgica para extraerle la munición y el taco del cartucho, que quedaron alojados al interior de su muslo derecho, resultando en definitiva con una lesión por perdigones en su muslo derecho, con secuela funcional permanente, deterioro físico en miembro inferior derecho, lo que se traduce en una limitación funcional a la deambulación en terreno irregular y escaleras, quedando impedido para trabajar en lo que se desempeñaba, siendo en consecuencia lesiones graves gravísimas”*

A juicio del Ministerio Público, tales hechos son constitutivos del delito de **apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes**, descrito y sancionado en el artículo 150 e) N° 2 en relación al artículo 150 d) inciso 2° y art 397 N° 1, todos del Código Penal; cometido en grado de desarrollo consumado atribuyéndole al acusado participación de autor al tenor del artículo 15 N°1 de igual cuerpo normativo no concurriendo circunstancias modificatorias de responsabilidad penal reconocidas. En base a ello, solicitó se imponga la pena de **doce años de presidio mayor en su grado medio**, más accesorias legales y costas de la causa.

Que se adhirió a la acusación fiscal el Instituto Nacional de Derechos Humanos quien compartió la calificación jurídica, el grado de desarrollo del delito, la descripción fáctica del hecho, participación atribuida, las circunstancias modificatorias y el requerimiento de pena del persecutor.



Además, el Consejo de Defensa del Estado dedujo acusación particular, en lo que dice relación con la descripción fáctica del hecho es la misma que plantea el Ministerio Público en el texto de su acusación. La calificación jurídica que le atribuye al acusado corresponde al delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, previsto y sancionado en el artículo 150 letra d) inciso 2° del Código Penal en concurso ideal con el delito de lesiones simplemente graves del artículo 397 N°2 del Código Penal, cometido en grado de desarrollo consumado, atribuyéndole participación de autor al tenor del artículo 15 N°1 del Código Penal.

Respecto de la pena requerida, solicita que tratándose de la imputación de dos delitos en concurso ideal, esto es, el del Art 150 d) en su inciso 2° y el delito de lesiones simplemente graves del artículo 397 N°2 ambos del Código Penal, el grado de desarrollo de consumado de ambos ilícitos, en los cuales se le atribuye participación a título de autor, por aplicación del artículo 75 del Código Penal, se aplique la pena mayor asignada al delito más grave. En este caso, la pena del delito del artículo 150 d) en su inciso 2° del Código Penal, quedando la pena a imponer en la de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y no concurriendo circunstancias atenuantes ni agravantes respecto del acusado, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 68 inciso primero del Código Penal, solicita para el acusado una pena de **siete años de presidio mayor en su grado mínimo**, accesorias legales del artículo 29 del Código Penal; y se le condene, asimismo, al pago de las costas, según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

**CUARTO: alegaciones de apertura:** Que el Ministerio Público refirió que el 22 de octubre 2019 cerca 19.30 horas en sector Plaza Condell un Sargento del Ejército disparó a corta distancia en la pierna derecha a un civil hiriéndolo gravemente.

Que le acusa por el delito de apremio ilegítimos del art 150 letra e del Código Penal, norma introducida por la ley del año 2016 que vino a dar cumplimiento a compromisos internacionales en materia de derechos humanos, los que están prohibidos por la legislación internacional como la Convención Interamericana de derechos humanos o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Al momento de los hechos regía un estado de excepción constitucional en la provincia de Concepción y es en ese contexto de fiscalización dicho militar realiza un disparo a la víctima hiriéndola gravemente. Destaca en este contexto la labor del acusado, ya que la propia teoría del caso de la defensa es aplicar la justificante del artículo 10 n° 10 del Código Penal, esto es obrar en cumplimiento de un deber. Sin embargo, conforme el artículo 495 n° 1 de igual cuerpo normativo, incurría la víctima en una falta con pena de multa, por lo que ese control necesariamente se tenía que condecir con la gravedad de la



infracción que estaba incurriendo el fiscalizado. Ya que dicho estado de excepción no facultaba para afectar la integridad física y síquica de la persona, existiendo un acto directo de disparo con una lesión que lo dejó inútil para trabajar, existiendo además una degradación como persona de la víctima con la actuación de Herrera Villa. Se está frente a una víctima que jamás opuso resistencia y que no amenazó al acusado, que estaba rodeada de personal uniformado con armas de guerra y en el caso del acusado era quien mandaba su escuadra compuesta por otros ocho militares, portando una escopeta Wuinchester, disparando un arma de fuego con munición ante disturbio o motines. Pone hincapié en el hecho que el arma fue disparada entre 30 a 50 centímetros en relación de la punta del cañón y la pierna de la víctima quedando el taco de la munición incrustada en la piel, ingresando al cuerpo de la víctima sin siquiera alcanzar a dispersar los perdigones que llevaba en su interior siendo necesario ser operado esa misma noche. Que no hubo ninguna advertencia por parte del acusado al fiscalizado Gastón Santibáñez.

Agrega que la prueba será esencialmente testimonial, el tribunal podrá escuchar a la víctima, obrero de la construcción que se dirigía desde su trabajo a su residencia que es una pieza que arrienda cerca de la Plaza Condell. Relatará el hecho y las dramáticas consecuencias que el mismo le ha acarreado en su vida personal y laboral. Además, incorporará -prueba n° 71 de otros medios de prueba- que contiene dos videos en donde el tribunal podrá observar cómo ocurrieron estos hechos. Dichos videos circularon aquella misma noche a pocas horas de ocurrido y es ahí donde el Ministerio Público tomó conocimiento y de oficio decidió iniciar una investigación instruyendo a personal especializado para que realicen las primeras diligencias investigativas, pudiendo apreciar la interacción entre la víctima y el acusado Sargento del Ejército Héctor Herrera.

Pide poner atención a la pericial de Gonzalo Paredes -N° 74 de otros medios de prueba-, quien mejoró el audio y relentizó los videos pudiendo apreciar la dinámica de los mismos. También declarará la perito del Servicio Médico Legal doña Carla Aldana que examinó en cuatro ocasiones a la víctima y emitió informes de lesiones y evaluación conforme al Protocolo de Estambul para examinar a víctimas de violencia interinstitucional. Refiere que las reglas del uso de la fuerza a la que se encontraba obligado le imponían al acusado actuar con el uso de la fuerza de manera proporcional y racional. Estima que con la prueba de cargo acreditará la participación culpable, la no concurrencia de la causal de justificación y desde ya solicita una sentencia condenatoria conforme a su pretensión.

Por su parte la querellante **Instituto Nacional de Derechos Humanos** señaló que resulta indudable que ese día marcó un hito de la historia ya que pudimos ser testigo de las manifestaciones iniciadas



el día 19 de octubre de aquel año, de las marchas y del amplio despliegue de las Fuerzas Armadas por el gran Concepción. Sin embargo, existen otras personas en que este movimiento social fue más que un simple recuerdo, produciendo un impacto en su historia vital, siendo un punto de inflexión en sus vidas. Se está frente a un caso emblemático en donde el 22 de octubre la vida de la víctima sufrió un cambio radical, ya que ese día la víctima cumplía sus funciones de obrero de la construcción en calle Manuel Rodríguez con Aníbal Pinto y luego recorre caminando la distancia desde ese lugar con su casa en calle Janequeo cercano a la plaza Condell. La diferencia es que se estaba en estado de excepción constitucional y existían manifestaciones y despliegue de las Fuerzas Armadas. A esa hora ya se había iniciado el toque de queda y solo existían pequeños grupos que eran dispersados por personal militar.

Dice que ella como profesional realizó observaciones, que a esa hora no había grandes manifestaciones y sólo subsistían pequeños grupos. Ya han pasado 1325 días, más de tres años y siete meses desde aquel día, cambió la legislación con la ley 21.560. Pero hay algo que no ha cambiado en los estados democráticos que es el reconocimiento de la dignidad humana y la prohibición de la torturas y otros tratos inhumanos y degradantes. Existiendo diversos tratados internacionales que resguardan dichos derechos como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Estando ratificados dichos tratados se estableció el delito de la tortura, bajando en escala de gravedad a los apremios ilegítimos y luego las vejaciones injustas. Se está frente a un tipo penal que es idóneo conforme los hechos, lo que se acreditará en juicio, lo que podrá ser apreciado, ya que a diferencia de la clandestinidad de algunos hechos, éste hecho se desarrolló a plena luz del día, a vista de las demás personas que existían en el lugar y desde muy temprano se contó con registro audio visual que fue ampliamente difundido a través de los medios de comunicación tradicionales y redes sociales. Dichas imágenes y audios van a ser el reflejo de los dichos de la propia víctima. Que sólo era un obrero que intentaba explicar a un funcionario fuertemente armado que venía desde su trabajo y que en la mochila sólo llevaba sus implementos de trabajo como sus zapatos de seguridad. Que no llevaba ningún arma y no existía amenaza a la integridad del acusado.

Pero el acusado decidió hacer uso de la escopeta causándole lesiones a corta distancia, lesiones graves gravísimas. Estaba en ejercicio de sus funciones y existe un incumplimiento a las reglas del uso de la fuerza que regían la actuación en esta materia amparadas en los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Habrá que preguntarse si era necesario usar dicha escopeta para cumplir la función que tenía el acusado ese día?. Si era necesario



provocar el daño a la víctima?. Existía otro medio menos lesivo para conseguir el objetivo que se buscaba?. Para dar respuesta es de tener presente siempre que al acusado estaba acompañado por otros funcionarios. En razón de ello, el disparo a corta distancia sólo se explica por imponer un apremio ilegítimo que ha provocado secuelas permanentes que no sólo se limita a un aspecto físico, sino que también secuelas emocionales y psicológicas, no volviendo la víctima a ser el mismo, lo que se acreditará con la perito del Servicio Médico Legal que relatará el trauma vivenciado por la víctima. En cuanto a sus lesiones la víctima presenta secuela funcional permanente producto del trauma por el proyectil disparado a 30 o 40 centímetros de distancia, quedando la pierna con limitación funcional a la deambulaci3n dejándolo impedido de trabajar en su oficio. Finalmente, hace un llamado a conocer este caso desde la perspectiva de derechos humanos, no existiendo duda del daño a la víctima y que fue ocasionado por un agente del Estado al ser un funcionario del Ejército de Chile que se valió de dicha calidad para actuar, que resguardaba el orden público controlando el toque de queda. No se puede olvidar las obligaciones para el Estado en materia de violaciones a los derechos humanos, de investigar de manera eficaz y oportuna. De sancionar y establecer una reparaci3n a la víctima y dar garantías de no repetici3n. Cree que se logrará la convicci3n de que los hechos del día 22 de octubre de 2019 por el que se acusa al imputado son constitutivos del delito por el cual se acusó por lo que solicita un veredicto condenatorio.

La querellante **Consejo de Defensa del Estado** señaló que en los estados de excepci3n no existe un relajo o menor resguardo a los derechos humanos, ya que todo el orden público debe velar por el estado de derecho, existiendo derechos que amparan a los civiles. Siendo un deber concreto, ya que se está frente a un funcionario del Ejército que en funci3n pública resguardado el orden y seguridad público infringe lo establecido en el reglamento del uso y la fuerza antes de salir a patrullar. La obligaci3n del acusado no sólo se extendía a proteger a la poblaci3n y dar resguardo a la seguridad pública, sino también proteger a la propia víctima aun cuando esta haya infringido el toque de queda, existiendo una desproporci3n de la fuerza. El lugar y hora de los hechos permiten establecer o presumir que no existe la amenaza que ha señalado el acusado desde los inicios de la investigaci3n. El sitio del suceso estaba a plena luz del día, estaba armado a cargo de una patrulla y estaba con elementos de protecci3n asociado a sus funciones. Por lo que comparar una actitud de la víctima con el aparataje que resguardaba al acusado no parece serio o verosímil. La víctima era una persona de contextura normal que no estaba armada, que estaba trabajando y se dirigía a su domicilio y es en ese contexto que el acusado sin amenaza en concreto actúa. No existen antecedentes de civiles que hayan agredido a militares el día de los



hechos y resulta cuestionable de porqué el acusado se sentía amenazado, no existiendo tal circunstancia. Llama a fijarse en la actitud de la víctima lo que reflejará que no existe ninguna razón para el uso de la fuerza. De ahí que actúa el Consejo de Defensa del Estado que plantea que se está frente a lesiones a lo menos simplemente graves, existiendo secuelas físicas y emocionales evidentes.

Finaliza indicando que no es sólo el relato de la víctima y fijaciones fílmicas, ya que existe un antecedente objetivo que es la prueba pericial balística, de lesiones y de daño que refleja lo que la víctima ha tenido que vivenciar por lo que pide igualmente un veredicto condenatorio.

La **defensa**, por su parte, indicó en sus alegaciones de apertura que controlar el toque de queda era la finalidad del Sargento y la unidad, debía detener a las personas que lo desafiaban o los que hacían caso omiso de la detención o continuaban su marcha si no respetaban la orden de detener. La misión y el deber de dichas unidades era detener a dichas personas y a los que no se detenían debían ser reducidos conforme lo que señalaba el mando, con la fuerza necesaria para hacer cumplir lo ordenado conforme esas reglas. La víctima caminaba en contra de un soldado que le decía que debía detenerse y el ordenamiento lo autorizaba para lograr esa detención. Cumplía con su deber de velar por el orden público al verse afectado el orden social.

Agrega que el Sargento Herrera trabajaba como peluquero en el Casino del Regimiento Chacabuco, había hecho su instrucción militar como conscripto y hasta el año 2005 tuvo labores de instrucción, pero no estaba cercano a instrucciones militares. Que luego de decretado el estado de excepción el Regimiento es llamado a velar por el orden público. Existían diversas unidades o patrullas y en una de éstas estaba para controlar el orden público; esto es, que no se desplazaran por la ciudad atendido el toque de queda. Se le encarga a todos los miembros del regimiento y por eso él tuvo que acudir, a pesar de dedicarse al oficio de peluquero entregándosele un fusil de guerra de tres balas de salva y al “clase” se le entrega un fusil anti disturbios, una escopeta y los proyectiles que son de baja fuerza, no letales, “antidisturbios” esencialmente reactivos. Que una vez conformada la escuadra se les da la misión de controlar el orden público y el que se desplazaba por la ciudad y por más de ser una falta debía ser detenido. Debían regular el empleo de la fuerza, ya que en ese tiempo no estaba vigente la ley de abril y se les explicaba estas reglas y salían a cumplir su misión.

Indica que ese día 19 de octubre durante la tarde hubo más de 180 eventos, desordenes públicos en el lugar, incendio en locales comerciales, barricadas, saqueos existiendo un caos en la ciudad. Alrededor de las 18:00 horas su unidad se sitúa en el sector de Paicaví, en su rotonda que era un símbolo de desórdenes al igual que la plaza de tribunales como es conocido. Ya en el lugar, el señor Herrera escucha al parecer a una mujer que dice “aquí, aquí” voz que venía de los



edificios de la Remodelación Paicaví. Que alertaba que habían dos sujetos que estaban escondidos entre dos pilares. Que la unidad se desplaza a ese sector para cumplir que las personas acataran el toque de queda y encuentran a dos sujetos. Uno de ellos no se aparta del orden jurídico y al decir “al suelo” obedece y se tira al suelo siendo detenido. Pero el otro sujeto desafía la orden, ya que cuando el Sargento Herrera le dice que se tire al suelo, que no avance prefiere caminar hacia el Sargento Herrera y hace retroceder al Sargento a lo menos 10 pasos y empieza a caminar hacia él. Se dice que sólo se le advierte en una sola oportunidad, pero el video es muy poco claro y momentos en que no se puede apreciar ninguna imagen. Siendo incluso la propia víctima que dice que hubo diversos llamados de advertencia y el Sargento Herrera se enfrenta con un árbol y continúa caminando la víctima y tiene que detenerlo. Así, no queda otra opción de sacar su arma y le dispara a la altura del muslo, en zona no letal, lo reduce y luego lo traslada para que le brinden los primeros auxilios y en no más de diez o quince minutos es trasladado al recinto asistencial.

Refiere que Gastón Santibáñez es una persona que trabajaba en Aníbal Pinto con Manuel Rodríguez y vive en Janequeo a la altura de Bulnes, por lo que no se comprende lo que hacía en dicho lugar. Da excusas como que iba a sacar plata a una caja vecina, que había “hecho una cortita”, denunciando este hecho como accidente laboral de trayecto, lo que fue rechazado ya que no se condice con el trayecto a su domicilio. Siendo una persona refractaria al orden penal con condenas anteriores. Además, no pueden ser imputables las secuelas que se han dicho, ya que son consecuencia de su no rehabilitación tal como se indicará y probará en los hechos. Señala que se ha modificado el Código Penal con la ley 21.560 que modificó el artículo 10 y 150 relativo a los apremios ilegítimos, que presume la legítima defensa a los funcionarios que contralan el orden público. Resulta aplicable además al artículo 10 n° 10, ya que cumplía labores de resguardo de orden público y frente a un sujeto que hacía caso omiso y la eventualidad que le quite el arma o tener un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y siendo la agresión inminente actúa. Reitera que la ley Nain-Retamal presume el uso racional de la fuerza empleada.

En la acusación se imputa disparar a quema ropa a 30 centímetros de distancia con la escopeta que portaba, lo que sería un trato cruel inhumano y degradante lo que se podrá desvirtuar ya que a lo menos estaba a 1,9 metros de distancia. La ley describe un trato cruel, siendo indeterminada en la descripción típico de la conducta, un trato indigno sobre otro. Sin embargo, se está frente a un sujeto que se acerca al acusado, debiendo discutir si se está frente a un trato cruel, no le coloca elementos de atadura, no es arrastrado hacia los otros funcionarios para que sea asistido. Efectivamente lo tira al suelo y lo inmoviliza pero es resorte de la detención. La inhumanidad ocurre en





despoblados, en la noche, sin embargo acá fue efectuado a plena luz del día y fue grabado.

Finaliza indicando que el acusado cumplía su deber y estaba autorizado a detener y reducir a quien infringiera el orden público y podía ocupar esa violencia necesaria y hoy la ley presume ese uso por lo que concurren las circunstancias justificantes del artículo 10 n° 10 y n° 6 como legítima defensa privilegiada introducida por la ley Nain-Retamal.

**QUINTO: *Declaración del acusado:*** Que Herrera Villa, previa advertencia de sus derechos señaló que el día 22 sucedió, fueron citados el 19 de octubre, se activó plan de enlace a acuartelarlos en su totalidad, conformándose las primeras patrullas y la de combate donde hay conscriptos e instructores. Para completar resto de unidades se llamó a personal de la parte administrativa de la unidad, siendo llamado como los que trabajaban en casino, rancho, unidades de construcción entre otras y los nombraron para formar parte de las patrullas que iban a salir durante la noche y el día siguiente demorándose bastante por las coordinaciones de mando y designación de personal, armamento, en que camiones salían etc. Durante esos días acudieron en muchas situaciones en distintas misiones y lugares, la calle Carrera, Collao donde había barricadas y lanza objetos contundentes, le lanzaban cosas de los edificios. El día 22 salieron, revisaba a los soldados, estaba a su cargo de una patrulla que variaba diariamente según los servicios. Su misión era estar a cargo, se le entregó fusil de guerra el primer día con 3 cargadores de cada uno con 17 municiones y 3 tiros de fogueo o salvo. Ante del 22 se le cambia. Ese día salieron a las seis de la tarde cuando se inició el toque, en camiones. Luego de recibir indicaciones, subieron por calle Freire por calle Paicaví, avanzaron hacia calle Carrera y se encontraron con desechos de barricadas, alambres de púas que impedían desplazamiento de las unidades, se hizo lento el avance hasta que llegaron a la rotonda Paicaví con calle Carrera manteniéndose varios minutos ya que las manifestaciones estaban desde ese lugar hacia Bulnes sector de la tres Pascualas. No había nada más que hacer en ese momento que estar en lugar. No había manifestante en esos momentos ya que estaban como a 100 o 150 metros. Pasadas las siete de la tarde entre los edificios de la remodelación Paicaví se acerca un grupo de personas, no puede decir número y empiezan a recibir proyectiles como piedras y el mando les ordena a las patrullas ir a tomar personas detenidas ya que infringían el toque de queda y también porque lanzaban proyectiles hacia ellos. Su escuadra se dirige a tomar personas detenidas, se mantiene en la parte posterior para tenerlos a la vista para dirigirlos de mejor manera y dar protección que se le había encargado. Se toman varias personas detenidas y son dirigidas hacia los vehículos que estaban en Remodelación Paicaví. Cuando volvían escuchan desde un edificio un



voz de mujer que decía “aquí, aquí.” Junto a otro soldado escuchan y de dirigen hacia ese lugar, y la señora le indica que habían dos personas escondidas, llega al lugar y ese encuentra con esas dos personas, una acató la orden y se tendió y el militar que lo acampaba se quedó con él. La otra persona se le indica que se tienda, hace caso omiso y empieza avanzar hacia él y se le daba la orden de detenerse y no hacía caso, retrocede 10 o 12 pasos, incluso casi se cae ya que había un muro al lado de la escalera. Le daba la orden que se detuviera y esta persona le decía que no. Llegó un momento en que se encuentra con un objeto detrás de él que no distinguía en ese momento que era, la persona seguía haciendo caso omiso. Se ve como encerrado en ese lugar y hace uso del armamento no letal y dispara en la extremidad inferior. En ese momento llega la Cabo Carla Huinao y le presta apoyo y solicitó apoyo al resto del personal que estaba a varios metros de distancia. Se le inmoviliza y luego se le lleva para prestarle los primeros auxilios y se llama a la unidad de emergencia para su atención. Luego, se mantuvieron en el lugar, en la calle Carrera durante varias horas hasta que se le da la orden al Comandante de la patrulla ir al Hospital Regional para trasladar al señor Santibáñez a carabineros. Sale del Hospital y se le va a dejar a la Comisaria correspondiente. Luego se dirige al cuartel y no cumple más funciones de patrullaje y queda a la espera de más instrucciones debido a la situación que había acontecido.

A las preguntas del fiscal dice que los hechos fueron el 22 de octubre de 2019, pasadas las siete de la tarde. En esa época era Sargento del Ejército de Chile, lleva 22 años en la Institución.

Su función principal era controlar el orden público para lo cual se formaron unidades especiales llamadas “UFES” iba en la unidad número 3. En esa unidad iban 80 militares aproximadamente, pero eso variaba día a día. El Capitán Morales ese día estaba a cargo de la unidad. Dentro de esa unidad habían secciones y él estaba en la segunda sección que eran 28 militares aproximadamente. En esa sección dos estaba a cargo el Teniente Yurasec. Luego de la sección estaban las escuadras y él estaba cargo de una de ellas y eran 8 militares aproximadamente. Él era el “clase” quien cumple la orden y transmite la información. Ese día son 6 militares aproximadamente y ese día estaba también la cabo Minao además de él y seis conscriptos aproximadamente. Los hechos que ocurrieron con el señor Santibáñez, en la zona general de calle Paicaví estaba desplegaba la UFE, pero en el lugar de los hechos habían dos personas.

Reconoce haberle disparado al señor Santibáñez. Cumplía control de orden público y toque de queda y la voz de una mujer lo alerta diciéndole “aquí- aquí.” Respecto de dos personas que estaban ocultas, se acercan a controlar y en su caso al pedir a las dos personas que salieran uno de ellos se tiende inmediatamente y la otra persona no se tiende y se dirige hacia el frente a su persona. El señor Santibáñez



desde ese momento está solo y avanza hacia él. Esa interacción era tratar de controlar una situación anómala y un acto hostil hacia su persona. Mientras lo trataba de controlar, había cuatro personas en el lugar, un controlado, él, Santibáñez y otro más. Mientras lo trataba de controlar el señor Santibáñez no lo agredió, rechazaba la orden, lo hacía retroceder, dadas las circunstancias y dado lo que estaba pasando sí lo consideró una amenaza. Confortando con su declaración de que se ve encerrado cuando terminó de retroceder hacia atrás dice que llega a un lugar donde ve un objeto grande detrás suyo, no sabía lo que era e iba a perder su capacidad de reacción. Cuando se detiene para evitar cualquier tipo de daño hacia su persona es donde hace efectivo el disparo, ya que se le habían dado varias oportunidades, órdenes de detenerse. Fueron varios segundos de situación y no vio otra opción que la de hacer uso de su armamento para su defensa.

Físicamente no hubo una agresión, sí una situación amenazante hacia su persona ya que no hacía caso a la orden que se le daba en innumerables oportunidades. No podría decir si el señor Santibáñez lo intentó agredir, ya que no conoce sus intenciones. Nos sabe si portaba algún objeto para agredirlo. No sabe si llevaba algo en sus manos, fue una situación rápida. No le apuntó con la escopeta, se lleva en porción terciada en posición hacia abajo. Cuando lo apunta, dispara inmediatamente ya que tienen prohibición de apuntar a la gente.

Declaró al día siguiente de ocurrido los hechos aproximadamente como las diez de la mañana. No recuerda si entregó un ejemplar de las reglas del uso de la fuerza al momento de su declaración ante Policía de Investigaciones. Previa exhibición, a fin de refrescar memoria con su declaración de 23 de octubre de 2019 no recuerda si le entregó una hoja o papel atendido el tiempo transcurrido, pero conforme la declaración lo más probable es que así haya sucedido.

Dice que las RUF son las reglas del uso de la fuerza y el día 20 ya cumplía las funciones de resguardar el orden público, también el día 21 y dentro de esa función era necesario conocer esas reglas y se las habían dado a conocer antes de salir a la vía pública. Ante la pregunta si antes de disparar recibió un acto hostil dice que considero que el señor Santibáñez incurrió en su contra en un acto hostil. Antes de disparar cumplió su deber de advertencia a viva voz, que se detuviera y se tendiera en varias oportunidades. Disparó con una escopeta Wuinchester que se la habían entregado de cargo el día 21. Disparó a corta distancia.

Se le exhibe -otros medios de prueba n° 77- para los efectos del artículo 333 parte final del Código Procesal Penal dice conocer el armamento que ocupaba el día de los hechos escopeta Wuinchester que es un arma de fuego que trabaja en base a ignición de pólvora. Con igual finalidad -otros medios de prueba n° 71 videos- exhibiéndolos (1°



de 28 segundos y 2° de 5 minutos) reconoce aparecer en el video y ser la persona que dispara a la persona de civil.

A las preguntas de la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló que dentro de sus obligaciones era dar seguridad a la patrulla que comandaba. Estando en la remodelación Paicaví, comenzaron a recibir piedras y proyectiles y no uso hizo de su arma ya que tenía que esperar órdenes de su superior. Le dice a viva voz que se tendiera y se detuviera en varias oportunidades. La advertencia es para que se tienda, al hacer caso omiso disparó. Indica finalmente que no advirtió que iba a disparar en el caso en particular.

A las preguntas del Consejo de Defensa del Estado refirió que tenía 22 años de antigüedad ingresando como soldado conscripto en el año 1997. Cuando fue conscripto se recibieron instrucciones distintas y tienen que usar armamento. Efectivamente el combate cuerpo no estaba dentro de sus instrucciones entre 1997 y 1998 debido a que no habían instrucciones de combate especial, ya que hay instructores de combate especial en las unidades de instrucción. Cuando hizo la instrucción no había instructores de esa entidad. Con posterioridad al servicio militar tampoco recibió instrucciones de combate cuerpo a cuerpo. Aprendió durante el servicio militar a usar armas, sólo fusil de 762 mm que se le entregaban en ese momento. El fúsil era brasileño HKG3 de calibre 7.62 mm, siendo un arma de fuego de dos características y dependiendo de su munición, pude disparar munición de guerra y también a fogeo o salva que sale un fogonazo por la inyección. Luego de eso, no aprendió a usar el arma del día de los hechos que se le entregó el día anterior. Para hacer uso del arma de fuego lo facultaban para usar el arma, requería autorización. Cuando existían elementos contundentes hacia ellos no accionaron armas y que necesitaba orden de mando para usarlas, de sus superiores.

Ante la pregunta si variaron las circunstancias con posterioridad al momento de agredirlo, dice que en ese momento había varios oficiales el comandante de la Compañía Capitán Morales. Luego del uso del arma tuvo que dar cuenta de su uso y se dio prioridad de la atención de la persona. El procedimiento terminó luego de haber recibido la orden de que un vehículo se dirigiera al Hospital Regional y lo dirigiere a la Comisaria, luego al día siguiente va a declarar a la Policía de Investigaciones.

A la defensa señaló que su equipo era casco balístico, chaleco antibala, tenuta de hermetismo y la escopeta. La visión del casco es de frente hacia abajo producto de la visera que impide ver hacia lo superior y esa visera tiene 3 o 4 centímetros a la altura de los ojos. Al momento del disparo no veía otra persona y ahora que ve el video ve que estaba su colega la Cabo Huinao que en la calle era su primera salida y el primer contacto con personal civil, ya que entraba en



reemplazado a su acompañante que había sido herido por un postón el día anterior.

Explica que antes de salir del regimiento el día 22 se reúne la gente, las diferentes unidades, todos los días variaban, ese día antes de salir se forman las tres unidades y cada capitán se le da cuenta de su compañía y el Mayor da las instrucciones generales. En el lugar hay 200 o 300 personas. Las formaciones o disposiciones duraban cinco o diez minutos donde se le recordaba el procedimiento y normas que debían cumplir. Luego las repetía el Jefe de la compañía y luego cada comandante de cada escuadra. Respecto de esas instrucciones era el control de orden público, que se protegieran que evitaran conflictos y que controlaran en la medida los desórdenes y dentro de eso el uso del armamento, ya que la totalidad de los soldados portaban armas. Se le daba mayor importancia que no se le fuera a perder, que no le fuera arrebatado, evitar el contacto con civiles, ya que el armamento de guerra en manos de civiles era muy peligroso.

Si incumplían toque de queda se le entregaba a carabineros. La detención fue después de toque de queda. El armamento antimotines no tenía instrucción de esa arma, no siendo parte de la instrucción para la guerra, no siendo armamento no letal y depende de las circunstancias se puede usar. Ante una situación compleja que se viera arriesgada su integridad física o de otra persona. No estaba descrita en ninguna parte, pero se le decía que fuera en las extremidades inferiores para evitar un mayor daño. Cuando se realizaba un acto hostil se podría hacer uso de la fuerza excluyendo la letal y que cuando una persona o grupo tratara de impedir la misión y se podía tomar detenidos a las personas y hacerse uso del armamento no letal, lo que está escrito. La persona que no se deja detener, impide el cumplimiento de la misión. No podía disparar hacia arriba, ya que el disparo de advertencia se realiza con munición a fogeo o salva, no con proyectil para evitar daños a otras personas, como las personas que estaban en los alrededores. En el sector estaban y vio que en el balcón del segundo piso había personas, cinco o seis personas no sabrían decir.

Que no podría haber usado la culata, ya que el arma no está hecha para ser usada de esa manera, puede fracturar costillas y daño de pulmón o fractura de cráneo. Está hecha para disparar una munición no letal para evitar el daño que se hubiere producido por ejemplo con el daño de la culata. Agrega que cuando se dirige al lugar ya que le decían que había dos personas les pide que salgan, una se tendió inmediatamente y le hizo caso a la orden verbal y el otro no le hizo caso. Decía porque? que no, que no y por eso retrocedió, retrocedía ya que se podía haber quitado el armamento. Si le quita el armamento se va con una sanción y podría verse en riesgo la integridad física de las otras personas. Retrocede, casi se cae y como no atiende a la orden de detención y se ve encerrado con el árbol que no veía es que hace uso



del armamento conforme se le había ordenado en instrucciones anteriores.

Dice que ingresó como soldado conscripto el año 1997, luego en mayo de 1998 terminó su instrucción. Hizo un curso de aspirante de reserva de cinco meses, donde se envía gente para trabajar con los soldados que llegaban el próximo año. Le fue bien y en el año 1999 se dió la posibilidad de ser llamado al servicio activo como clase de CEPRASA y trabajó en el antiguo Regimiento Chacabuco. Los últimos cinco años, a partir del año 2008 o 2009 se desempeñó en la peluquería del regimiento. Por necesidades del servicio había aprendido a cortar el pelo y estuvo por casi 8 o 9 años. Luego por una lesión del hombro en el manguito rotador se le cambió al Casino de oficiales como asistente de mozo y eventualmente como cocinero de la unidad y para el año 2019 estaba en el Casino de oficiales en la parte administrativa del regimiento.

Dice vivir con sus papás y tiene una hija de la que tiene su tuición desde los 14 años y estudia tecnología médica en la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Finaliza indicando que no tiene capacitación en la instrucción del orden público, sólo hasta ese momento eran los que iban a cumplir misiones de paz a Haití.

**SEXTO: Convenciones probatorias.** Que en la audiencia de preparación de juicio oral, los intervinientes no acordaron convenciones probatorias, según consta en el acápite décimo cuarto del auto de apertura.

**SÉPTIMO: Prueba.** Que la prueba rendida por el Ministerio Público, la que fuere compartida íntegramente por los acusadores Instituto Nacional de Derechos Humanos y Consejo de Defensa del Estado, consistió en:

**I.- Prueba testimonial:**

**1.- Gastón Alejandro Santibáñez Palomera,** cédula nacional de identidad N° 11.292.796-4, quien a las preguntas del Ministerio Público dice que esta acá ya que su vida antes de esto era normal, era feliz, trabajador y responsable, querido por compañeros de la empresa. Que luego su vida giro completamente, sintiéndose un fracasado y miserable. Ese día trabajaba en área de construcción, ese día trabajaban hasta la una, pero como tenía una responsabilidad con los contratistas se quedó por eso, sus colegas se fueron temprano hasta la una o dos. Se quedó hasta como las 5.30, se iba a su casa. Se iba con un colega en auto que lo iba a dejar a su casa, pero se fue tarde, firmó el libro, marcó la hora, eran las 5.30 de la tarde. Caminaba por Aníbal Pinto, trabajaba en Manuel Rodríguez con Aníbal Pinto, estaba buscando servicio para sacar plata, le quedaba como a una cuadra para llegar a calle Bulnes. Fue a la “caja vecina” y estaba cerrada. Le dio rabia, ya que quería comprar algo. Como estaba cerrado se fue por



Bulnes hacia abajo, donde arrienda por esa misma calle. En Bulnes con Tucapel hay unos locales nuevos, caminaba y pensaba. Era una persona normal, se fue por la calle Bulnes lento y se mete por una parte. Arrienda en Bulnes con Janequeo. Andaba con su mochila negra con sus implementos de trabajo, botas y buzo. No sabía a qué hora empezaba el asunto “del paro”. Empieza a escuchar, ve tanta gente, venían de Carrera hacia Bulnes y por tener miedo se mete por unos escalones hacia abajo que hay unos departamentos. La gente gritaba, y los militares empiezan a disparar. Se esconde, ya que le quedaba como media cuadra para llegar a su pieza. Hay una torre como larga y ve que unos militares le apuntan, le decía que “na que ver”, le explicó que venía de su trabajo. Andaba con su ropa y nada más. No hizo nada, venía de su trabajo “cabriado”, cansado por el trabajo. Lo guían por una parte de un pasto y llega un grupo de militares, le apuntan entre todos y el solo. Le dice que él también es militar en el 87, en Chacabuco y le dice que entendía y que no era para que lo tratara así. Le decía que venía de su trabajo y justo le va a mostrar su mochila y a 20 centímetros le manda el disparo y queda “en otra” lo único que sintió, miro al cielo y dijo “Dios perdónalos porque no saben lo que hacen”. Quería sólo llegar a su pieza, le pedía a Dios que los perdonare.

Le dieron vuelta los militares, lo trataron peor que un perro. No quedaron conformes con dispararle a veinte centímetros, sino también lo dieron vuelta y lo esposaron, se reían de él. Lo votan al medio de la calle Paicaví. Tenía su mente en otra y había tanta gente ahí. No entiende porque no quedaron conformes con dispararle y listo y no lo entiende hasta ahora que han pasado cuatro años. Vio a Sargentos, Teniente y los otros eran cabos. Les dijo que venía de su trabajo y trabajaba en “tal lado”, y cuando se las va a mostrar cree que él pensó que iba a sacar un arma o cuchillo. Luego del disparo la abrieron y vieron que había un buzo y botas de su trabajo y ahí se dieron cuenta que se habían mandado una embarrada. Le dispararon en la pierna derecha, más arriba de la rodilla.

Agrega que trabajaba haciendo el planchado, emparejando el terreno para tirar las barras de acero para hacer departamentos, revisa la calidad y el proceso decómo trabajan los contratistas. Ya no puede trabajar, le gustaba hacerlo ya que era bonito y enseñaba a los jóvenes y se sentía orgulloso de ello. Perdió su capacidad de la pierna derecha, ya que tiene 35 municiones y eso quedó dentro. Tiene una altura de cinco y los escalones son de 25 y toda la fuerza la hace desde la pierna izquierda, no la hace desde la derecha y ahora ve los edificios en que trabajó.

Andaba solo, de esa placita chica, no alcanzaba a quedar media cuadra para llegar a su pieza. Cuando mira militares que le estaban



apuntando y ahí lo agarraron en una placita llena de pasto verde y ahí le dice que él también fue como ellos y ahí le manda el escopetazo. Le dispararon a veinte centímetros y el cartucho por eso le quedó dentro de la pierna, no se dio cuenta. Sólo cuando lo llevaron se dieron cuenta que tenía el cartucho en dos partes reventado dentro de su pierna. En ningún momento agredió al militar, sólo le dijo que venía de su trabajo, se lo dijo tres veces. Luego del disparo lo redujeron y lo dejaron en el piso. Luego lo perdonó y lo único que quería eran esposarlo y entre cuatro, estaba gente protestando, la prensa, gente de derechos humanos y lo botan como un perro. Un Teniente le pega una patada en la cabeza estando esposado y dijo así les va a pasar a todos ustedes como le pasó a él. El no quiso que llamaran a la ambulancia, era un Coronel. La gente le dicen que llame a la ambulancia y él se niega diciéndole así como les va a pasar a él les va a pasar a ustedes. Sangraba y entre Bulnes con calle Carrera viene una ambulancia y se gana un grupo de militares hacen una barrera para no dejar entrar a la ambulancia y esta tuvo que irse. Viene un periodista y se da vuelta y trae una botella plástica y le mira a la cara y le dice que tome un poquito de agua y no sabe si es el mismo que llama a otra ambulancia y le dice “que estos son unos miserables.” No sabe si viene otra persona o no, ya que estaba perdiendo la conciencia y le da una botella con agua. Llega la ambulancia y es ahí cuando la misma gente que lo sacaron de ahí y gracias a ese periodista y gente lo sacaron y lo llevaron al Hospital Regional. Llevaba mucho rato esposado en la calle y se reían. Un Coronel y un Teniente se reían y en su mente decía que lo perdonaran, quería vivir, tenía que luchar por el mismo. El cartucho era “20X5”, luego que la gente lo ayudó, le sacaron una radiografía y ahí se dieron cuenta que tenía un cartucho de 20X5 reventado, entró hizo una curva y reventó, por eso piensa que fue una bendición de Dios, ya que le podría haber reventado la pierna. Le tenía que salvar la pierna, le pusieron como diez anestесias y su cuerpo no lo aceptaba. Quien lo atendió agarró un palo y se lo puso dentro de su boca, le sujetan las manos y le mete la mano por dentro de la pierna buscándole el cartucho y lo único que hacía era mirar al cielo y ella metía su mano. Lo veía como una película y luego dice que la encontró. Pescó una pinza y la metió en su pierna.

Se incorpora evidencia -N° 52 del auto de apertura- exhibiendo: **foto n° 1:** es la parte que entró el cartucho hacia dentro, cuando lo llevaron al Hospital Regional le sacaron la radiografía y estaba con su celular y le pidió a la niña que con su celular sacara la foto. Luego entraron unos militares y la niña le escondió el celular para que no se la llevaran los militares, es su pierna derecha y el circulo es como entró el cartucho; **foto n° 2:** La niña se cambió el guante y metió la mano con guantes y les buscaba el cartucho que se ve partido en dos, no está





completo, se ve la parte circular que es la parte del metal; **foto n° 3:** se ve guante con el cartucho y la munición que sacó, el resto estaba dentro de su pierna, ya que le quedaron 35 municiones y por la presión del aire quedaron dentro de la arteria y no se pueden sacar; **foto n° 4:** pantalón con el que andaba ese día que está cortado con tijera para operarlo; **foto n° 5:** polera con que andaba ese día.

Se incorpora evidencia (signada con el n° 71 auto de apertura) consistente en dos videos. **Video n° 1:** Refiere que no había visto el video, sólo le habían contado de él. Ahí fue cuando cambio su vida y antes de eso hacia una vida normal, es la persona que le dispararon y andaba con la ropa que mostraron recién. Su casa estaba como a media cuadra. **Video n° 2:** Dice que le quedaba a media cuadra y había una placita, como escuchó los disparos se ganó al lado de un poste para que no le llegara cualquier cosa y ahí los militares estaban arriba y ahí lo apuntan, los agarran y lo llevan a la placita, venía de su trabajo, es un callejón y llega a la Plaza Condell y se llega a Janequeo, es una calle corta que se pudo llegar donde arrienda él. Con las municiones que tiene no le dan pega en ningún lado, no puede hacer fuerza en la pierna y nadie le da pega, antes hacía una vida normal. Dice que no le han certificado la invalidez, tiene un carnet que le costó hartito que se lo dieran. Tiene un carnet de incapacidad, pero no tiene para recibir una pensión o beneficio del Estado.

A las preguntas de la **querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos** señala que al decir que tiene una altura de cinco y los escalones son de 25, dice que los edificios y los escalones tienen un grado de altura de punta a punta es de 25, la altura de la plataforma de cada escalón y como no tiene la altura, tiene 5 centímetros menos, son los 5 centímetros que puede subir la pierna y los escalones son de 25, por lo que le cuesta para subir los escalones, lo que no sirve para una empresa.

La querellante **Consejo de Defensa del Estado** no hace preguntas.

A las preguntas de la **Defensa** dice que fue a la Mutual de Seguridad para obtener licencia médica y dijo que el accidente fue entre la salida del trabajo y su casa como accidente de trayecto y si es así se paga su licencia. La Mutual no le pagó la licencia, vivían en calle Janequeo y está a 1,4 Kilómetros, como 20 minutos caminando. Se fue del trabajo como a las 5.30 y la Mutual de Seguridad no debía investigar la hora en que salía del trabajo. Ante la aseveración de si la Mutual de Seguridad le rechazó la licencia porque había salido a la una de su trabajo es falso. No recuerda si se apeló de eso.



Ante la pregunta de si ha estado con anterioridad en un tribunal dice que no antes de hoy. Ante la aseveración si fue condenado por hurto de especies en el año 95 dice que no y otra sentencia por un tribunal del crimen de Valdivia por apropiación indebida a tres años de presidio menor dice que sí. Conforme artículo 336 inc 2° del Código Procesal Penal a fin de contrastar sus respuestas y establecer la credibilidad se incorpora extracto de filiación de quien comparece en donde aparecen anotaciones referidas por la defensa.

Agrega que llegó una ambulancia y los militares impidieron que llegara donde estaba él, se fue y luego se llamó a una segunda ambulancia. Ante no lo había dicho en declaraciones previas, ya que había sido amenazado. En la tercera declaración en diciembre de 2019 tampoco lo dijo, lo dice hoy en juicio. Respecto de la hora de salida de su trabajo fue a las 5.30 horas. Contrastado con declaración de 23 de octubre de 2019, recuerda que la firmó. Para superar contradicción se le exhibe declaración de 23 de octubre de 2019, reconoce su firma en el documento y su fecha consistente en la declaración del día de los hechos, dice haber firmado en blanco porque no estaba eso, la policía está mintiendo y los dos funcionarios que aparecen firmando están mintiendo. Dice la declaración salió de su lugar de trabajo a eso de las 14:30 horas.

Ante la aseveración si declaró el 30 de diciembre o haber ido a declarar a la Fiscalía dos veces, dice recordar que hizo una segunda declaración en Fiscalía y que señaló que “un Coronel chico le había dicho que salió a esa hora” a la que no puede identificar.

Cuando llegó al Hospital Guillermo Grand Benavente a urgencias fue alrededor de las 20:00 horas y lo operaron. En el Hospital no le preguntaron qué le pasó. La ambulancia llegó con un informe de lo que le había pasado y ellos le dan la información al Hospital. Tenía 35 municiones en su pierna y recibió un cartucho, 35 postas en su pierna, tendría que ser adivino para saber cuántos tiene en un cartucho. Dentro de los exámenes que le sacaron fue una radiografía y no tiene daños en sus huesos y le dijeron que tenía daños en los nervios, los cirujanos le dijeron daños en las arterias.

La empresa le avisó que había toque de queda, cuando llega a la remodelación venía solo, no había una persona al lado. Al momento que lo enfrentan los militares al lado de la escalera, estaba al lado de un poste solo. La otra persona estaba en otra parte.

Prevía exhibición de video (n° 2) dice que la otra persona sale de otro lado, no sale del mismo lugar donde estaba él. Esa persona se tiende en el suelo, no sabe si le dijeron que se tendiera. Los hechos



sucedieron antes del toque de queda. Cuando declaró la primera vez el 23 de octubre de 2019 señaló que se había topado con una persona que le dijo que se escondiera por el toque de queda.

En la operación se trataron de sacar las postas, luego fue cuatro veces al Servicio Médico Legal, no haciendo Kinesiología que sabía que era para recuperar lesiones.

Responde que trabajaba en una constructora en Aníbal Pinto con calle Rodríguez en esa fecha y vivía en Bulnes con Janequeo. Para llegar a Bulnes era bajar hacia Bulnes por Aníbal Pinto cruzando por calle Prieto, Cruz y llegaba a Bulnes. Y lo lógico es que llegara caminando hacia Janequeo. Fueron los hechos en la Remodelación Paicaví, que está más abajo, Paicaví, Bulnes y Janequeo. Una persona de un departamento le dijo lo que se escondiera.

La segunda declaración la hace el 29 de octubre señalando que se topó con un grupo de estudiantes y por eso se desvió hacia los bloques, dijo que había ido hacia una casa vecina. Previa exhibición de la herramienta del artículo 332 y previa exhibición de dicha declaración reconoce su firma y nombre y declaración ante Jorge Lorca de la fecha indicada. Soy maestro Carpintero y su horario es de 08: a 13:00 y hora colación. Que trabajó solo hasta las 14:00 y luego entre se cambiaron de ropa le dieron hasta las 15:00 horas. Desvió hacia unos block de la Remodelación Paicavi. Dice que no está escrito que haya ido a sacar plata a una caja vecina. Al momento del disparo no era horario de toque de queda. El militar no le dice que se tienda, camina hacia el militar y éste retrocede sólo dos pasos por eso son veinte centímetros. La persona que sale al lado en el video no estaba con él. Camina dos pasos, el militar no le dijo nada, sólo lo miró nunca le dijo nada. Si le hubiera dicho que se tendiera, le hubiera hecho caso. Le decía que estaba por llegar a su casa y que le quedaba media cuadra para llegar a su casa.

También declaró el 3 de octubre de 2019, él le dijo que venía de su trabajo, el militar no le dijo nada.

Exhibida declaración de 29 de octubre de 2019 indica “le apuntaba con una escopeta y le decía que se detuviera” señala que dijo que primero le habló él y el militar le dijo que se detuviere. En declaración de 30 de diciembre de 2019 dice “cuando el Sargento le apunta le decía que qué estaba haciendo y se quedara quieto” que es lo que está en la declaración.

Finaliza indicando que fue a hacer un informe psicológico ante el Servicio Médico Legal donde había una psicóloga no recordando su



nombre y recuerda que le dijo que el Sargento se había asustado porque pensó que llevaba alguna cosa.

**2.- Claudio Ignacio Morales Valdés**, Capitán del Ejército de Chile, con domicilio en calle 11 Norte, Regimiento N°16 de la comuna de Talca, quien a las preguntas del Ministerio Público señaló que actualmente está destinado en regimiento n° 16 Talca y en el 2019 estaba destinado a Chacabuco. Que era Comandante de una unidad fundamental que está compuesta por 86 hombres aproximadamente, por distintas secciones, que cada una está comandada por un Teniente y esa sección dividida por tres escuadras y esta a su vez también comandadas. El Comandante de la Compañía tiene misión de comandar esa unidad según las distintas misiones que le ordene su superior. En ese tiempo existían tres unidades fundamentales y la suya era la tercera, que tenía tres secciones. Una a cargo del Teniente Cruz, Yurasec y el Sub Teniente Barros. La sección de Yurasec tenía tres escuadras a su cargo, las que estaban a cargo era comandante de escuadra el Sargento Herrera y la Cabo Minao, dos a cargo de esa escuadra por lo que recuerda. Que la escuadra la mande el Sargento Herrera significa que es el oficial que está a cargo, que tiene la responsabilidad de comandar a los integrantes que por lo general son ocho o diez personas. Recibe la orden y se van gestionando las operaciones.

Su unidad fundamental estaba a cargo de resguardar el orden público. La Compañía como escalón superior es Comandante del Batallón, él recibía órdenes del mismo y luego de reúne con los Comandantes de secciones y como Capitán le ordena básicamente a los comandantes de secciones y las órdenes de ellos y ellos hacen los mismos con los comandantes de escuadra.

Refiere que el 22 de octubre de 2019 se le da la misión de resguardar el orden público del sector Rotonda Paicaví donde se generaron mayormente la cantidad de disturbios, ya que la población se reunió en ese sector. Era mucha gente y era en toque de queda, tenía que cumplir que la gente se fuera a sus casas. Comenzaron a avanzar la unidad fundamental hacia el oeste y la gente se desplazó a ese sector arrancando, ya que estaban con Carabineros. La situación era compleja en ese momento. La normativa que tenían que aplicar eran las reglas del uso de la fuerza y sus principios de proporcionalidad, legalidad y responsabilidad. Como Comandante de una Unidad Fundamental dice que las reglas de uso de la fuerza el regimiento le entregó unas tarjetas y antes de las operaciones se repasaban dichas reglas, pero básicamente enfocadas en los principios de proporcionalidad, legalidad y gradualidad. También formaban parte los jefes de sección y de los



comandantes de escuadra, ya que todos sabían, se repasaban con la unidad fundamental completa antes de iniciar la idea hacia la zona.

En cuanto al armamento el Comandante de la Compañía lleva pistola, y los soldados también iban armados y dentro de la escuadra va un escopetero que lleva la escopeta antidisturbios. Esta última es un arma de fuego no letal por su naturaleza y tipo de munición ya que no usa munición de guerra, si dispara esa persona no se va a morir.

En cuanto a los hechos estaba en la calle realizando control del orden público y tenían un punto de reunión de las personas retenidas para luego ser entregadas a Carabineros. Cuando ve que se acercaba el Sargento Herrera con un civil y un soldado. Lo traían, se notaba que tenía una lesión, ya que no caminaba solo. Lo suben a camión militar y el civil comienza a pedir ayuda, ya que se notaba con dolor. Se acerca al camión, sube y le preguntó que le había pasado y le dice que le habían disparado en la rodilla, lo revisa, tenía sangre en su pierna, para posteriormente ordenar que lo bajen y le realicen los primeros auxilios. Le pregunto qué le había pasado, gritaba de dolor y es ahí donde dice que lo bajen. La información se la informó al Comandante de la Brigada que estaba en ese mismo sector el Coronel Villaseca y posteriormente se encuentra con el Comandante del Batallón Araya y también le informa.

Una vez que pasa se acercó al comandante de escuadra que era el Sargento Herrera y le dio a conocer la situación que había ocurrido con el civil, no recuerda lo que le dijo específicamente, pero a rasgos generales era que estaba bajo los edificios haciendo patrullaje cuando se encuentra con el civil, que se le va encima y para evitar eso hace uso de su arma escopeta antidisturbios. Hizo caso omiso de las órdenes previas. Para refrescar memoria se le muestra declaración ante Fiscalía de 27 de diciembre de 2019 en donde dijo "Herrera quien estaba al lado del camión y al preguntarle que le había pasado, y le dice que este hombre se abalanzó contra él y que en reiteradas ocasiones él le dijo que se quedara ahí, que se le abalanzó y que le disparó con su escopeta antidisturbios".

Respecto del principio de proporcionalidad se relaciona a que debe hacer uso de la fuerza con armamento o medios que sean proporcionales o que tengan las mismas capacidades. El principio de gradualidad se refiere que hay pasos a seguir proceder en un principio de forma verbal, para evitar usar el armamento, conversar con la personas y en el fondo buscar herramientas para poder lograr el objetivo que era resguardar el orden público, conversar para evitar hacer uso de sus armas. La escopeta antidisturbios es cuando hay disturbios, cuando hay harta gente, no se debiere disparar más allá de



diez metros. Se evita que el disparo pueda producir heridas más graves. Como distancia de seguridad se refiere. La distancia mínima son diez metros, no se debiese disparar a menos de diez metros porque puede generar un daño mayor, ya que el objetivo es para que la gente se vaya a sus casas, ese es el objetivo de la escopeta, no se debiese, pero cada situación es distinta. No tuvo oportunidad de ver videos en días cercanos, a los meses después, tiene que haber visto un video un mes después. Recuerda que veía que se encontraba el Sargento Herrera con la cabo Minao y un civil en el sector de los edificios de Paicaví y se veía que había una conversación y se desplazan y puede ser que este civil se empieza a acercar al militar Sargento Herrera y hace uso de su escopeta antidisturbios. El civil esta de costado y se nota que esconde algo en su mano izquierda y cuando le dispara se nota que se cae algo al costado. A simple vista cuando este se cae da la impresión que es un lápiz, pero puede haber sido un elemento corto punzante.

Se le exhibe video -ya incorporado de 28 segundos- dice que ese fue uno de los videos que vio y sabe que existe que hay otro más largo, en donde se ven como se desplazan. Reconoce que en ese dispara el Sargento Herrera y la persona que le dispara estaba como a dos metros. Se evidencia que se busca que el civil se detenga para poder hacer el procedimiento, retenerlo y ser entregado a Carabineros, se le está advirtiendo. Viendo bien el video, entendiendo que la persona como esta de lado, se nota que esconde algo, no sabe si el Sargento Herrera habrá pensado que era un elemento corto punzante y pensó que se le iba a abalanzar. Uno debiese evitar disparar su arma en todo momento, pero el civil se le acerca y el Sargento Herrera le dispara la escopeta anti disturbios. A su juicio considerando que tenía una escopeta y el civil escondía algo en su mano izquierda y que se comienza a acercar y acerca, usó lo que tenía a sus manos. Quizás le podría haber pegado un culatazo o haber empujado y le podría haber generado alguna herida si hubiera tenido un arma corto punzante. Viendo el video a posterior ve que algo se cae, y es un lápiz y a posterior se puede decir que no era proporcional ya que era un lápiz, pero en ese momento piensa que el Sargento Herrera no lo vio.

A fin de evidenciar contradicción se le exhibe igual declaración “si me pregunta creo que no es proporcional el uso de la fuerza que empleó.” Conforme lo que vio es efectivo que el civil se le abalanzó a Herrera y se nota que el acusado empieza a retroceder, se observa una conversación, abalanzar o caminar hacia delante es lo mismo, si se le dice que no avance y comienza a avanzar hacia delante es lo mismo.

La querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos no formuló preguntas.



Al Consejo Defensa del Estado, le dice que lleva 17 años en el Ejército y meses. En el grado de Capitán lleva cinco años. Su trayectoria es que egresó en enero del año 2010, luego se va un año a la Escuela de Infantería, pasa el terremoto, esta casi seis meses en la reconstrucción, vuelve a Santiago, luego es destinado a Arica por cinco años, en Regimiento Rancagua, el 2016 es destinado a Concepción a Chacabuco por cuatro años y finalmente es destinado a Talca donde finalmente está prestando servicios. Cuando está en Concepción estaba a cargo de una unidad fundamental, 86 personas aproximadamente. En situación normal, sin estado excepción son compañía de fusileros, de infantería motorizada. En tiempos de estados de excepción constitucional se firmaron unidades de control de orden público, que es parecida la fuerza, pero se incluyen o cambia el armamento, debido a que las misiones son distintas, ya que una compañía de fusileros tiene armamento anti blindaje, ametralladoras, lanzador de granadas pero para este tipo de misiones se entregan escopetas antidisturbios, ya que lo que se busca es el orden público con un menor grado del uso de la fuerza, no se quiere infringir daños a los civiles y se usa munición a fogeo. En cuanto a la instrucción en armamento, la formación de un soldado hay un periodo de formación individual donde el soldado de cualquier grado pasa por la misma formación, características técnicas, tácticas del fusil, sus partes, funcionamiento y luego pasar por triangulaciones, luego pasa a secciones de tiros, prendido, con apoyo, luego arrodillado y de pie, son lecciones que certifican y queda documentada. Es la formación inicial, cuando el soldado ingresa al Ejército en su periodo básico. Durante la carrera, se va a terreno, se dispara, se capacita, tres veces al año, a final de año se trabaja a nivel de unidad de combate y anualmente se tienen que certificar en las distintas unidades básicas, se dispara, se hace lanzamiento de granada lo que se certifica, independiente del grado se tiene que hacer esa certificación anual respecto de las habilidades básicas de combate, son las que debe tener todo soldado independiente del grado, como saber marchar, usar su armamento, lanzar una granada, remitir un mensaje por radio, combatir o pelear. Respecto de pelear realizan combate especial que es básicamente poder pelear en caso que se queden sin munición, de suelo, de pie, esgrima de bayoneta o esgrima de corbo la que se hace a todos los funcionarios activos.

Refiere que el día de los hechos estaba con tenuta de combate, botas de combate, tenuta pixelada, chaleco táctico con placa y casco. Las botas tienen certificación militar, reúnen las medidas de seguridad para poder emplearse en todo tipo de suelo, mas referido a la seguridad de los tobillos, son mas firmes, diría que es más pesado que en un zapato normal y los golpes que se den incurren varios factores como



fuerza o tamaño para producir daños independiente de si se usa un calzado militar o no.

El señor Herrera le dijo lo que le había pasado el día de los hechos. Una vez que le pregunta le informó a su escalafón superior, el Coronel Villaseca y al Comandante Araya dando la versión que dio el Sargento Herrera. En cuanto a la facultad de disparar, estaba autorizado por el mando, desde que el Regimiento les ordena desplegarse en Concepción en estado de excepción y le entrega las reglas del uso de la fuerza si la ocasión lo amerita hay que hacer uso. O si no, se saldría a nada. Respecto del armamento antidisturbios, al igual que el armamento de guerra se certifica, para la gente que lo usa debe certificarse, hacer una lección de tiro por lo que se puede concluir que el señor Herrera tenía instrucción para usarla.

A la Defensa indicó que en el caso concreto, no le consta que en el caso en particular el señor Herrera haya tenido alguna instrucción en uso de armas antidisturbios.

En el año 2019 el Sargento Herrera estaba encuadrado en cuartel, era el peluquero del Regimiento, no iba tres veces al año a esas funciones, sólo se certificaba una vez al año en armamento de guerra, no contemplando el armamento anti motines.

Debían resguardar el orden público y detener a toda persona que tuviera fuera de toque de queda y entregar a Carabineros, siendo parte de la misión.

En cuanto al uso de la fuerza y su nivel se puede hacer uso de la fuerza no letal para aquellos que impidan hacer la misión asignada. La escopeta antimotines era no letal.

Los militares tienen una zona de resguardo y un civil debe evitar acercarse ya que llevan armamento, si le quitan el armamento le hacen un sumario y si se acercan en demasía debe evitar, previa advertencia de detenerse o tenderse y si no son seguidas esas instrucciones debe hacerse uso de la fuerza.

En cuanto al tiempo que estuvo la víctima herida antes de ser trasladada al Hospital dice que cuando se realizan los primeros auxilios, comenzaron a llamar al Hospital y justo con ellos había personal civil y uno de ellos lo ayudó a llamar, cree que no debiera haberse demorado más de 35 minutos, media hora cree que debió haber sido. No había militares riéndose de la víctima, le prestaron auxilio, no estaba agonizando, tenía dolor, lo demostraba.

**3.- Nicolás Salazar Andaur**, cédula nacional de identidad N°17.912.588-9 Inspector de la Brigada de Homicidios Concepción de





la Policía de Investigaciones, quien previamente juramentado señaló al fiscal que lleva 14 años en la Institución. A octubre del 2019 trabajaba en la Brigada de Homicidios de Concepción, concurría al sitio del suceso, labores investigativas de homicidios entre otras. Respecto de los hechos de este juicio señala que el 22 octubre 2019 alrededor 22:30 horas se recepcionó llamado teléfono del fiscal Bianchi solicitando investigar un hecho que se ignoraba el lugar y día. Pero se contaba con un video remitido por la Fiscalía y había que verificar antecedentes del mismo. Se tomó contacto con el puesto de mando de la Defensa Nacional y se toma conocimiento que ese mismo día en horas de la tarde personal del ejército había utilizado arma antimotines y resultado de eso era una persona lesionada. Con esos antecedentes del puesto de mando se establece la identidad de la víctima, Gastón Santibáñez Palomera de 51 años de edad y el puesto de mando había identificado a quien usó el arma, el Sargento 2° acusado de estos antecedentes. La víctima tenía la calidad de detenida en dependencias de la 2° Comisaria de Carabineros de Concepción. Personal de la Brigada, a fin de constatar lesiones va al Hospital Regional de Concepción y con el DAU el facultativo consignó herida pierna derecha por proyectiles de goma, dando carácter de lesión leve. Luego por instrucción de fiscal se concurre a dicha Comisaria donde la víctima es entrevistada por otros colegas, pero tomó conocimiento de ella que en términos generales es que la víctima salía de su lugar de trabajo, iba a pie a su casa, cuando se encuentra con persona desconocida que le dice que se esconda, ya que había comenzado el toque de queda y se encuentran con personal militar. Este personal les ordena que se detengan ambos, haciendo caso uno de ellos. La víctima dice que no hace caso de una instrucción, se tropieza en una cuneta y se abalanza en una cuneta y se abalanza hacia el militar y le disparan con el arma antimotines. Dice ser detenida, controlada y luego llevada al Hospital. Parte o restos de este proyectil habían quedado en la herida.

Además, participó en la toma de declaración de Rodrigo Carrasco que era un soldado conscripto y cumplía el servicio militar, quien señaló que debido al estallido social las principales funciones era el control de lugares públicos y el cumplimiento del toque de queda que se había decretado. Salen como las 18:00 horas, se detienen en Paicaví con Barros Arana donde descienden, comienzan a caminar despejando las calles, caminan hacia Los Carrera, había gran cantidad de manifestantes, caminan hacia Las Heras cuando en un conjunto de edificios de la Remodelación Paicaví le indican que había personas transitando por el lugar con señales de mano. Señala que concurren y ven que había dos personas caminando dándoles la orden de detención para ser controlados. Señala que detiene a la persona que iba más atrás que no opuso resistencia y dio cumplimiento las instrucciones. Sin



embargo, la otra persona hizo caso omiso y se acercó al Sargento Herrera, quien en reiteradas oportunidades le dijo que se detuviera. Herrera se acercó a una zona donde hay un muro y en ese momento hizo uso escopeta antimotines a la pierna. Una Cabo fue en ayuda o colaboración del Sargento Herrera con quien realiza la detención de Gastón Santibáñez y lo trasladó al camión de detenidos. Es auxiliado de la herida y luego trasladado con custodia al Hospital de Concepción. Ya en horas de la tarde, una vez controlada la lesión de la víctima, lo trasladan a la unidad de Carabineros.

Alrededor de las doce del día, concurren al sitio del suceso, que era una plaza pública al interior de la Remodelación Paicaví, donde existe una estructura de cemento que se puede acceder por cuatro escaleras. Como se tenían imágenes de video se hace comparación y se establece lugar don la victima realiza el disparo, había pasto y un árbol y se observó mancha pardo rojiza de 23 X 16 centímetros que era concordante con lo observado en el video. Se realizan fijaciones planimetrías y fotográficas por peritos, no levantando evidencia ni otros indicios de interés.

Luego con perito balístico se concurrió al Regimiento donde se hace entrega de una escopeta de repetición marca Wuinchester calibre 12 la que habría sido utilizada por el Sargento Herrera al momento de los hechos, levantada por la perito Ingrid Luengo. En forma paralela se le tomaba declaración al imputado, quien a la vez hizo entrega de una vainilla calibre 12 utilizada en una escopeta antidisturbios y esa evidencia se sumó a la ya levantada en el regimiento y a un taco que forma parte del proyectil balístico y una posta de polímero que también se levantó con cadena de custodia que analizó la perito balístico. Remitió el resultado del peritaje donde se analizan las evidencias considerando la escopeta Wuinchester y las otras evidencias mencionadas. Tomó conocimiento de lo concluido, esto es que la escopeta era apta en mecanismo y funcionamiento y que la vainilla proporcionada por el imputado había sido disparada por la misma arma y el taco y posta corresponde a su totalidad a polímero. También remitió el informe pericial fotográfico en el que se incluyen tanto fotografías del arma incautada y del sitio del suceso. Cuando se revisó el sitio del suceso, éste estaba sin custodia y sólo se limitaron a hacer fijación fotográfica. La primera parte la hizo con la Sub Comisaria perito del laboratorio Planimétrico Karina Cabezas, fotográfico Rodrigo Figueroa entre otros.

Cuando reciben el llamado del fiscal Bianchi, lo primero que hicieron fue establecer las identidades de las personas, se tomó contacto con la Policía de Investigaciones que se encontraba en la jefatura de mando del personal militar, ya que consideraron que ya



podría haber sido informado al puesto de mando. Diligencias la realizaron en la noche del día 22 y madrugada del día 23 de octubre. Durante la noche concurren al Hospital Regional donde se categorizan las lesiones. Declaración de la víctima fue en la 2° Comisaria de Carabineros en horas de la madrugada y él no participó en ella. La víctima dentro de la declaración dice que se tropieza en una cuneta y se abalanza hacia donde está el funcionario del Ejército y es en ese momento donde se abalanza hacia el funcionario. Víctima señaló que se tropieza, cree que señala en una cuneta, no recuerda palabra exacta y en ese momento se abalanza o se inclina hacia el funcionario del Ejército, siendo en ese momento que le disparan. El video fue enviado por el fiscal de turno que solicitó la concurrencia, ya que era el único antecedente que se contaba y había que establecer la identidad y el lugar de ocurrencia del hecho. Previa exhibición de video -28 segundos- señala que lo conocía con anterioridad, siendo el que se exhibió al personal policial, lo que fue útil para visualizar el lugar físico y las personas que participaron.

Se procede a incorporar - n° 54 otros medios de prueba conforme auto de apertura- 05 fotografías acompañadas al informe científico técnico del sitio del suceso señalando que ve en la **foto n° 1**: superficie de cemento al interior del conjunto de los edificios de la remodelación Paicaví, desde calle Paicaví hacia calle Galvarino, Orompello, no hacia el río, tomada por su persona; **foto n° 2**: igual superficie de cemento con la vista hacia noreste, viendo edificios y en la parte inferior reja metálica negra y costado derecho se ve un árbol; **foto n° 3**: acercamiento al costado nororiente, viendo reja metálica negra que limita acceso edificio, en su izquierda se ve escalera y paso peatonal de cemento, en el centro se ve un árbol y espacio donde se aprecia pasto en el suelo; **foto n° 4**: se ve un poste en el centro de la imagen, atrás la reja metálica, vista contraria a la que se indicó en la primera fotografía, se ve desnivel desde donde está la superficie al piso de cemento. Siendo ese el lugar dónde se inicia el procedimiento por personal del Ejército y **foto n° 5**: es una vista del lugar donde ocurre el hecho, observando árbol y en suelo estaba la mancha parda rojiza, se ve el muro de cemento que limita el acceso al lugar donde ocurrieron los hechos.

Se le muestra - n° 46 otros medios de prueba conforme auto de apertura- dice ver **foto n° 1**: vista tomada por perito fotográfico Rodrigo Figueroa, viendo una escopeta con su correa de sujeción. El rol del oficial a cargo es dirigir en el trabajo a los peritos, ya que los peritos no realizan fotografías al azar, la importancia era establecer el uso de un arma larga y las generalidades, fue tomada en el Regimiento. Estaba presente el perito balístico Ingrid Luego, un oficial del ejército que hizo entrega del arma; **foto n° 2**: se ve el número de serie



identificadorio del arma; **foto n° 3:** detalle de la anterior; **foto n° 4:** el aza de carga de madera al costado inferior, lugar de donde se toma el arma para cargarla; **foto n° 5:** detalle de la escritura sobre el cañón de la escopeta; **foto n° 6:** vista general de la escopeta desde la otra cara del arma; **foto n° 7:** fijación del arma observándola desde el punto de carga hacia el cañón para establecer que estaba completa; **foto n° 8:** serie del armamento 424803 U.S. Reconoce además el arma de fuego ya incorporada, reconociéndola como el arma incautada y fija con igual número de serie ya aludido. Fue la que fue entregada por personal del Ejército a la perito balístico, que luego de las pericias fue trasladada a la unidad fiscalizadora de Carabineros de Concepción. Igualmente se le exhibe taco de plástico, vainilla calibre 12 entregada por el imputado al momento de prestar declaración la que se estableció por la pericia que fue disparada por la misma arma. El taco de plástico y la posta de polímero la reconoce, la que fue partida para verificar que en su interior no había más elementos. Estos últimos fueron facilitados por personal médico que fue sacada de la pierna derecha de la víctima. En **foto n° 9:** aprecia vista de construcción piso de cemento orientada desde calle Los Carrera hacia La Heras, identificando el árbol y espacio físico donde se produce el disparo; **foto n° 10:** acercamiento, en vértice izquierdo se observa escalera y al fondo el edificio y reja negra que limita acceso al edificio y al costado derecho se observa el árbol donde dispararon a la víctima. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas de día 22 de octubre; **foto 11:** vista aérea, reja metálica y al costado izquierdo al lugar donde ocurre primer contacto entre víctima e imputado, poste corresponde a la imagen vista del edificio hacia el lugar donde estaba la planicie de cemento. Sabe que se hicieron diligencias para obtener información para ver quien grabó el video, pero no tuvo frutos, ya que el personal policial no era recibido de buena forma conforme el contexto en ese tiempo; **foto n° 12:** lugar desde el cual se grabó el video, se ve el poste y en la parte inferior reja metálica y escalera que da acceso a la superficie de cemento, en lado izquierdo área con pasto y árbol que se observa en el video donde estaba el funcionario al momento de ejecutar disparo. Fue tomada desde el edificio; **foto n° 13:** mayor detalle de la imagen anterior; **foto n° 14:** orientada desde calle Galvarino a calle Paicaví, lugar de pasto donde la víctima fue herida y el lado derecho donde existe el poste y la diferencia de niveles entre la planicie, se tomaron el día 23 de octubre alrededor de las 12:00; **foto n° 15:** igual punto de la imagen anterior, pero inclinada al lugar de interés, se ve el árbol como el lugar donde la víctima fue detenida; **foto n° 16:** orientación de calle Heras a Carrera y se observa lugar de detención y lesiones a la misma y las escaleras que permite el acceso a la planicie de cemento y fue donde se encontró la mancha pardo rojiza; **foto n° 17:** lugar de ocurrencia de los hechos y se ve mancha oscura en el pasto donde la víctima cae herida y donde se



produce la detención; **foto n° 18:** mancha pardo rojiza en área de 23X16 cm en el suelo y **foto n° 19:** contra imagen de la ya observada viéndose en el fondo el edificio donde se grabó el video y donde cae la víctima, existiendo un espacio físico y más atrás existe un muro que limita el desplazamiento. Además, participó en solicitar a canales de televisión registros ya sea a través de notas o declaraciones al hecho investigado o declaraciones que haya hecho la víctima.

Se le exhibe -n° 72 y 73 otros medios de prueba conforme auto de apertura- DVD nota “ Nota Ahora noticias” respecto de la noticia gestada en procedimiento, declaraciones de fiscal al medio de comunicación y noticia de formalización, entre otros y grabaciones contenidas en DVD relativo a nota “TT Revocan prisión militar Conce” sobre noticias del hecho y contiene declaración de la víctima y revocación de prisión preventiva respecto del acusado, sustituyendo dicha medida cautelar por arresto domiciliario total con declaraciones del fiscal y defensa, siendo ambos videos los que recabó en su investigación.

No hace preguntas la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos.

A las preguntas del Consejo de Defensa del Estado señaló que ingresó a la institución el año 2010, y en el 2015 pasó a la Brigada de Homicidios y actualmente está en Coihaique. En el ámbito formativo durante los tres años de escuela tienen clases de criminalística y un año más relativo a especialista en homicidios y delitos violentos cursado el año 2018. Los proyectiles fueron múltiples formado por postas de polímero “pelotitas redonditas” dentro del proyectil y su contenedor que están en el interior de la vainilla. No se comunicó directamente con la víctima.

A la defensa señaló que entrevistó a don Rodrigo Carrasco, era un militar que estuvo en el lugar de los hechos, momentos antes del disparo, quien señaló que el Sargento Herrera le señaló en varias ocasiones que se detuviera y señor Santibáñez no se detuvo. Obtuvo el taco y a la vista una posta extraída del cuerpo de la víctima que era integra de polímero sin metal. No le tomó declaración al imputado, pero si sabe que entregó voluntariamente la vainilla.

**4.- Rodrigo Chinkes Goldstein,** Psicólogo, quien previamente juramentado señaló a las preguntas del fiscal ser funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos sede Región Bio Bío, siendo sus funciones en octubre de 2019, llevar a cabo actividades de promoción oficina regional, monitoreo, observación de situaciones de manifestaciones, cumplimiento de los protocolos en control de orden público, asistencia a unidades penales o comisarias. El 22 de octubre



existían muchas manifestaciones ocurriendo hace días y en ese contexto hacían actividades en terreno, las observaban y la interacción con las fuerzas y manifestantes concurriendo a distintos lugares céntricos de Concepción. Era práctica que posterior a toque de queda salieran y ver que ocurrían en dicho contexto. Alrededor de las 06:30 de la tarde salieron e iniciaron recorrido por calles Orompello, Ongolmo llegando a la intersección de calle Ongolmo con Carrera y pasado las 7:00, 7:15 de la tarde observaron que ya habían ocurrido las manifestaciones y caminaron en dirección a rotonda Paicaví. Se percata que en dirección hacia Talcahuano, unos metros más allá habían camiones militares y funcionarios a pie que se movían lentamente, cruzaron Avenida los Carrera en dirección hacia Talcahuano y se quedaron entre Carrera y Bulnes, percatándose a medida que avanzaban que los camiones se movían lentamente como si le taparan la visión de algo. En ese contexto cruzando Paicaví un poco hacia la derecha habían personas identificadas como reporteros gráficos que le hacen unas señas como que se acerquen, miran hacia ambos lados de Paicaví, ya no habían manifestaciones y había una señora que le dice que necesita llegar al otro lado a su domicilio y con su compañero deciden cruzar con ella y era lo que le querían mostrar. La jefa de la oficina Carolina Chang iría a conversar con la patrulla de militares y con su compañero cruzan la calle, llegan al otro lado y le dicen que viren hacia Bulnes y ven a una persona en el suelo y un grupo de militares alrededor y un militar agachado sobre esta persona. Se acercan, y ven que le hacían algo en la pierna y tenía al parecer una herida. Ya cerca, ve el pantalón rasgado o herida que supusieron que era de bala y le estaban haciendo una especie de torniquete. Señala que dentro de su labor esta conversar con las víctimas de posibles lesiones por agentes del Estado, se acercan a la persona y se identificaron para obtener un relato, le preguntaron cuál es su nombre tenía temor y mucho dolor, muy asustado por la situación, rodeado por militares de servicio. No les quiere decir su nombre y tampoco quiere recibir la tarjeta diciendo que no quiere nada, se retiran y de distancia observan la situación. Recuerda que los reporteros le dijeron que habían llamado a una ambulancia y que ya venía en camino esperando que eso sucediera. Llegó la ambulancia y se lo llevan a esa persona de la que no sabían su nombre. Cruzan la calle se reencuentra con el equipo y la jefa regional Carolina Chang señaló que habló con alguien costándole mucho, que le habían dicho que había una persona herida producto de un disparo ya que se había abalanzado sobre un funcionario militar, le informan lo visto y se retiran del lugar. Continúa ese día sus labores, fue a la 1° Comisaria a ver los detenidos y alrededor de la 11:00 de la noche se va a su domicilio. Estando ahí, es donde ve por redes sociales el video de la persona que le disparan y concluyen que era la misma persona. Al día siguiente, hace gestiones con el Hospital Regional, ya que había gestiones de información de



personas que podrían llegar, lesiones sufridas y le informan los datos de esta persona y se logra individualizar como la persona que habían visto. Los reporteros gráficos le habían dicho que habían tomado unas fotos y pidió que se las enviaran. Conforme protocolo deben contactar a la persona y tomar un relato de los hechos y el equipo jurídico ve que acciones se pueden tomar con posterioridad para ver la posibilidad de presentar una querrella. Llegan al lugar como las 7:10 7:15 a Ongolmo con calle Carrera el contexto era toque de queda con muy pocas personas en las calles y tránsito vehicular se notaba que se habían producido manifestaciones, restos de barricadas, resto de basura, restos humeantes. Por el sector donde estaban los camiones no había casi nadie caminando y ya no había manifestaciones en el momento. Ve camiones militares y personal militar a pie, 10 o 15 militares alrededor de los camiones. Una vez que cruzan la calle, ve el grupo alrededor de la víctima y uno agachado sobre ésta y dos o tres alrededor, otros en el perímetro un poco más lejano. El video lo vio en publicaciones de redes sociales, aparecen dos videos uno muy corto, dos ángulos de la misma situación, el primero ve a una persona de pie avanzando lentamente y un funcionario militar que retrocede lentamente con su arma apuntándolo, en un momento dispara, se ve caer al civil, lo agarra y llega otro funcionario y lo toman. En el video más largo se ven los momentos previos donde al parecer esta persona estaba agazapada y caminan y esta persona de civil camina con ropa clara, camina, justo al momento del disparo está tapado y luego ven como el funcionario junto a otro lo reducen, lo zamarrean de un lado a otro, lo amarran con amarres de plástico y lo llevan con las manos atadas por la espalda hacia el lugar donde lo encontraron posteriormente supone. Se le exhiben video ya incorporados, respecto del primer video dice que es el video que vio esa noche reconociendo a la persona herida como la que vio, por las vestimentas y por la herida de la pierna. Siendo la persona con la que trataron de conversar y por las gestiones en el Hospital Regional trataron de identificar siendo Gastón Santibáñez Palomera. Recuerda que alguien del equipo lo envía al grupo de WhatsApp y en paralelo lo vio en distintas cuentas de redes sociales que estaban dedicadas a difundir información de hechos de violencia contra manifestantes.

Luego de ver el segundo video dice que lo conocía por redes sociales viendo la Remodelación Paicaví, sector entre Paicaví y Janequeo caminando esa tarde por Ongolmo hacia Carrera y luego por esta última y Paicaví hacia Talcahuano y luego cruzan al sector de donde se ven los camiones, eran cinco personas, la jefa regional, dos abogadas y sicóloga. En general se hacen labores en dupla y le tocó hacer dupla con Harum Oda. Observa los momentos previos a lo que vieron cuando llegaron al lugar, ve como lo reducen, lo dan vuelta le



amarran las manos a la espalda y los trasladan hacia el sector de Avenida Paicaví, viendo el video desde arriba, viendo los camiones y funcionarios militares que vieron desde la vereda. Los camiones cuando los ve estaban en el mismo lugar en el video de cuando los vio. Había un grupo de cinco o siete personas que estaban como a diez o quince metros hacia Los Carrera que ya habían visto en días previos y sabían que eran reporteros gráficos, no necesariamente de medios tradicionales, sino independientes y son los que le hacen señas, tienen una breve conversación de que había una persona herida y habían tomado fotos y pidió si se las podían enviar. Luego, varios meses después uno de ellos les envía un correo con link con treinta imágenes de las que ellos habían tomado en ese momento. Las descargó y se las compartió dentro del equipo y se la entregó a Karen Torres para que hiciera lo que fuera pertinente.

Se incorporas fotografías -N° 76 otros medios de prueba conforme auto de apertura- dice ver en **foto n° 1:** es el interior del camión militar con personas detenidas, no puede precisar si es el camión que estaba en ese momento, con las personas en el suelo con amarras plásticas en la espalda. Hay funcionarios militares custodiando, siendo lo que vio como situaciones de este tipo en ese tiempo. Los funcionarios no utilizaban esposas, sino que como medidas de contención usaban amarras plásticas que se ven para sujetar cables; **foto n° 2:** funcionario militar que está en el lugar donde ocurrieron los hechos que identifica por la escalera y grafitis de la misma; **foto n° 3:** la persona que vio en ese momento que estaba en el suelo en la calle bajando de la vereda con los funcionarios militares a su alrededor uno de ellos haciendo algo en la pierna que supo que era un torniquete, en la Avenida Paicaví en calzada dirección Talcahuano justo bajando de la vereda cerca de la escalera en ruinas en la Remodelación Paicaví; **foto n° 4:** igual persona que está en el mismo lugar viendo la herida en su pierna derecha y los funcionarios alrededor y uno agachado sobre su pierna; **foto n° 5:** se ve la cabeza de la persona en el suelo y una mano que sujeta algo en la cabeza y otra mano que toca la cara y las piernas de un funcionario militar; **foto n° 6:** funcionario de salud paramédico, ambulancia del Hospital Regional de Concepción que tiene sobre la camilla a la misma persona y los funcionarios militares detrás de la camilla al igual que los camiones y la escalera con rallados a que hacía referencia. En ese momento se habían alejado en dirección hacia Carrera donde estaban los reporteros gráficos, viendo la ambulancia ese día que llegó desde la Avenida Los Carrera, quizás por avenida Paicaví directo del Hospital; **foto n° 7:** ve a la víctima del disparo que está siendo llevado por dos funcionarios militares se imagina con las manos amarrados a su espalda al ser soportado desde ahí por los funcionarios militares y otros funcionarios militares atrás, uno lleva una





bicicleta suponiendo por los rallados que es el mismo sector de la explanada de la Remodelación Paicaví; **foto n° 8:** se observa casi lo mismo de la imagen anterior, con una mueca en la cara que puede ser de dolor siendo sujetado por los funcionarios militares; **foto n° 9:** momentos cercanos al anterior siendo la misma persona llevada por los funcionarios militares; **foto n° 10:** imagen muy parecida, persona es llevada desde otro ángulo; **foto n° 11:** se ve a la misma persona que va siendo llevada desde otro ángulo, quizás porque habían avanzado y aparece la mueca de la persona que puede ser de dolor, se ve detrás de la víctima a un fotógrafo de civil, funcionarios militares más atrás; **foto n° 12:** instantes después, se ve a la misma persona siendo llevada con cara de dolor; **foto n° 13:** varios funcionarios militares reunidos y al centro una persona de civil con casco con cámara que cuelga y se observan diez funcionarios militares en el sector; **foto n° 14:** se ve a la persona que sufrió el disparo en el suelo, en el mismo lugar donde lo vieron, se ven las piernas de los funcionarios que lo rodean, las gafas en el suelo al lado suyo y tiene levantada una mano al parecer ya no tenía las manos amarradas en la espalda; **foto n° 15:** igual persona en el suelo en Paicaví dirección a Talcahuano, se ve sangre de su pierna, no se ve la herida, ya que una mano de un funcionario cubre la herida, funcionario agachado sobre la víctima y persona civil a un metro que al parecer tiene una cámara de foto en su mano; **foto n° 16:** persona en el suelo, pantalón rasgado, funcionarios en posición similar, camiones y funcionarios militares en el fondo; **foto n° 17:** similar, persona en el suelo y sangre en la pierna con el pantalón rasgado, funcionarios agachados sobre él, camiones detrás; **foto n° 18:** otro ángulo con la cámara más cerca del suelo con la persona que recibió el disparo, la sangre y un funcionario haciendo algo, un funcionario con una mano sobre el pecho de la víctima y la persona con los ojos cerrados; **foto n° 19:** similar a la anterior, dos funcionarios agachados; **foto n° 20:** igual situación, persona en el suelo se ve pierna derecha descubierta ensangrentado y un funcionario sobre él, camión militar en el fondo; **foto n° 21:** otro ángulo de la persona que está en el lugar, sobre el suelo cuatro funcionarios alrededor del sujeto, camión militar y varios funcionarios sobre la calzada, identificando donde se situaron más cerca de la víctima, estuvieron al lado de la víctima a centímetros y luego se dirigieron hacia la rotonda Paicaví, en la foto se ve en dirección a Talcahuano mirando a calle Bulnes; **foto n° 22:** misma persona en el suelo con las manos levantadas, al parecer dos funcionarios sobre él; **foto n° 23:** igual persona en el suelo pero un funcionario sujeta la cabeza de la víctima sobre sus manos y se puede ver que tiene sobre su pierna derecha un parche o venda; **foto n° 24:** imagen similar, con la cabeza ya girada; **foto n° 25:** situación similar, aun con la manos del funcionario militar en la cabeza más cerca del



suelo, la persona con las manos levantadas y se ve la mochila que pudiere ser de don Gastón Santibáñez; **foto n° 26:** parte del cuerpo que recibió el disparo, no se ve su cabeza y cinco funcionarios alrededor más el que esta agachado sobre su pierna y camiones militares de fondo; **foto n° 27:** imagen similar pero con la mochila puesta como si fuere una almohada en la persona herida y se le ve la venda o parche. Refiere que estaba de día en el mes de octubre a las 7:30 de la tarde con buena visibilidad, día despejado; **foto n° 28:** similar, leve cambio del ángulo de la cámara; **foto n° 29:** persona en el suelo con mochila en su cabeza, ya no está agachado el funcionario militar sobre su pierna, otros funcionarios de pie y un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos identificado como Harum Oda, quien porta la chaqueta institucional y bolsa o mochila con letras blancas que dice I.N.D.H y un casco que en esos momentos utilizaban como elementos de protección, pantalón oscuro y zapatos café. Él tenía la misma chaqueta y el mismo casco y **foto n° 30:** ve la persona que estaba en el suelo, cara tapada por los funcionarios al parecer con una botella de agua sobre su mano izquierda, el compañero del Instituto portando la credencial de nombre Harum Oda y funcionarios alrededor, estando la persona muy afectada. Refiere haber tenido un contacto de seguimiento para reforzar la participación de la persona en el proceso judicial, evaluar parte social a fin de hacer derivaciones si corresponden a través de un programa de acompañamiento a la víctima. Se le asigna este caso, monitoreando, manteniendo conversaciones telefónicas frecuentes una vez al mes y el año 2021 pierde contacto telefónico apareciendo que no está disponible y realizó una visita domiciliaria si mal no recuerda en diciembre de 2021, va dos veces a su domicilio, una vez conversa fuera y otra vez dentro de una pieza que arrienda en una pensión para ver cómo ha estado, resolver dudas, ver si necesita algo. Realizando gestiones de buscar redes de derivación en aspecto de salud mental ya que se habían generado este tipo de problemas se contactó con la URAVIT, la Municipalidad o redes de atención primaria.

La querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene preguntas.

A la querellante Consejo de Defensa del Estado señaló que al lugar llegó a las 19:30 horas aproximadamente y observó un grupo como reporteros que pueden haber sido seis o siete personas y si habían civiles circulando sólo recuerda a la persona que cruza la calle y tenía miedo de cruzar. No viendo enfrentamiento entre civiles y militares. Había más funcionarios del Ejército, que civiles en proporción.

La defensa no realizó preguntas.



## II.- Prueba Pericial:

**1.- Ingrid Luengo Avello**, perito en armamento, perteneciente a la Sección Balística de LACRIM Concepción de la Policía de Investigaciones, respecto de su peritaje N° 255/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019 incorporada de conformidad al artículo 331 letra e) en relación a letra a) del Código de Procedimiento Penal atendida la licencia médica de la perito que señala en cuanto a las operaciones practicadas que la evidencia de carácter balístico fue levantada en el Regimiento Chacabuco del Ejército de Chile, entregada mediante Acta de entrega voluntaria y posteriormente trasladada a la sección balística del LACRIM Regional Concepción periciando NUE 5950411 consistente en un arma de fuego tipo escopeta de repetición, con capacidad para alojar cinco cartuchos marca Winchester, calibre 12, fabricada en Estados Unidos, serie n° 424803 con culata y empuñadura de madera y una correa transportadora. En cuanto a su estado de conservación presentaba desgaste en su recubrimiento externo y en cuanto a su estado mecánico presentaba todas sus piezas internas, operando de manera sincronizada. Asimismo, se procede a incorporar las siguientes fotografías que forman parte de dicho peritaje contempladas en el n° 44 del auto de apertura consistente en **foto n° 1 y 2**: arma incautada. Asimismo, se deja constancia que se realiza una inspección ocular a la Remodelación Paicaví realizando una fijación fotográfica y planimétrica del lugar donde habrían ocurrido los hechos de violencia innecesaria del artículo 330 del Código Militar, sin que se levantaran evidencias balísticas.

También se pericia NUE 5952226 consistente en una vainilla dubitada, constitutiva de un cartucho anti motín y/o antidisturbios, calibre 12 con inscripción "TEC", siendo su estado general: vainilla que participó de un proceso de percusión y disparo con un arma de fuego del tipo escopeta del mismo calibre encontrándose con su capsula iniciadora percutida. Incorpora **foto n° 3**: consistente en taco plástico de cartucho antidisturbios; **fotos 4 y 5**: consistente en los restos de cartucho y posta de polímero de color negro correspondiente a un proyectil esférico, el cual habría sido parte constitutiva de un cartucho antidisturbios fabricado para ser usado en armas de fuego del tipo escopeta.

Se realizó prueba de funcionamiento obteniendo el respectivo proceso de percusión y disparo, logrando de estas operaciones dos vainillas percutidas. A su vez, se procedió a comparar microscópicamente la vainilla dubitada del calibre 12, con la vainilla obtenida en la prueba de funcionamiento con el arma de fuego tipo escopeta Winchester periciada, presentando similitudes en sus características de clases y también individuales, lográndose determinar que la vainilla dubitada fue partícipe de un proceso de disparo con el arma de fuego del tipo escopeta, marca Winchester periciada. Se realiza estudio del Taco de



18mm de diámetro basal y una longitud de 40 mm calibre 12 en estado semi deformado. Además, se realizó un análisis y estudio de posta de polímero, consistente en una esfera de 0,73 gramos de masa total de diámetro de 8mm en buen estado, refiriendo que en su interior no posee ningún elemento, siendo elaborado en su totalidad de material polímero. Se indica asimismo, que de acuerdo a la información recabada los cartuchos de calibre 12 antidisturbios de 8mm de diámetro, poseen en su interior 12 postas de polímero. Siendo su propósito disuasivo, ya que las postas penetran poco y se frenan muy rápido, tienen poca energía debido a su poca masa, no tienen gran alcance y tienen menos carga de proyección (pólvora).

Como conclusión indica que de acuerdo a las operaciones practicadas se puede concluir: **1.-** Que el arma de fuego convencional de tipo escopeta marca Winchester serie n° 424803, en su actual estado de conservación y funcionamiento, se encuentra apto como tal, toda vez que fue capaz de dar inicio a dos procesos de percusión y disparos; **2.-** La vainilla dubitada que formó parte de un cartucho antidisturbios del calibre 12, según la respectiva comparación microscópica, se logró determinar que fue parte de un proceso de disparo con el arma de fuego tipo escopeta periciada señalada anteriormente; **3.-** Se realizó pericia al taco que formó parte de un cartucho antidisturbios, el cual según su diámetro basal, corresponde al calibre 12, generado de un proceso de disparo con un arma de fuego del tipo escopeta. Y, **4.-** Que la posta de polímero, de medida de 8 mm de diámetro fue parte constitutiva de un cartucho antidisturbios, en el cual no se observan en su interior elementos ajenos al polímero del cual fue confeccionado en su totalidad. Conjuntamente, se procede a incorporar como medios de prueba el arma de fuego tipo escopeta de repetición, la vainilla dubitada y el taco plástico. (Individualizados en los n° 77 ,78 y 79 del auto de apertura)

**2.- Gonzalo Paredes Gutiérrez,** cédula Nacional de Identidad N° 13.308.275-1, quien dice ser perito audiovisual de la Sección de Sonido y Audiovisual del LACRIM Concepción, quien concurre al tenor de su Informe Pericial Fotográfico 21/021 de fecha 28 de octubre del 2021.

Refiere que la Brigada de Homicidios y Fiscalía de Concepción solicitó realizar peritaje audiovisual de dinámica de los hechos anteriores y posteriores al disparo que aparece en las grabaciones, relentización y mejoras de imágenes.

El día 21 de octubre del año 2021 retira evidencia que contiene un pendrive de 16 gigas, se realiza pericia y tiene dos archivos formato MP4 observando grabación con dispositivo móvil operado desde altura de un inmueble donde se observa el procedimiento de militares en un block de departamento o similar. Se observa el procedimiento de militares, a uno de estos que se dirige apuntando a un sujeto que estaba en un arbusto detrás de un poste, en dos oportunidades, sujeto sale con



una mochila, con gafas oscuras, sale y en el audio se oye “yo vengo de la pega” y se escucha “tírate al suelo mierda” el militar lo apunta con el arma y se oye un disparo y el sujeto de toma la pierna comienza a cojear, lo toman bruscamente de la mochila, lo tiran al suelo, le atan sus manos y dentro de este forcejeo se cae una especie de lápiz o similar al suelo. Luego lo toman cojeando y entre los dos se lo llevan y sale del encuadre de la cámara. Se realiza una secuencia de video con los hechos de interés criminalístico, se relentizan cuatro segmentos de videos. La calidad es con bastante compresión no observando detalles nítidos, si colores, vestimentas y formas. Luego se integran en archivo PDF y en las conclusiones se observa que un militar efectúa un disparo y hiere en la pierna al sujeto, se obtiene una secuencia de video más cuatro segmentos relentizados.

A las preguntas del fiscal señaló que trabaja en LACRIM Temuco hace ocho años y ha realizado más 150 o 200 peritajes audiovisuales, trabajando desde el año 2000 en su profesión.

El objeto de la pericia era ver la dinámica de los hechos, de los momentos anteriores y posteriores al disparo y se logra visualizando imágenes y realizando una secuencia de video para unir los segmentos y graficar de mejor forma la dinámica de los hechos. Se amplían y relentizan.

Respecto del audio, los archivos de video vienen con audio y cuando analizan la grabación utilizan audífonos que acentúan este audio y es a través de estos que perciben de mejor forma lo señalado. Se escucha “vengo de la pega” y “tírate al suelo mierda” y luego viene el disparo y es donde el sujeto se toma la pierna. Tiene software forense donde visualizan imágenes y pueden aplicar filtros sin pérdida de calidad, es un proceso de retraso de cuadros el llamado “cámara lenta”. La NUE 5224480 de la evidencia (71) es un pendrive que revisó, con dos archivos de video. El primer archivo se llama militar dispara a ciudadano chileno y el segundo es Ministerio Público, el primero dura 28 segundos y el segundo que dice VID es de 5 minutos 09 segundos aproximados.

La fuente de las grabaciones se extrae de dispositivo móvil y se copian a algún soporte de datos.

Dice que el reporte narrativo es donde integran una secuencia de video y los cuatro segmentos de video relentizados.

Se le exhiben video ya incorporados -N° 71 otros medios de prueba- 2 videos, reconociendo ser los que perició, los que no presentaban adulteración, tiene un tiempo determinado, es decir no está editado o intervenido o que se observe algún corte hecho con un software de edición.

Incorpora otros medios de prueba n° 74 -CD Lacrim Temuco- que contiene secuencia de video de 1 minuto 36 segundos que es un resumen de ambos videos y se unieron los hechos de interés



criminalístico, observándose ambos videos aplicado el software coincidiendo la secuencia cronológica de los hechos. Se observa a los militares en un procedimiento y se ven algunas personas en el suelo y uno de ellos se dirige a donde está el sujeto detrás de un poste y él lo apunta en dos oportunidades y el sujeto sale y se van hacia el muro y es ahí donde escucha vengo de la pega y tírate al suelo mierda. Es ahí donde viene el disparo, se toma de la pierna y luego lo toman los dos funcionarios y se lo llevan hacia los carros se imagina, ya que luego se pierde el encuadre. Se relentizaron cuatro secciones de video, para acentuar las acciones en cámara lenta, no pasando por los cuadros normales y se deja a 10 o 12 cuadros por segundo los que son exhibidos en audiencia. Se relentizó la acción de cuando le atan las manos del primer video y también cuando lo toman y lo sujetan, ya con las manos atadas y posteriormente se lo llevan donde están los carros saliendo del encuadre de la cámara. Previa exhibición del video más extenso -n° 71 otros medios de prueba- en donde indica el militar que disparó lo que se puede verificar por el seguimiento de la acción. El tercer video relentizado refiere que es cuando lo toman los dos funcionarios a la persona que estaba en el suelo y luego se pierde del encuadre de la cámara. El cuarto video de ralentización se observa como o llevaban y cojeaban hasta que sale del encuadre de la cámara.

A las preguntas de la querellante Consejo de Defensa del Estado señaló que tiene carrera antes de televisión en productora de televisión, productoras locales en Concepción, titulándose el año 2000 en DUOC. UC. de comunicador audiovisual con ocho semestres cursados.

A las preguntas de la defensa señaló que el pendrive traía dos archivos sin fecha u horario en display de pantalla, no conociendo la persona que lo grabó o del dispositivo que se grabó, sólo le llegó el pendrive. Tampoco conoce la distancia desde donde se grabó, sólo consignó que fue en altura. No conoce la distancia exacta, sólo que fue grabado en altura, no siendo planimétrico, sólo una apreciación visual, tampoco puede determinar la altura. Los videos los segmentó y compaginó para hacer un resumen y dejar sólo lo de interés criminalístico.

Agrega que generalmente le llega la evidencia en NUE, y les llega el físico y el contenido de los soportes y eso es lo periciado conforme el oficio. El origen del video está a cargo de infoingeniería, ellos sólo ven la parte audiovisual. Si tenía mayores antecedentes como distancia, origen, día y hora hubiera sido mejor. Vio los dos videos, escuchó que la persona era sindicada, pero el hecho de interés criminalístico era cuando se le disparó al sujeto. Sabe que había toque de queda. En ese momento cuando hizo el peritaje sólo se centró cuando se le disparó. No era de interés criminalístico que fueran sindicadas.

En la primera parte del video hay dos personas y una de ellas se tiende al suelo, sabe que para detener hay que reducirlas. Él no ha



tomado gente detenida al ser profesional. Una persona no se tira al suelo y el militar baja corriendo hacia la persona y la persona camina hacia el militar y ese retrocede pasos que no puede determinar. Se ve que esta una baranda el militar, que apunta hacia abajo lo que no le pareció de interés criminalístico, pero indica que el investigador policial es el que determina, sólo hacen lo que le solicitan, ya que no es el oficial investigador. Entre que se tropieza y el disparo pasa menos de un minuto y en su análisis no era de interés criminalístico. Respecto de la cantidad de pasos tampoco para él era de interés criminalístico y no los contabilizaron. Ve la acción que se va avanzando. Que el militar va avanzando con la escopeta hacia abajo, tampoco dejó constancia en su peritaje. Refiere que en la primera sección ve que el arma va hacia abajo, no puede observar detalles nítidos como el dedo con que va a percutir el arma. Refiere que el audio viene en el archivo de video que viene con pista de audio y dicho audio se grabó con el mismo dispositivo de grabación de imagen a distancia que no puede determinar. Ante la pregunta de lo que eventualmente se hubiera escuchado anterior a las dos frases aludidas no le pareció de interés criminalístico, sólo se abocó al hecho del disparo. La persona va en dirección hacia el militar, existiendo uno que se tiende y sólo se abocó a la persona que va hacia donde se produjo el disparo. La interacción inicial no le pareció de interés criminalístico.

**3.- Carla Stefanía Aldana Saavedra**, cédula nacional de identidad N° 14.533.287-7 médico legista, quien declaró al tenor de su Informe de Lesiones N°VIII-CONCE-L-808/2019 de fecha 23 de octubre de 2019 en donde refirió que a las 11:30 horas examinó en el Servicio Médico Legal a Gastón Santibáñez Palomera de 50 años de edad, realizó anamnesis y el examinado le refirió que el día anterior cuando venía de su trabajo a las 15:30 horas se encontró con una marcha donde habían personas en una protesta y fue rodeado por unos militares. Que uno de ellos le disparó a 20 centímetros de distancia desde la salida del cañón del arma hasta su cuerpo, lesionándolo en el muslo derecho. Refirió que fue atendido por personas de alrededor y llevado al Hospital de Concepción. Respecto de la víctima tuvo a la vista hoja pre hospitalaria del SAMU a las 19:24 y DAU del Hospital Guillermo Gran Benavente del 22 de octubre a las 19:41 horas en que se consignó la presencia de herida en muslo derecho que pasó a cirugía menor y se obtuvo el taco y un perdigón. Previamente se le había tomado radiografía del mismo segmento donde se consignó múltiples perdigones. Al examen físico no pudo valorar la lesión, ya que estaba cubierta con gaza que cubrió el muslo derecho con abundante impregnación de secreción hemática con sangre y líquido amarillo. La conclusión fue que correspondió a lesión de carácter de mediana gravedad que debiera sanar salvo complicaciones entre 16 a 25 días con igual tiempo de incapacidad compatible con el relato.



Luego se le pidió hacer Informe Médico legal 14-2020 “Examen médico conforme protocolo de Estambul” de 10 de enero de 2020 respecto de la misma víctima examinando el 07 de enero de 2020 bajo dichos preceptos a Gastón Santibáñez Palomera donde refirió con más detalles, salvo en donde rectificó hora al decir que los hechos habían sido a las 17:30 horas, repitiendo el resto del relato que había recibido impacto a 20 centímetros de distancia, llevado al Hospital Guillermo Grand Benavente. Tuvo a la vista documentos, también observados en la primera atención ya aludida y atenciones posteriores del SAR Tucapel de Concepción de 02 de noviembre de 2019 en donde se registró la herida en el muslo y curaciones del 07 de noviembre, en donde también se realizó otra curación con derivación de ese mismo día al Hospital Guillermo Grant Benavente. Hoja de derivación en donde también se diagnosticó herida en el muslo derecho. Además, tuvo a la vista atención de 27 de diciembre de 2019 por siquiatra con tratamiento farmacológico con antidepresivos e informe biomédico de 02 de enero de 2020 en donde se consignó la entrega de ayudas técnicas que consiste en bastón ortopédico y la indicación de iniciar kinesioterapia motora. Al examen físico, se observó una cicatriz en el muslo derecho cara anterior de 2,4 centímetros deprimida, es decir socavada, más bajo que la piel, color rosado con hipotrofia muscular del miembro inferior derecho. Se realizó toma de fotografía y de acuerdo al protocolo de Estambul concluyó que de acuerdo a documentos médicos, examen físico y anamnesis la lesión es diagnóstica de acuerdo a la dinámica y al objeto causal. Luego hizo una Ampliación de Informe de Lesiones 14-20 de fecha 24 de marzo de 2020 respecto de la víctima; donde se le adjuntaron antecedentes clínicos, sin la presencia del examinado de los cuales como documentación nueva destaca que presentó atenciones del CESFAM del SAR Tucapel en donde se realizó una interconsulta para medicina física del Hospital Guillermo Grant Benavente y una atención médica anterior del 24 de octubre de 2019 de la Mutual de Seguridad en donde se describió un gran edema peridisional de la herida del muslo derecho.

En la ampliación se le solicitó dar respuesta a la secuela o imposibilidad para trabajar donde con los antecedentes obtenidos y evaluación realizada el 07 de enero de 2020 determinó secuela funcional temporal, por lo que se sugirió reenviar una vez finalizada la terapia y tratamientos médicos para examen de término de lesiones el que se realizó como informe de ampliación del 14-20 de 30 de abril de 2020. Donde examinó al paciente el 24 de abril de igual año del cual se anexó la resolución exenta n° 142 del 16 de enero de 2020 de la Comisión Médica de la COMPIN Concepción en donde se determinó una discapacidad física del 30%. Al examen físico se mantenía observaciones con hipotrofia del musculo, tanto del musculo como de la pierna derecha con similares características de la cicatriz con una





potencia muscular disminuida con una clasificación de 4 de 5 como máximo con dificultades para deambular, aún con bastón ortopédico y dificultad en subir y bajar escaleras. Concluye que presentó una secuela funcional permanente del miembro inferior derecho.

A las preguntas del fiscal señaló que evacuó cuatro informes en este caso, el primero lo hizo al día siguiente de los hechos y concluye que la lesión era de mediana gravedad, ya que tuvo a la vista atención pre hospitalaria otorgada por la ambulancia que llega al lugar con personal técnico paramédico y da la impresión inicial y realizan maniobras mientras se traslada a un centro asistencial de mayor complejidad. El DAU donde fue atendido con posterioridad en el Hospital Regional donde se categorizó como C2 (C1 es el más grave) y se consignó signos vitales, levemente hipertenso y el resto sobre valores normales con herida en el muslo sangrante con indicación de toma de radiografías. Correspondió a una herida por perdigones, contuso erosiva sangrante. En el Hospital se le realizó radiografía donde se describió múltiples perdigones, reciente provocada por un arma de fuego, siendo los objetos esferas metálicas, perdigones y junto con ello la obtención en cirugía menor de este taco que también le da fundamento que es por arma de fuego coincidente con el relato del examinado. Que medio una distancia de 20 a 30 centímetros desde la boca del cañón a la superficie corporal, ya que el taco se incrustó en su herida y por ello se realizó la cirugía para retirar este cuerpo extraño y evitar alguna complejidad infecciosa y se le extrajo con anestesia local. Conforme descripción radiografía y junto con registro que se sacó un perdigón, la lógica indica que quedaron más en el cuerpo. En atención del SAR Tucapel registró toma de radiografías por presencia de perdigones. Cuando se entrevistó con la víctima éste le indicó que venía de su trabajo el 22 de octubre a las 15:30 horas con una mochila y haber pasado desde su lugar de trabajo a su domicilio, encontrándose con la marcha y siendo detenido por este grupo de funcionarios del Ejército recibiendo el impacto en el muslo, cayendo, siendo auxiliado por personas que estaban a su alrededor y siendo atendido por el personal del SAMU. Recuerda que dijo que lo habían dejado tirado en la calle, no recordando mayor detalle.

A fin de refrescar memoria se le exhibe parte de su primer informe recordando que le dijo que había varias personas que empezaron a “chiflear” y que dijera que se había caído. Señaló que eran de mediana gravedad con entre 16 a 25 días de incapacidad. La lesión era explicable por trauma contundente y el tiempo a recuperarse consideró que era de mediana gravedad. Refrescada memoria agrega que la lesión era explicable por trauma por proyectil balístico de alta energía, es decir el disparo a corta distancia por arma de fuego con la presencia del proyectil y taco en el muslo y por alta energía por el daño y sangrado en la piel y partes blandas.



Respecto del segundo informe conforme protocolo de Estambul - torturas y otros tratos crueles y degradantes vigente desde el año 99 indica que empezó a ponerse en práctica por el Servicio Médico Legal el 13 de diciembre de 2011 donde las directrices desde la valoración médica establece la recopilación de antecedentes de los hechos donde hay una víctima que ha tenido algún hecho investigado por agentes del Estado. La documentación médica y anexos médicos lo que junto al examen físico que se realiza a la víctima se debe concluir y se puede catalogar en cinco opciones, siendo la gran diferencia con el informe de lesiones. Vinculación o concordancia de todos los antecedentes recopilados con las lesiones físicas que puede ser: sin concordancia, con una relación con hechos presentados, con una firme relación, es decir que pudo ser ocasionado por el hecho señalado por la víctima pero puede ser por otro; catalogado como típica, es decir por ese hecho, pero con otras causas más acotadas y en el máximo de la vinculación es que todo lo aportado es diagnóstico de los hechos con el examen físico. En este caso concluyó que la lesión era diagnóstica en cuanto a los hechos, la temporalidad, dinámica y el objeto causal, siendo la máxima categoría de vinculación, ya que es diagnóstica, es por ese hecho y no por otras circunstancias. Respecto de la anamnesis Gastón Santibáñez refirió con más detalle de lo ocurrido el 22 de octubre de 2019, señalando que los hechos fueron a las 17:30 en plaza Condell en contexto de una marcha con muchas personas y periodistas. Que un joven le había dicho que se escondiera y escuchó de un edificio una señora dijo "ahí esta escondido" los militares lo rodearon y recibió el impacto, le revisaron la mochila y el examinado piensa que deben haber pensado que llevaban bombas molotov, pero vio que llevaba zapatos de seguridad y su ropa de trabajo que quedaba en Aníbal Pinto con Manuel Rodríguez. Iba a su casa que quedaba en calle Janequeo, haciendo un relato detallado de la ayuda posterior, compresión de herida, que lo llevaron en ambulancia y en el Hospital llegó personal del Ejército y una persona le ofreció sacar una foto de la herida y lo sacado fue lo que le mostró en donde había una mano con un taco y un cuerpo esférico metálico plateado. Luego lo habían llevado a una Comisaria de carabineros, que había habido un altercado entre militares y carabineros y fueron éstos quienes lo llevaron a su domicilio y le habían dado una pastilla para el dolor.

Prevía exhibición de su informe y a fin de refrescar memoria señaló que la víctima dijo que estaba rodeado de seis militares que se estaban riendo, lo esposaron, uno de ellos le puso el pie en la cabeza y estuvo así una hora y media, mientras sangraba y estaba con mucho dolor y que uno de los militares le dijo "dile que te caíste o sino vamos a tener problemas los dos." Las fotografías que tuvo a la vista se las mostró el examinado desde su teléfono celular, reconociendo evidencia ya incorporada -N°52 de auto de apertura foto 1 y 2 - en donde refiere



ser las imágenes presentadas por el examinado en donde se observa herida abrasiva redonda, se podía ver parte plástica del taco de la munición en la primera foto y de la mano enguantada mostrando el taco de la munición con su parte metálica impregnada con sangre y en la parte superior se ve el perdigón del DAU, cuerpo esférico metálico que se había extraído de la cirugía menor.

Agrega que hubo una fijación de las lesiones del examen físico - n° 26 set de 03 fotografías conforme informe 14-2020- dice ver en **foto n° 1**: vista general del examinado donde se ve muslo derecho, tercio medio y se observa cicatriz rosada o circular de 2,4 centímetros de diámetro con leve signo de hipotrofia en el muslo derecho que se refiere al tamaño y a la funcionalidad que va a tener el musculo que se va a expresar con la potencia muscular, el cuerpo muscular esta disminuido de tamaño y las fibras musculares son más pequeñas y no están estimuladas y empiezan a disminuir de tamaño por falta de ejercicio muscular, es la foto del 07 de enero de 2020 donde días antes en la atención del SAR Tucapel se le había dado el inicio de empezar con kinesioterapia motora para impedir la hipotrofia muscular y volver a la potencia muscular previa, indicación que se dio cinco días antes de su atención, por lo que era coherente que le costaba caminar y su condición. En el sistema público se realiza derivación desde el CESFAM de que esta inscrito y según disponibilidad de kinesiólogo y se hacen terapias, se evalúan cada diez terapias, los tiempos son muchos más prolongados. Después de la cicatrización se podía dar inicio a la kinesioterapia motora, pero aquí pasaron casi tres meses para dar inicio a esa terapia, siendo el tiempo más prolongado para la reparación muscular. La secuela a pesar de haber recibido la atención médica y kinésica el resultado del 24 de abril la hipotrofia se mantuvo, la potencia muscular estaba disminuida conforme una persona normal y le impedía movimientos fluidos del miembro inferior derecho. La clasificación de permanencia la basó en el tiempo desde que ocurrió el hecho ya que había transcurrido seis meses, la terapia recibida y la resolución n° 142 de la COMPIN. Refiere que como comisión médica compuesta por especialista del área, normalmente y para que otorguen dicha discapacidad se tiene que haber cumplido con toda la terapia con sus médicos tratantes, por lo que la Comisión revisó que se hayan cumplido las terapias, rehabilitación exámenes, manejo farmacológico entre otros. La resolución es de 16 de enero de 2022 de numero 412 aclara. En **foto n° 2**: es una imagen en detalle de los miembros inferiores donde en muslo derecho cara anterior tercio medio se observa cicatriz redonda y **foto n° 3**: acercamiento de la cicatriz con la depresión causada. Agrega que desde el punto de vista médico legal dice que se conocen los conceptos armas no letales o letales y dependen del segmento corporal y de la cercanía con la que se pueda disparar el arma letal o no letal y de lo que se esté dañando, tipo de



órganos y la repercusión de su complicación infecciosa entre otros por lo que en medica legal no se toma principalmente en consideración. Siendo más bien un concepto de perito balístico, por lo que un disparo por un arma no letal de cerca, un cráneo delgado o patología previa puede llegar a ser mortal, pero va a depender de otras variantes.

En lo que respecta a su último informe, que presenta secuela funcional permanente refiere que en la práctica por ser el miembro inferior derecho dentro de lo que se puede hacer una valoración de la O.M.S como clasificación internacional de la minusvalía e incapacidad se distingue vida laboral, vida diaria, trabajo, auto suficiencia entre otros, pero en la parte laboral estaba mermada su funcionalidad. En el protocolo de Estambul señaló que era maestro carpintero señalando que subía y bajaba escaleras, hacer construcciones, siendo un obrero de la construcción y necesitaba una función optima de los miembros inferiores.

A la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos indicó que en relación al informe conforme protocolo de Estambul tiene una parte psicológica sobre la expresión emocional y la afectación en su vida diaria y los efectos sociales y de vida, pero como no es médico no está dentro de sus conclusiones. Respecto de este punto la víctima señaló que la funcionalidad social estaba afectada, manifestó temor, labilidad afectiva concordante con los que señalaba, sabía que estaba con sesiones de siquiatra y anti depresivos comentándole que había intentado quitarse la vida, por lo que era una urgencia médica que debía ser pesquisada, no era un intento reciente, pero le comentó que había sido abordado por el siquiatra.

A la querellante Consejo de Defensa del estado señaló que egresó como médico general el año 2003, luego de trabajar en sistema público hasta 2006, luego 2007 inicio especialidad en Medicina Legal en la Universidad de Chile, luego empezó trabajo criminalístico en la Policía de Investigaciones donde lleva 16 años, empezó en sede los Ángeles y desde el 2017 se desempeña en Concepción.

Respecto del Protocolo de Estambul recibió la formación en el año 2018 en Santiago. En cuanto a la respuesta del dolor en una extremidad y su magnitud la apreciación es subjetiva, personal que va a depender del individuo y de la zona, secuela o de la inervación de los nervios periféricos que hayan sido afectados. Habitualmente el dolor en Medicina Legal no es determinante para establecer una incapacidad o secuela funcional, ya que es un ámbito que se deja a la parte psicológica y depende de la valoración personal del afectado. La víctima le manifestaba que era un dolor de 3 a 4 de un total de 10 cuando lo vio. Este tipo de herida puede producir un desmayo, ya que el nervio vago puede incidir en producir dificultad para respirar por el estrés, hipertensión y podría tener un desmayo y puede ser algo personal que no ocurre siempre.



A la defensa señaló que siempre es necesario ratificar los antecedentes, viendo a la persona tres veces. Respecto de los objetos esféricos metálicos plateados que vio conforme a las fotografías y si se le dijeran que no fueran metálicos dice que fueron informados de esa manera por las radiografías -objetos opacos-. Consignó que eran metálicos en el informe de ampliación de lesiones. En su primer informe de lesiones tuvo a la vista DAU y dejó constancia conforme los antecedentes clínicos que tuvo a la vista y lo que le trajo consigo el periciado. Conforme los documentos médicos dejó constancia de los antecedentes clínicos y consignó que hubo una agresión con arma de fuego que es lo que dejaban constancia los documentos médicos que hablaban de perdigones, no consignando el material de que estaban hecho estos cuerpos extraños. El daño fue por el proyectil lanzado con alta energía que causó el daño aludido y la determinación de si son metálicos o no fueron consignados en los documentos. Lo que los perdigones eran metálicos no está en los informes anteriores, estaba en los documentos y la interpretación puede que hayan sido metálicos o no, por lo que recuerda decía eran metálicos en el DAU. Exhibido el DAU dice “múltiples proyectiles a la radiografía”.

En el primer informe tuvo a la vista documentación del SAR y otros organismos. No vio radiografías, sino un documento que citaba radiografías que describía múltiples proyectiles en partes blandas sin compromiso óseo, ni vascular ni neuro vascular. Ya que en caso contrario, como fractura o vaso o nervio importante dañado de inmediato la clasificación es grave y por eso fue de mediana gravedad, ya que había daños de piel y partes blandas como muscular. Cuando hay piel afectada la sanación puede ser completa y de la parte muscular. Lo peor es no mover el musculo por el trofismo. Se debe potenciar desde lo más inicial a la lesión empezando con la kinesioterapia motora. La movilidad pronta es relevante y potencialmente cabe la posibilidad que iniciada la terapia haya sido distinto el desenlace de trofismo muscular. Se debía hacer kinesiología y del registro que tiene es que se solicitó la kinesioterapia el 02 de enero del 2020 y la instrucción al CESFAM de iniciar terapia motora, pero no tiene otro registro. Cuando se dicta la resolución n°412 es porque la COMPIN es quien evalúa el cumplimiento terapias, exámenes, controles médicos y dan un veredicto, pero ella personalmente no tuvo a la vista sesiones o cumplimiento de terapias. Según su informe el 07 de enero de 2020 estuvo días después de la señalización de kinesiología y no le mencionó algo relativo a ello o alguna hora relativa a ese punto. No indicándole precisamente que haya ido al kinesiólogo. Luego en el informe de 24 de abril tampoco le mencionó dentro de las cosas positivas, le preguntó conforme al Protocolo de Estambul y se consigna lo positivo. En el informe de término de lesiones, tampoco le mencionó y tuvo a la vista la resolución



de la COMPIN. Indica que podría haber cambiado el resultado con tratamiento kinésico temprano. Dice ser imprescindible que tenga el documento que descarte la preexistencia antes de la primera atención. Dice que se contrasta entre lo señalado por el paciente y los antecedentes. Primero le dijo que los hechos habían sido a las 15:30 horas y luego en enero en el Protocolo de Estambul le dijo 17:30 horas, nunca le dijo que fue a las 18:00, ya que o si no lo hubiera dejado registrado. En el tercer informe, recomendó un informe de término de lesiones, no siendo ideal que este último informe lo haga un medico diverso. Lo habitual es que lo haga el mismo facultativo que ha visto al paciente. Algunas veces se conversa con otros médicos para ver opciones de interpretación, conseguir antecedentes o ver una opinión del colega. Constató ciertos hechos y determinó informes. Los antecedentes que tuvo a la vista da función a su función como médico legista, y considerando que vio a la persona desde el principio y ha tenido los antecedentes a diferencia del manejo sanitario o clínica en donde puede ser importante otras opiniones a diferencia del aspecto médico legal, siendo lo habitual que lo haga el mismo profesional que luego realice el informe final de lesiones.

Agrega que a propósito del Protocolo de Estambul hay cuatro o cinco opciones teniendo los antecedentes recopilados, antecedentes médicos y examen físico. Era importante saber tipo de arma, munición y distancia. Sabe que la Policía de Investigaciones hay laboratorios de criminalística y planimetría para fijar lugar y distancia de los hechos. Distancia entre el agresor y el agredido lo que le da objetividad a la información para dar más sustento a lo que pueda interpretar después. Refiere que los antecedentes que consideró lo que la víctima le señaló en uno de los relatos le dijo a 30 centímetros y en otro a 20 centímetros de distancia, antecedentes que no corroboró con informe balístico o planimétrico al no tenerlos. Conforme al protocolo e informe de lesiones se podía dar respuesta y no requería mayor información y por eso no lo dejó en observaciones. Podría haber dejado como observaciones pidiendo mayor información, no pidiendo informe de planimetría. En la anamnesis le dijo que se había encontrado con el grupo de gente que estaba en la manifestación, no indicándole que necesitaba sacar dinero o que iba a una "caja vecina" ya que necesitaba dinero. Le dijo que vivía en Janequeo y trabajaba en una construcción en Aníbal Pinto con calle Manuel Rodríguez. Fue atendido en la Mutualidad, ya que se pasó como accidente de trayecto y sabe que no fue aceptado como tal, ya que fue atendido por el sistema público. En cuanto al motivo si fue por la distancia entre su trabajo y su domicilio el motivo del rechazo dice que eso no es ámbito de especialidad en medicina legal.

**4.- Kiyomi Kanda Muñoz**, psicóloga forense del Servicio Médico Legal de Concepción, quien depuso al tenor del Informe Médico en base a Protocolo de Estambul respecto a la víctima Gastón Alejandro



Santibáñez Palomera de fecha 27 de abril del 2021. Indica que hizo evaluación en base al citado protocolo a Gastón Santibáñez Palomera a solicitud de la Fiscalía Local por causa de apremios ilegítimos el 24 de abril del 2021. Se trataba de una persona de 52 años al momento de la evaluación, divorciado con cuarto año de enseñanza media, maestro carpintero. La metodología usada fue entrevista clínica forense en base al protocolo aludido, identificada mediante sistema biométrico y firmó acta de consentimiento. Se tuvo a la vista antecedentes de la Fiscalía y pericia fue revisada por un segundo perito de la unidad de salud mental como parte de la evaluación.

En cuanto al relato da cuenta de una situación ocurrida el 22 de octubre de 2021 en la que salía de su jornada laboral ya que trabajaba como maestro carpintero en una obra en Aníbal Pinto con Manuel Rodríguez. Sale aproximadamente a las 5.30 de la tarde y se dirige a su domicilio caminando, quedaba entre Paicaví y Bulnes, camina, pasa por entre medio de los bloques y se encuentra con marcha o protesta y personas que arrancaban por Paicaví hacia Bulnes, detrás iban los militares. En un momento se encuentra con ellos y le preguntan hacia dónde va y que hacía en la marcha. A continuación, dice que “nada que ver”, que viene de su trabajo con su mochila y documentos de identificación. Trató de mostrarle su documentación a la persona. Saca la mochila, trata de abrir la mochila para mostrar la documentación y en ese momento recibe un disparo en la pierna derecha. Piensa que la gente se asustó y que iba a sacar algo cuando lo que él quería era abrir su mochila y mostrar su documentación. Manifiesta que estaba solo con un grupo de militares, que luego de dispararle le dieron vuelta y quedó esposado. Que estos se reían de él y en ese mismo momento manifiesta que para quedar en paz consigo mismo que le dijo al militar que le disparó que lo perdonaba. Luego es tomado por varios militares y lo dejan tirado en la calle Paicaví como una hora y media, estando con mucho dolor y siendo la misma gente y los periodistas que estaban en el lugar los que piden que llamen a la ambulancia. Vino la ambulancia y es llevado al Hospital Regional de Concepción, lo intervienen para sacarle lo que le había quedado en el mismo. Esa noche u otra vinieron los militares y tomaron sus cosas y lo trasladaron a la 2° Comisaría de Concepción donde pasó a celda solo, estando con mucho dolor, no pudiendo dormir en toda la noche. Aproximadamente a las cinco de la mañana lo sacan de la celda y lo dejan ahí con un medicamento para el dolor. Luego de ese evento va manifestando diversa sintomatología, refiere que estaba mal psicológicamente, laboralmente mal. No podía hacer lo que hacía anteriormente de este hecho. Se sentía humillado, fracasado, solo por sus amistades y conocidos. Dificultades con su pareja. En algún momento se trata de enterrar un cuchillo y luego de arrepiente. Fue derivado a atención psiquiátrica y psicológica por la intensión suicida. Tenía pesadillas que escuchaba el sonido del disparo,



veía su pierna que no estaba en su lugar, pero vivía solo y tenía que arreglárselas para hacer sus cosas. Tenía tendencia a aislarse haciendo lo estrictamente necesario para trámites médicos. Refirió cambios importantes en la percepción de su imagen corporal, tuvo que usar bastón, refiere haberse caído de la micro por haber salido sin bastón, tampoco podría caminar rápido, subir y bajar escaleras o si mantenía mucho rato de pie. Hay un ámbito en el sentido de su eficacia personal, ya que se percibía como bueno para la talla, ya no podía ser así, no resultaban las cosas a pesar del esfuerzo. Se le trataba de forma especial en los trámites y filas, lo que le generaba rabia en contra sí mismo al no poder hacer lo que hacía antes. Vivía cerca de donde ocurrieron los hechos y hacia como que se olvidaba, ya que o sino quedaba emocionalmente mal. Si veía militares en la calle cruzaba para evitar tener contacto con ellos, sabiendo que eran otras personas, existiendo una conducta evitativa. Existió aumento importante en la ingesta de alcohol al sentirse más relajado y evitaba pensar. Tomando una botella diaria o más de pisco aumentando los cigarros a una cajetilla diaria. Al momento de la evaluación, aun presentaba una disminución del ánimo importante, angustia, tristeza, imagen corporal afectada ya que siempre vivenciaba los hechos y tenía el ánimo depresivo. Refiere que desea justicia, encontrar paz, que no le desea mal a la persona, que ya lo perdonó, pero que sueña tener un trabajo y ganar su plata con su propio esfuerzo.

En relación al examen mental el examinado está atento al medio, auto síquicamente, orientado en tiempo y espacio y en su individualidad, juicio de realidad conservado, entiende las preguntas y puede aportar la mayoría de los antecedentes requeridos, algunas de las funciones cognitivas como la atención concentración y memoria están disminuidas. En cuanto a la afectividad aparece lábil, tiende a afectarse con los hechos de la causa. Luego de los hechos de la causa presentó sintomatología ansiosa clínicamente significativa con disminución del estado de ánimo con sentimientos de angustia, tristeza, sentido de auto eficacia personal y aumento de ingesta de alcohol. Socialmente aparece aislado y evitativo del contacto con temor a que los demás sientan lastima por él. Condición física y emocional aparece como una interferencia significativa a las actividades de la vida diaria con limitación de desplazamiento, laboral, social y afectivo.

Finalmente como conclusiones, el examinado presenta juicio de realidad conservado, sintomatología ansiosa depresiva experimentando disminución significativa del ánimo, ideación suicida, alteración de su imagen corporal y de auto eficacia en las diferentes actividades de su vida diaria todo lo cual lo afecta. Lo que no puede ser explicada por otros eventos distintos a los relatados en la presente causa, recomendando retomara tratamientos psicológico y psiquiátrico para que lo trataran.





A las preguntas del fiscal señaló que evaluación fue conforme Protocolo de Estambul que es un estándar internacional que entrega lineamientos en caso que se alega torturas, malos tratos, tratos crueles y degradantes utilizado desde el año 2011 para evaluar este tipo de casos. Teniendo por objetivo tener un relato de los hechos, las secuelas, establecer ciertas correlaciones y documentarlo a través de un informe. Informe lo realizó el 24 de abril de 2021 y entrevista duró tres horas con los antecedentes que aportó la Fiscalía y en la realización de la pericia el principal aspecto tiene que ver con la entrevista clínica pericial. Sabe que el periciado era maestro en carpintería, refiriéndole datos de antecedentes biográficos, que tenía 4° año medio completo y estudió carrera técnica en la Universidad Austral incompleta no terminándola por limitaciones económicas. Manifestó que en abril cumplió cuatro meses de reclusión nocturna, no sabiendo cuál es el delito, que había tenido problemas en la empresa, había sacado un auto. Los hechos fueron el 22 de octubre de 2019.

Cuando le relató los hechos, dice que le hicieron preguntas abiertas ya que se está frente a una víctima que pasó un hecho traumático, en su relato se afecta, se pone lábil y esa afectación es la comparación de lo que hacía antes y lo que puede hacer ahora. Estaba con un ánimo depresivo, menos agilidad mental y tiene que ver con el estado depresivo. Tenía clínicamente una depresión y de ahí la recomendación de retomar su intervención psiquiátrica medicamentosa y psicológica.

Señaló que venía de su trabajo, que había terminado su jornada laboral a las 5:30 e iba a su domicilio, venía caminando y se encuentra con los militares y la gente, ocurriendo el hecho. Que caminaba entre medio de los departamentos, que no participaba en la protesta y que llega a la protesta ya que debía llegar a su domicilio. Señaló que tenía que sacar dinero de la caja vecina, que el sistema estaba malo y no pudo realizar dicho trámite cuando pasó por la caja vecina. La sintomatología en estado depresivo tiene que ver con limitaciones a funciones cognitivas como: memoria, concentración, traer recuerdos, precisar con detalle hechos remotos y eso se ve alterado por el estado depresivo que trae un enlentecimiento físico y mental. Costándole tomar decisiones, procesar información, siendo esperable que este disminuido. Cuando se realizó la pericia había pasado un año y medio lo que también afecta a la precisión y detalles de los hechos. Además, los hechos mismos fueron traumáticos y es esperable que en ciertos aspectos haya fallas de tipo cognitivo de memoria. Dicha falla tiene que ver con esto, con su estado depresivo a propósito de los hechos y el transcurso del tiempo y eso afecta a su funcionamiento cognitivo. Existe una condición emocional afectiva del funcionamiento del evaluado y su explicación si se relaciona con los eventos y hechos de la causa, no aparecen otras situaciones que expliquen su condición actual de mejor



manera que los hechos que ocurrieron. O los hechos explican el estado afectivo o emocional del examinado. Dice que esa nomenclatura no es privativa del Protocolo de Estambul.

A la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló que trabaja en el Servicio Médico Legal habiendo realizado más de cien pericias conforme Protocolo de Estambul de manera aproximada y en este tipo de pericia se puede encontrar diversos diagnósticos y frecuentemente se pesquisa sintomatología depresiva cuando hay eventos suficientemente traumáticos, siendo común como cuadros ansiosos depresivos en este tipo de peritajes.

La querellante Consejo de Defensa del Estado no hizo preguntas.

A la Defensa señaló que el objetivo del protocolo es obtener un relato de los hechos de su vivencia y experiencia, existiendo hechos objetivos como el horario o la infracción de una norma como la infracción del toque de queda. El señor Santibáñez le dijo que los hechos ocurrieron luego de su jornada laboral a las 5:30 horas, que salió de su trabajo a esa hora. No le dijo que los hechos habían sucedido en horario de toque de queda. No le dijo que cuando enfrentó al militar estaba escondido junto a otra persona o que la otra persona había sido detenida, o que le había dicho el militar que se tendiese o que el militar había retrocedido ya que no obedecía las órdenes. Si le dijo que había estado tirado en la calle una hora y media. Que había intentado abrir una mochila si le dijo, no viendo el video que circuló en redes sociales, ya que no se lo proporcionó la Fiscalía. Agrega que el protocolo no busca contrastar el relato del evaluado en función de determinados antecedentes, sino obtener el relato y en base a eso ver su afectación, sintomatología o secuelas y el contexto en que se dan los hechos tiene ciertas características como el lapso de tiempo, estando en una condición depresiva que afecta sus funciones cognitivas. El relato tiende ser desde la persona, su vivencia personal y subjetividad por lo que más que chequear la información es extraer desde la sicopatología, pesquisar las secuelas, más que la exactitud de su relato que puede no ser exacto, pero puede tener distintas explicaciones.

Agrega que la metodología incluye la lectura de los antecedentes de la causa lo que permite contextualizar los acontecimientos y tener información del contexto en que se dan los hechos, pero más que chequear o tener la exactitud del relato es obtener el relato de la persona. Independiente que pueda haber inconsistencias no le quita validez a la experiencia, siendo normal que hayan existido dada la situación emocional, el tiempo transcurrido. Poco esperable sería tener un relato previsto en cuanto tiempo o precisión de los recuerdos. Dice que efectivamente se revisó el certificado que entrega la Mutual en que se rechaza como accidente de trayecto y por eso pasó al sistema público de salud. Dice que aparece certificado que se rechaza como



accidente de trayecto lo que está en la carpeta, no le consta si fue porque le pareció falso el relato de la víctima.

Señaló que se llevaba bien con un tío con el que no conversó, no constató si se llevaba bien con sus hermanos y sobrinos, no corresponde contrastar esa información biográfica señalada, no siendo parte de la metodología. Dijo que tenía un primer matrimonio con un hijo, señalando que no tiene contacto con él ya que está en el extranjero, lo que le produce mucha pena. Luego tuvo una segunda convivencia por 19 años y dijo que ella estaba con él mientras estaba bien económicamente y que luego lo habría dejado. En cuanto al consumo del alcohol posterior a los hechos aumentó y que previamente tomaba champagne y ahora puro pisco, no habló con la pareja, ni con el hijo que estaba en el extranjero no aplicando conversar con él conforme la metodología, ya que la principal técnica tiene que ver con la entrevista. Dice que dependiendo de los objetivos y finalidad corresponde hacer ciertas verificaciones. El conocimiento biográfico dice relación con la vida familiar, antecedentes laborales, familiares del funcionamiento previo del hecho traumático. Insiste en que en una entrevista psicológica que se evalúa a una víctima de hechos graves el objetivo no es verificar la veracidad de la información que se entrega con determinados aspectos, no partiendo de que todo que le haya dicho es falso. No pudiendo partir de que toda la información es falsa. En el contexto de evaluación no se puede considerar que gran parte de la información pueda ser falsa no siendo el enfoque, no correspondiendo verificar su veracidad. El periciado señaló como antecedente penal que había estado cuatro meses en reclusión nocturna no señalando que había tenido una condena por el delito de hurto.

**5.- Karina Andrea Cabezas Gatica**, cédula nacional de identidad N° 10.713.671-1 perito profesional de la Sección de Dibujo y Planimetría de LACRIM Concepción de la Policía de Investigaciones, quien depuso al tenor de los Informes pericial Planimetrico. Dice que el día 23 de octubre de 2019 junto a perito fotógrafo balístico y encontrándose a cargo el Inspector Salazar Andaur de la Brigada Concepción fueron a Paicaví n° 982 un edificio, realizando fijación solicitada por el oficial para establecer algunos puntos indicados por él en cuanto a la agresión a la víctima Gastón Santibáñez Palomera. Se va a la plataforma frente al edificio 982, en desnivel de terreno, fijación mancha oscura de 16X23 centímetros que correspondía al lugar según lo señalado por oficial donde se encontraba la víctima al momento agresión. También se fijó ubicación donde se encontraba el funcionario del Ejecito distante a 1,9 metros de la víctima, todo ello conforme lo señalado por el oficial. Se realizó informe pericial planimétrico n°484 donde se plasma la información de lo fijado.

Luego el 16 de enero de 2020 van nuevamente al mismo lugar en compañía de Nicolás Salazar Andaur para ampliación del informe, para



ver las alturas entre plataforma, piso y rejas y entorno en que se desarrollaron los hechos. Se realizó levantamiento planimétrico en donde quedó plasmado isométrico, se establecen las alturas. Conclusión es un informe n°54 donde se exponen las diferentes alturas conforme lo solicitado por el Inspector.

A las preguntas del fiscal señaló que en el primer informe participó a cargo Nicolás Salazar Andaur, dice ser perito planimétrico, ya que es Ingeniera estructural. Hace 26 años que se desempeña en la Policía de Investigaciones, levanta planimétrico que ayuda al trabajo de fotografía, balística para establecer distancias y posicionamientos. Iban a fijar la posición en la que se efectúa la agresión entre el funcionario del Ejército y la víctima. Informe contiene vista de planta en que contiene las distancias, medida de la mancha y sobre esa oficial indica que se encontraba la víctima.

Se posiciona el lugar conforme G.P.S en Avenida Paicavi, un edificio frente al cual hay una plataforma a 65 centímetros del suelo, al costado este hay un pequeño árbol y en ese entorno se realiza la fijación. Se incorpora -N° 7 auto de apertura- 01 lamina que contiene una fotografía satelital con la ubicación del sitio del suceso señalando que se extrajo una imagen de Google, observando la Remodelación Paicaví y entre calle Las Heras esta edificio 982, siendo el puto rojo el lugar donde se encuentra el edificio individualizando las calles aledañas posicionada con G.P.S señalando las latitudes y longitudes conforme la lámina. En cuanto a la vista de planta dice que lo que está arriba es la posición del edificio la altura de la reja 1,90 metros, lo amarillo es la plataforma en 65 centímetros en favor del desnivel de terreno, lo verde es el pasto. La línea vertical en costado Noreste es una baranda de 50 centímetros de alto. Entre la plataforma y nivel de terreno hay 65 centímetros de alto, pero si se le suma la baranda sería 1,10 metros desde nivel del piso hasta donde termina la baranda. Se observa el árbol, el punto azul el funcionario del ejército y el punto rojo es la víctima. La distancia entre el funcionario y la víctima es de 1.9 metros según lo indicado por el funcionario Salazar. La mancha la vio, era una mancha negra sobre el pasto. Para ingresar se va por la loza de hormigón. En cuanto a la distancia del espacio donde está el árbol por ese lugar, está más o menos 10 metros y desde el árbol hasta el límite más o menos 8 metros. Refiere que se enfocó en la parte del árbol, pero si hubiere habido un objeto grande lo hubiere fijado. Al lado derecho hay otra baranda, por lo que esta encajonado el lugar existiendo una entrada abierta de 5,4 metros de ancho.

En cuanto a su segundo informe es una ampliación del primero para establecer alturas existentes en la plataforma incorporando -N° 8- 01 lamina que contiene un plano gráfico, reconociendo una vista en perspectiva del área donde se desarrollaron los hechos viendo el edificio y plataforma, área del pasto donde ocurrieron los hechos.



Plataforma se refiere a los desniveles como losas de hormigón que son sectores peatonales. Desde el nivel de terreno se llega desde escaleras. Desde el pasto que es el nivel del suelo y hasta donde termina la pared hay 1,10 metros de material de hormigón. El árbol está a la izquierda encajonado entre las plataformas con una profundidad aproximada de 10 metros. El árbol está a 2 metros desde el inicio y luego de éste 8 metros hasta el fondo. Se observa la reja de 1.9 metros para proteger el edificio 982. La flecha indica la orientación de la vista en relación a la vista de planta. Dice trabajar en un programa de gráfica para diseño donde se puede dibujar y trabajar a escalas uniando el dibujo técnico con el artístico.

Las querellantes no hacen preguntas.

A la Defensa señaló que respecto de la primera lámina exhibida respecto de la mancha fijada establecida como punto rojo le dijeron que el militar estaba ahí, no le dijo si había dos personas, ni tampoco vio un video. Para llegar desde los vértices hay cinco metros en total desde la plataforma hasta la reja. Si se desplaza desde ese lugar siguiente la reja metálica hasta la mancha roja es el equivalente a 15 pasos o metros aproximadamente y hasta el militar aproximadamente 17 metros, 16 o 17 pasos hasta donde estaba el militar.

### **III.- Prueba documental y otros medios de prueba:**

**1.- Oficio Nro. 140** emitido por la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción con fecha 25 de febrero del 2020, suscrito por el Capitán de Carabineros Carlos L. Espinoza Garín. Que dice relación con informe sobre la nómina de personas detenidas en las inmediaciones de Plaza Condell y Remodelación Paicaví de la comuna de Concepción el día 22 de octubre de 2019 en el horario comprendido entre las 18:45 y 20:00, referidas a detenciones realizadas por personal de Carabineros de Chile o el Ejército de Chile informa que sólo mantiene registro de una persona detenida identificada como Gastón Alejandro Santibáñez Palomera C.N.I N° 11.292.796-4 conducido por toque de queda a las 19:30 horas por personal del Ejército a cargo del Teniente Coronel Alejandro Araya Zúñiga y el Capitán Claudio Morales Valdés, ambos de la dotación del Regimiento N° 06 Chacabuco, no manteniendo más registro de personas detenidas en la intersección y horarios solicitados

**2.- Oficio GCAL N° 567**, emitido por Mutual de Seguridad CChC con fecha 27 de enero del 2020, suscrito con firma electrónica avanzada (F.E.A) por René Mauricio del Real Morales, abogado de la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales dirigido a la Policía de Investigaciones de Concepción en donde a la petición de antecedentes atendida la normativa legal que expone solicita se le adjunte la resolución del Juzgado de Garantía, sin perjuicio de adjuntar resolución exenta consignada en el punto siguiente.



**3.- Resolución exenta N°R-01-S-69603-2019 de fecha 11 de diciembre de 2019** emitido por la Unidad Jurídica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, suscrito por Claudio Reyes Barrientos, superintendente con Firma electrónica avanzada (F.E.A) que confirmó lo resuelto por la Mutual de Seguridad, al no existir mérito para calificar la contingencia como un accidente del trabajo en el trayecto y no procediendo otorgar cobertura del seguro de la ley 16.744.

Dentro de los fundamentos tenidos en vista está que el señor Santibáñez vive en Janequeo 1142 y trabaja en Aníbal Pinto 1415 por lo que la distancia entre ambos lugares es de 1,4 kilómetros aproximados, con un tiempo estimado de 20 minutos caminando y el lugar del accidente se encuentra a una cuadra y media del domicilio del trabajador. Además, conforme al certificado de horario emitido por la empleadora el día del accidente se autorizó la salida a las 13:00 horas para resguardar la integridad física de los trabajadores según documento tenido a la visa. No obstante en las dos declaraciones y en la DIAT emitidas por el trabajador el 24/10/2019 éste refiere como horario de salida de trabajo a las 14:30 horas y 15:30 horas respectivamente. Respecto del horario de ocurrencia del accidente, los antecedentes entregados por el SAMU y por el Hospital Regional, demuestran que éste tuvo lugar cerca de las 19:00 horas, es decir cuatro horas después que la señalada por el trabajador como salida de su trabajo ( o de seis si se considera el horario de salida informado por la empresa empleadora) conforme se desprende de la ficha de atención pre hospitalaria básica emitida por el SAMU que cuenta la recepción de la llamada a las 19:21 horas, lo que es concordante con el ingreso del Hospital Regional señalado como Dato de Urgencia ocurrido a las 19:52 horas y con el hecho que la anamnesis descrita en dicho documento se señala que el accidente ocurrió minutos antes de dicha atención, lo que se ve corroborado con los antecedentes publicados por la prensa local en los que se señala que el incidente ocurrió durante el toque de queda vigente en Concepción después de las 18:00. Por tanto, como el trabajador interrumpió el trayecto entre su lugar de trabajo y su habitación no se está frente a un accidente de trayecto.

En lo considerativo se hace presente que la Mutual calificó el siniestro como de origen común, atendido que los antecedentes recopilados en torno al caso demostraron que el siniestro no tuvo lugar en el trayecto directo entre su lugar de trabajo y su habitación, en los términos que establece el artículo 5 de la ley 16.744.

**4.- Oficio emitido por Red Televisiva Megavisión S.A.,** con fecha 29 de enero del 2020, suscrito por Ernesto Pacheco G., Fiscal de la Red Televisiva Megavisión S.A. quien procede a informar al Jefe de Brigada



de Homicidios de Concepción que adjunta DVD con las imágenes referente a las lesiones que fue víctima Gastón Santibáñez Palomera producto de un disparo realizado por un funcionario del Ejército de Chile, de la comuna de Concepción, proporcionados por terceros y nota de Ahora Noticias sobre los mismos hechos.

**5.- 1 Lámina que contiene una fotografía satelital** con la ubicación del sitio del suceso sin escala, y un plano gráfico, confeccionado con vista de planta a escala 1:200, suscrito por Karina Cabezas Gatica, Profesional Perito Dibujante y Planimetrísta, adjunto a Informe Pericial Planimétrico N° 484/019, de fecha el 23 de noviembre del 2019, emitido por LACRIM Regional Concepción.

**6.- 1 Lámina que contiene un plano gráfico**, confeccionado con vista en perspectiva sin escala, y un plano con vista de planta sin escala, suscrito por Karina Cabezas Gatica, Profesional Perito Dibujante y Planimetrísta, adjunto a Informe Pericial Planimétrico N° 54/020, de fecha el 22 de enero del 2020, emitido por LACRIM Regional Concepción.

**7.- Oficio N° 22, emitido por la Autoridad Fiscalizadora** de la Primera Comisaría de Concepción, el 7 de febrero del 2020, suscrito por el Capitán de Carabineros Cristófer Andrés Candia Bustos, Jefe de Autoridad Fiscalizadora (S), Capitán de Carabineros dirigida a la Fiscalía Local de Concepción en que se acusa recibo de una escopeta Winchester serie 424803 calibre 12.

**8.- ORD. 057-2020, emitido por CESFAM Tucapel** el 31 de enero del 2020, suscrito por el Sr. Rodrigo Placencia Silva, Director de CESFAM Tucapel dirigido al Juzgado de Garantía de Concepción por medio del cual hace llegar fotocopias de Folios de atención en el Servicio de Atención de Urgencias SAR Tucapel de usuario Gastón Santibáñez Palomera, indicando que no está inscrito en su Establecimiento de Salud.

**9.- Documento de atención de urgencias N°125844** de fecha 7 de noviembre de 2019 emitido por el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAR Tucapel Municipal, respecto de la víctima, suscrito por el médico Aníbal Elías Flores Romero en donde se establece: Motivo de consulta: “le dispararon el día 22/10/2019 con perdigones, el Hospital lo opera y viene porq ti25 municiones derivado desde Cesfam O’Higgins por molestia de muslo der 2 rio” Refiere lesión por herida de arma de fuego - día 22 de octubre sin curaciones ni controles posteriores a procedimiento refiere que evolución con dolor de muslo -caídas a nivel e impotencia funcional” Rx de control - múltiples cuerpos extraños (11) mulso aprox 1 cm densos herida operatoria de mal aspecto y olor - obs de infección de herida operatoria. Bajo hipótesis diagnóstica indica



herida de la cadera y del muslo secuelas de eventos de intención no determinada. Detalle del diagnóstico infección de herida operatoria. Diagnóstico de salida: secuelas de eventos de intención no determinada. Indicaciones: derivó a carácter de lesión y sin controles por especialista ni CESFAM y 15 días de evolución- se deriva para control con cirugía - aseo quirúrgico? - manejos según especialista. Destino: Hospital Clínico Regional Dr Guillermo Grant Benavente.

**10.- Documento de atención de urgencias N°125167** de fecha 2 de noviembre de 2019 emitido por el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAR Tucapel Municipal, respecto de la víctima, suscrito por el médico Hans Mendoza Vásquez. Deja constancia que acude a curación realizándole curación con técnica aséptica, herida con contenido serohemático, se limpia con SF y gasa, se aplica apósito absorbente y vendaje. Hipótesis diagnóstica: Otros procedimientos médicos. Diagnóstico de salida: Otros procedimientos médicos. Indicaciones: Continuar con curaciones según su citación.

**11.- Documento de atención de urgencias N°129791** de fecha 12 de diciembre de 2019 del Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAR Tucapel Municipal, respecto de la víctima, suscrito por el médico Aníbal Elías Flores Romero. Motivo de consulta: Viene a RX de pierna por antecedentes perdigones. Se toma su RX de control se contabiliza un perdigón menos. Hipótesis diagnóstica: Herida de la pierna, parte no especificada. Diagnóstico de salida: Herida de la pierna, parte no especificada. Indicaciones: Consulta día lunes en CESFAM por interconsulta a Cirugía y Medicina Física RX control se entrega.

**12.- Oficio GCAL/0388, emitido por Mutual de Seguridad CChC** con fecha 20 de enero del 2020, suscrito por Josefina Villagra Montenegro, abogada de la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales dirigido a la Fiscalía Local de Concepción por medio del que se adjunta la resolución exenta R-01-S-69603-2019 de 11 de diciembre de 2019 de la Superintendencia de Seguridad Social mediante la que se confirma el origen común del siniestro referido.

**13.- Copia de la Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades Ley 16.744**, N° 3756864, de fecha 25 de octubre del 2019, suscrito por la Mutual de Seguridad C. Ch. C. como accidente común.

**14.- Copia de la Derivación de Paciente**, artículo 77 bis del al Ley 16.744, Siniestro N° 7881905, suscrito don Gastón Santibáñez Palomera en donde se procede a la derivación del trabajador por no corresponder a una contingencia o patología cubierta por el Seguro





Social de la ley 16.744 procediendo a entregar una licencia por 15 días a contar del 24 de octubre de 2019.

**15.- Copia de la Orden de Reposo ley N° 16.744**, N° 3951861, con fecha de emisión 24 de octubre del 2019, suscrito por el Médico Daniel Gutiérrez Jara y el trabajador Gastón Alejandro Santibáñez Palomera por 11 días desde 22 de octubre de 2019.

**16.- Copia de la Epicrisis de Atención Ambulatoria** de don Gastón Alejandro Santibáñez Palomera del día 24 de octubre del 2019, suscrita por don Daniel Gutiérrez Jara que refiere en lo pertinente Anamnesis/ Mecanismo Lesional/ Motivo de atención: El día 22 de octubre de 2019 relata que en trayecto desde su trabajo al domicilio al ir caminando por calle Paicaví con Carrera, se encuentra con una turba de manifestantes que eran repelidos por militares, al ir a resguardarse es enfrentado por un militar el cual le dispara en muslo derecho desde aproximadamente 30 cm de distancia. Recibe primera atención en H. Regional donde se realizan RXS que evidencia múltiples “proyectos” en partes blandas sin compromiso óseo y se realiza cirugía para retirar proyectil. Se administró VAT. Ingres a silla de ruedas. Presenta intenso dolor. No logra deambular. Muslo derecho con herida suturada en tercio medio cara anterior, sin signos de infección, con gran edema perilesional. Indicaciones: Reposo laboral y otros. Hipótesis diagnóstica de egreso: Herida de muslo complicada.

**17.- ORD. N°211/366 de fecha 23 de enero de 2020** remitido y suscrito por el Director Hospital Clínico Regional de Concepción, Ing. Carlos Capurro Dupré a la Fiscalía Local de Concepción por el cual se envía copia de Documento de Atención de Urgencia de 07 de noviembre de 2019 correspondiente al paciente Gastón Santibáñez Palomera, antecedentes emitidos en el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.

**18.- Documento de Atención de Urgencias N°144186/2019** de fecha 22 de octubre de 2019 del Hospital Guillermo Grant Benavente, con hipótesis diagnóstica del médico Francisco Parada Díaz, y con el alta autorizada por el médico Juan Alvarado Irigoyen. Refiere datos de urgencia con fecha de ingreso 22 de octubre de 2019 de la víctima, la que arribó en ambulancia con motivo de consulta, herida perdigones pierna derecha. Con categorización 19:52 “C2”. Anamnesis (20:01 horas), paciente sin antecedentes mórbidos, sufre agresión con arma de fuego en muslo derecho hace unos minutos (perdigones), se realiza vendaje compresivo por personal extrasistema y es derivado para evaluación. Se establecen indicaciones dentro de las que se mencionan RX fémur AP-lateral derecho; RX - hombro, fémur, rodilla, pierna,



costilla o esternón etc. y medicamentos suministrados con su hora de administración junto al profesional responsable.

Evoluciones: RX múltiples proyectiles en partes blandas sin compromiso óseo. Alta traumatología, evaluación por CX. Cirugía toma conocimiento del caso, se extrae cuerpo extraño, impresiona cartucho y balín. Se realiza sutura de afrontamiento con vicryl 3.0 y sutura superficial. Indicaciones al alta: curación en su CESFAM cada 48 horas, retiro de puntos en 14 días por su CESFAM y medicamentos que se indican.

**19.- Documento de atención de urgencias N°150796/2019** de fecha 7 de noviembre de 2019, con anamnesis, examen físico y radiografía de fémur realizado por el médico Francisco Javier Muñoz Cabezas; y con hipótesis diagnóstica y alta autorizada por la médico Andrea José Alvayay Ramírez. Indica a motivo de consulta derivación para aseo quirúrgico por herida de arma de fuego de 22 de octubre bajo anamnesis en igual sentido derivado por SAR Tucapel por perdigones en muslo. Al examen físico se establece herida en cara anterior de muslo derecho de aproximadamente 2 cm de longitud, bordes irregulares, secreción serosa aparato extensor conservado RX fémur sin fractura. Interconsulta interna: herida hace dos semanas por perdigones herida con signos de cronicidad sin “aigos” de infección exudado seroso. Como indicaciones de alta se señala reposo relativo, curaciones avanzadas por enfermería en su consultorio, urgencias S.O.S y medicamentos a tomar.

**20.- Set de 3 fotografías** a color correspondientes a la fijación fotográfica adjuntada al Informe Servicio Médico Legal N° VIII CONCE 14-2020, emitido con fecha 10 de enero del 2020, suscrito por la médica legista, Dra. Carla Aldana Saavedra.

**21.- Ejemplar 1/7, Oficio JEMGE DETLE A.E. (R) N° 1595/229**, de fecha 07 de enero del 2020, remitido y suscrito por el General de Brigada, Osvaldo Vallejos Martinez, Jefe del Estado Mayor General del Ejército Subrogante. Informa que el Capitán Claudio Morales Valdés, Sargento 2° Héctor Herrera Villa y la Cabo 2° Carla Huinao Mayorga son funcionarios activos de la Institución pertenecientes a la dotación del Regimiento N° 6 Chacabuco y efectivamente patrullaron en la ciudad de Concepción el día 22 y madrugada del día 23 de octubre en horario de toque de queda. Agrega que el Capitán Claudio Morales Valdés era el oficial a cargo de la patrulla que conformaba el Sargento 2° Héctor Herrera Villa entregando a los ciudadanos que fueron detenidos durante el toque de queda a Carabineros de Chile remitiendo respecto de Herrera Villa hoja de vida y calificaciones, copia autenticada de las certificaciones de tiro de los últimos periodos, de las



bitácoras de puesto y control registradas los días 21, 22 y 23 de octubre de 2019.

**22.- Documento titulado Empleo de Medios de Emergencias**, sin fecha, emitido por el Regimiento N°6 Chacabuco, Brigada Maule, del Ejército de Chile, suscrito por el Subteniente Sayuri Shinya Gálvez, Subteniente Oficial de Personal que en lo pertinentes establece que mediaron 3 UFE, compuestas a su vez por distintas secciones, siendo la UFE N° 3, primera sección comandada por el Capitán Claudio Morales Valdés el que portaba una pistola y en el puesto n° 2 como C.V.M y R.OP el Sargento 2° Héctor Herrera Villa portando un fúsil n° serie 03449.

**23.- Copia de la Calificación Hoja N°1**, del SG2 (CPRASA) Héctor Herrera Villa, desde el 1 de junio del 2018, hasta el 31 de mayo del 2019, emitido por el Regimiento N° 6 Chacabuco, suscrito por el Subteniente Sayuri Shinya Gálvez, Oficial de Personal. En que se registra el desempeño de peluquero en calidad de Sargento 2° con un tiempo en el grado de 4 años y 8 meses y un tiempo efectivo en la Institución de 20 años.

**24.- Copia de la Calificación Hoja N°2**, la cual describe B. CALIFICACIÓN MÉDICA ANUAL, B.1 Calificación Médica Anual, suscrita por el Subteniente Sayuri Shinya Gálvez, Oficial de Personal refiere capacidad limitada temporal para continuar en el servicio de la Institución apto para portar armas.

**25.- Documento en el cual se indica la opinión del calificador directo** con la firma correspondiente a don P. Torres E., la opinión del calificador superior con la firma correspondiente a J. Sagarra B., y la firma del calificado correspondiente a H. Herrera V., suscrito por Subteniente Sayuri Shinya Gálvez, Oficial de Personal refiriendo como opinión del calificador directo de clase correcta y caballero, de buen desempeño, cumple con las obligaciones profesionales conforme a su grado y puesto que desempeña. Como opinión del calificador superior se establece clase alegre y respetuosa, gobierna de buena manera su vida personal y familiar, con un buen desempeño profesional demostrando conocimientos conforme a su puesto y grado.

**26.- Copia de la Calificación Hoja N°3 del SG2 (CPRASA)** Héctor Herrera Villa, desde el 1 de junio del 2018, hasta el 31 de mayo del 2019, el cual describe VIRTUDES MILITARES, suscrito por el Subteniente Sayuri Shinya Gálvez, Oficial de Personal

**33.- Copia de Hoja de Vida del SG2 (CPRASA)** Héctor Hernán Herrera Villa, desde el 1 de junio del 2018, hasta el 31 de mayo del 2019, suscrito por el Subteniente Sayuri Shinya Gálvez, Oficial de Personal calificado con



nota 6.0 en cuanto a sus virtudes militares y cualidades personales clasificado en lista n° 2.

**27.- Copia de hoja de Vida del SG2 (CPRASA)** Héctor Herrera Villa desde el 01 de junio del 2018 hasta el 31 de mayo de 2019 suscrito por el Sub Teniente Sayuri Shinya Gálvez, Oficial de Personal en donde se deja constancia de una anotación con 01 día de arresto con servicio por encontrarse en un restaurante el día 07 de octubre de 2018 en la comuna de Florida en circunstancias en que se encontraba con licencia médica con reposo total siendo sorprendido por el Comandante de la unidad de Cuartel, sin perjuicio de constancia de felicitación por trabajos realizados en fecha diversas y mención de cualidades personales.

**28.- Copia de Ficha Personal de fecha 03 de diciembre del 2019,** obtenida por la usuario CB2 Silvia Montanares, correspondiente a Héctor Herrera Villa, suscrita por el Subteniente Sayuri Shinya Gálvez, Oficial de Personal que establece en cuanto a su certificación física periodo 2019 no rendida; habilidades básicas de combate no certificado; calificación médica 2018-2019 apto médico con capacidad limitada temporal entre otros antecedentes.

**29.- Copia del Certificado de Situación de las HBCs, de fecha 2 de enero el 2020,** emitido por el Regimiento N°6 Chacabuco, Brigada Maule, del Ejército de Chile, suscrito por el Mayor Juan J. Escala Oneto, Comandante del Regimiento Subrogante respecto de los últimos cinco periodos. Certificación año 2013, 2015, 2016: óptimo para el combate con notas superiores a 6.0; año 2017 apto para el combate con nota 4,58 careciendo de certificación año 2018 al no ser rendida con justificación.

**30.- Informe médico de fecha 22 de enero de 2020** suscrito por el médico psiquiatra Nelson Pérez Terán, respecto de la víctima refiriendo que el paciente Gastón Santibáñez Palomera está en tratamiento debido a consecuencias en su salud mental producto de una agresión por parte de fuerzas armadas. Debido a esto clínicamente cursó con un Trastorno por estrés agudo, indicando paroxetina 20 mg/ noche (noviembre de 2019). Clínicamente fue evolucionando progresivamente a un Trastorno depresivo con ideas e intentos suicidas asociado a la limitación física y laboral secundaria a la lesión física siendo derivado para una atención más integral al COSAM Concepción.

**31.- Copia de Licencia Médica N°3 035359539-3,** otorgada para cotizante FONASA de fecha 27 de diciembre de 2019, firmado electrónicamente por el médico psiquiatra Nelson Igor Pérez Terán, y



su respectivo Comprobante de Licencia Médica Electrónica emitida por 21 días de reposo a contar del 31 de diciembre de 2019.

**32.- Copia de Orden Médica** que instruye tomar RX. Pierna Der., muslo, de fecha 12 de diciembre del 2019, suscrita por el funcionario Dr. Marcelo Yévenes Soto, médico cirujano.

**33.- Copia de Licencia Médica N°3 034025229-2**, otorgada para cotizante FONASA de fecha 19 de noviembre de 2019, por el médico psiquiatra Nelson Igor Pérez Terán, y su respectivo Comprobante de Licencia Médica Electrónica emitida por 21 días de reposo laboral con inicio el 19 de noviembre de 2019.

**34.- 6 fotografías a color incorporadas en el Informe Pericial Balístico N° 255/2019**, confeccionado con fecha 13 de noviembre del 2019 por la perito en armamento, Ingrid Luengo Avello, perteneciente a la Sección Balística del LACRIM Concepción.

**35.- 19 fotografías a color incorporadas al Informe Pericial Fotográfico N° 592-2019**, confeccionado con fecha 7 de noviembre del 2019, por el perito profesional Rodrigo Figueroa Olivares, perteneciente a la Sección Fotografía Forense del LACRIM Concepción.

**36.- Copia de la publicación en el Diario Oficial**, Núm. 42.481-D, de fecha 19 de octubre del 2019, CVE 1671780, referida al Decreto Núm. 474, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la provincia de Concepción por un plazo de 15 días desde su publicación, de la Región del Bio Bío y designa Jefe de la Defensa Nacional.

**37.- Ficha de Atención Pre hospitalaria Básica, con Folio de Urgencias 144186**, de fecha 22 de octubre del 2019, correspondiente a don Gastón Santibáñez Palomera, emitido por SAMU Costa VIII Región. Establece mecanismo de trauma: arma de fuego. En evolución refiere paciente sin antecedentes mórbidos que sufre herida por perdigones en muslo derecho con sangrado activo.

**38.- Copia de Epicrisis con N° Admisión 65656**, suscrita por Dr. Gustavo Valdés Herrera, perteneciente a la sección de Traumatología y Ortopedia del Hospital Clínico del Sur. Con fecha de ingreso 24 de octubre de 2019 y egreso al día siguiente. Establece diagnóstico de ingreso herida por arma de fuego muslo derecho y diagnóstico de egreso herida en tratamiento Contraloría Medica de Mutual lo rechaza como antecedente de trayecto. Tratamiento recibido: "Aines" curaciones y antibióticos. Procedimiento e intervenciones realizadas: en el ingreso sólo curaciones fue operado en HCRC. Indicaciones médicas



al alta: alta reposo en su casa, se da licencia médica común por 15 días y medicamentos que alude.

**39.- Copia de Licencia médica N°2 52741978**, de la víctima, suscrita por Dr. Gustavo Valdés Herrera, perteneciente a la sección de Traumatología y Ortopedia emitida por 15 días a contar 24 de octubre de 2019.

**40.- 05 fotografías a color en las que se aprecia las lesiones**, la munición extraída del muslo de la víctima y el estado de su ropa posterior a la agresión sufrida. En **foto n° 1**: se observa muslo con herida circular; **foto n° 2**: resto de cartucho y un elemento circular tipo proyectil sobre la palma de una mano; **foto n° 3**: otra toma de igual situación; **foto n° 4**: persona de sexo femenino que muestra un pantalón tipo jeans con una de sus extremidades cortadas y **foto n° 5**: persona de sexo femenino que muestra una polera extendida de color gris con azul.

**41.- Reglas de uso de la fuerza (RUF) para Fuerza Militares** desplegadas en zona declaradas en estado de excepción constitucional de emergencia y catástrofe.

**42.- 5 fotografías acompañadas al Informe Científico Técnico del Sitio del Suceso**, N° 375/ Lesiones Menos Graves con Arma de Fuego de Gastón Alejandro Santibáñez Palomera, Servicio de Turno del día 22 al 23 de octubre del año 2019, confeccionado por el inspector Nicolás Salazar Andaur, Oficial Examinador del Sitio del Suceso.

**43.- Oficio Nro. 467, emitido por la Segunda Comisaría de Carabineros** de Concepción con fecha 20 de septiembre del 2021, suscrito por el Mayor de Carabineros Carlos L. Espinoza Garín, Comisario dirigido a la Fiscalía Local de Concepción informando que se procedió a la revisión de los sistemas institucionales, pudiendo verificar que entre los días 22 y 23 de octubre del año 2019, la única persona detenida por personal del Ejército de Chile y trasladada a dicha unidad fue el ciudadano Gastón Alejandro Santibáñez Palomera, adjuntando parte detenidos n° 4983 de 23 de octubre de 2019-

**44.- Copia del Parte Detenidos N° 4983, de fecha 23 de octubre del 2019**, emitido por la 2da. Comisaría de Carabineros de Concepción, suscrito por el Suboficial Mayor de Carabineros Marcos F. Torres Hernández, Suboficial de Guardia, y por el Mayor de Carabineros, Joel Arnoldo Ríos Cartes, Comisario.

Dicho parte establece que el día aludido alrededor de las 19:30 horas, en circunstancias que el personal del Ejército de Chile efectuaba un patrullaje preventivo por las calles de la ciudad de Concepción con



la finalidad de garantizar el cumplimiento del horario de excepción constitucional y normas del toque de queda sorprendieron transitando a pie por Avenida Paicaví esquina Bulnes a Santibáñez Palomera domiciliado en calle Janequeo n° 1142, infringiendo el horario de toque de queda quien desobedeció la orden de detención por parte de efectivos militares, quienes hicieron uso de escopeta antimotines, disparando hacia Santibáñez Palomera, quien resultó lesionado en su pierna derecha, siendo inmediatamente trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Regional por ambulancia SAMU, con la finalidad de constatar sus lesiones y posteriormente entregado en el cuerpo de guardia por el personal aprehensor del Ejército de Chile.

**45.- 2 videos de los hechos que motivaron la presente acusación**, contenidos en pendrive marca Fiddler uno de nombre “Militar dispara a ciudadano Chileno” y otro de nombre “VID-20191023-WA0019”, todo bajo custodia N.U.E. 5224480.

**46.- 1 DVD, marca HP, sobrescrito con la frase “Nota Ahora noticias”**, que contiene 1 video relativo a los hechos que motivaron la presente acusación, de nombre “DISPARO A JOVEN DE CONCEPCION”, todo bajo custodia N.U.E. 5970192.

**47.- 1 DVD, marca Sony, que contiene 1 video relativo a noticias de los hechos que motivaron la presente acusación** y revocación de la prisión preventiva que afectaba al acusado, de nombre “TT REVOCAN PRISION MILITAR CONCE”, todo bajo custodia N.U.E. 5970191.

**48.- 1 CD LACRIM Regional Temuco**, sobrescrito con “R.U.C. 1901144183-4, copia archivo PDF, informe No. 21, fecha 16.DIC.021” el cual contiene un documento de formato PDF, en el cual se encuentran detalladas las pericias realizadas, bajo cadena de custodia N.U.E. 5224898.

**49.- 30 fotografías relacionadas con los hechos objeto de la presente acusación**, bajo cadena de custodia N.U.E. 5225726 contenidas en 1 CD marca Verbatim, color sylver, con capacidad de 700 MB, sobrescrito con “1901144183-4” el cual contiene

**50.- Un arma de fuego del tipo escopeta de repetición**, con capacidad para alojar la cantidad de cinco cartuchos, marca WINCHESTER, calibre 12, fabricado en Estados Unidos, serie N° 424803, con culata y empuñadura de madera y una correa transportadora, bajo cadena de custodia N.U.E. 5950411.

**51.- Una vainilla dubitada**, constitutiva de un cartucho anti-motín y/o antidisturbios, bajo cadena de custodia N.U.E. 5952226.



**52.- Un taco de plástico, del tipo copa de cuatro aletas**, el cual fue constitutivo de un cartucho antidisturbios; y una posta de polímero de color negro, correspondiente a un proyectil esférico, el cual habría sido parte constitutivo de un cartucho antidisturbios; ambos bajo cadena de custodia N.U.E. 04229626.

**OCTAVO: Prueba independiente de la defensa.** La defensa incorporó como prueba independiente a la del Ministerio Público la pericia de **Bernardo Javier Morales Catalán**, cédula nacional de identidad N° 9.202.238-2 Médico Cirujano, quien declaró acerca de un peritaje realizado respecto de la calificación de las lesiones que experimentó el señor Santibáñez Palomera de fecha 15 de noviembre de 2022. Refiere que a solicitud del defensor realizó meta peritaje forense sobre las causas y mecanismo que provocaron las lesiones que habría sido provocado por disparo por escopeta en contexto de movilización social por funcionario público de las fuerzas armadas. Que se había impactado el muslo derecho que le provocó entrada de proyectiles balísticos tipo perdigones. Fue atendido y se le extrajo el taco quedando al interior del mismo una serie de perdigones. Fue evaluado el 23 de octubre y con una segunda evaluación en marzo de 2020 por el Servicio Médico Legal. Luego de ser visto por el servicio de urgencias tiene una serie de consultas en SAR Tucapel en CESFAM O'Higgins y la Mutual de Seguridad, todas las atenciones concluyen básicamente lo mismo que el diagnóstico de egreso del Hospital Regional. Clasificando por el Servicio Médico Legal como de mediana gravedad sanando en el plazo de 16 a 26 días. Hay evaluación conforme Protocolo de Estambul en enero del 2020 que concluye que dejó una secuela funcional transitoria e informe de cierre de abril, en donde conclusión cambia a lesión funcional permanente. Tuvo a la vista los distintos medicamentos, antecedentes clínicos más evaluaciones del Servicio Médico Legal. Desde el punto de vista para que exista lesión permanente calificada como grave o gravísima debe existir sustrato anatómico, lesiones suficientes que permitan explicar la falla funcional permanente, ya sea en tejidos blandos musculares, sin embargo no hay pérdida, sino hipotrofia generalizada de la extremidad inferior derecha, es una pérdida de masa muscular, por dejar de usar una extremidad.

La segunda razón por la que pudiere producir daño funcional permanente es por pérdida de masa ósea, ejemplo fémur, falta de consolidación, sin embargo en las evaluaciones clínicas de las radiografías no hay evidencia de ello. Lo tercero es un daño vascular como vasos sanguíneos, arteria femoral y para que haya daño funcional es que el vaso haya estado dañado importantemente. Sin embargo, de los antecedentes y evaluaciones médicas se describen como normales. Los pulsos de las arterias diversas estaban presentes al momento de su evaluación sin signo de isquemia, como que se haya puesto fría o azul lo





que no existió. El cuarto componente que pudiere ser causal permanente es el daño neurológico lo que también fue descartado por el Servicio de Urgencia y evaluaciones clínicas. Además, en el informe de salida del Servicio Médico Legal la perito Aldana utiliza una escala de evaluación funcional escala de Daniels que evalúa los grados de lesión funcional desde el 1 al 5 y lo gradúa de 4 a 5, siendo el 5 el grado normal. Y, el 4 si bien hay pérdida de la fuerza del paciente, éste tiene fuerza para empujar la mano del examinador que va en dirección contraria, por lo que existe una contradicción desde esta evaluación y lo que se informa en informe de salida que dice que hay un daño funcional permanente. Además, están las consultas siquiátricas con siquiatra de apellido Pérez que le diagnosticó ideación suicida y en se le indicó además kinesioterapia para recuperar la extremidades dañadas y recuperar funcionalidad atendido la falta de uso ya que produce atrofia y cuando no es total se le llama hipotrofia, produciendo disminución de la fuerza y produce cambio de metabolismo por el cual el musculo obtiene la energía para contraer.

Asevera que estuvo desde el mes de octubre a enero el señor Santibáñez sin el manejo adecuado, ya que sólo en enero aparece la indicación, ya que cuando se intentaba levantar le dolía y como había una impotencia funcional no lo usaba. Efectivamente existía dolor y por la mantención en el tiempo le llevó a la depresión. La kinesioterapia requiere tratamientos diarios y en el establecimiento público con suerte hay atenciones dos o tres veces a la semana. Pero de lo que tuvo a la vista no se realizó este tratamiento. Concluyendo es que no existe daño funcional permanente ya que puede recuperar, va a ser más largo o doloroso, pero se puede recuperar. No existiendo fundamento que explique el trastorno funcional como consecuencia necesaria y las alteraciones funcionales y la hipotrofia es consecuencia de la inmovilidad que el mismo señor Santibáñez incurrió.

A la defensa indicó que es médico en la Universidad de Concepción en el año 1987, luego cursó especialidad en Patología en la Universidad Católica de Santiago, fue Jefe del Departamento de estudio en Estados Unidos, luego se retiró del Servicio Médico Legal. Estuvo siete años en departamento de tanatología. Fue asesor de la fiscalía centro Norte como asesor para causas de responsabilidad médica. El año pasado le pidió la Defensoría hiciera un meta peritaje hasta diciembre del año pasado. Hizo clases por 10 años de medicina criminalística.

Complementa señalando que la lesión hubiera sido más definitiva si hubiera tenido lesión ósea al ser el soporte de la estructura corporal, al caminar en dos pies, ya que soportan más peso y son de mayor calibre, y una lesión en fémur implica la pérdida de una masa permanente de tejido óseo que puede derivar en la instalación de una prótesis que puede dejar secuelas, no existiendo pérdida de tejido óseo



como se vio en las radiografías. El daño neurológico es cuando se compromete el tronco nervioso, puede que se puedan lesionar ramas menores sensitivas o que afecten ramas motoras mayores, pero las pruebas funcionales que hizo la perito del Servicio Médico Legal no demuestra ese daño siendo los daños nerviosos irreparables. No está presente el año vascular que significa que se rompe el vaso sanguíneo, los arteriales son los que llevan sangre con oxígeno y nutrientes y los venosos son los que traen de vuelta la sangre con los desechos metabólicos. Por tanto el daño vascular más grande es el daño a la arteria, ya que se quedan sin soporte y oxígeno y cuando hay es que los pulso de las arterias más lejanas se pierden para impulsar la sangre y al dejar de llegar el oxígeno y en el caso de la pierna en no más allá de 20 minutos o media hora los tejidos se empiezan a morir no existiendo evidencia de sangramiento mayor, manteniendo la viabilidad de los tejidos no existiendo necrosis o gangrena, manteniéndose los pulsos. En cuanto a la prueba de medir la fuerza es muy sencilla, la persona se pone de cubito dorsal de espalda, levanta la extremidad y el examinar pone la mano sobre la extremidad, si no hay contracción muscular y si no percibe impulso en sentido contrario hay un daño mayor, en este caso había contracción y empuje. Si bien había hipotrofia y dolor había evidencia clínica que el musculo estaba funcionando, por lo que se puede recuperar aún más su funcionalidad. De realizarse un correcto tratamiento kinésico luego de sanar la piel lo más probable es que hubiera estado en condición normal. Califica el diagnóstico inicial herida por proyectil balística y de lesión de mediana gravedad le parece correcto con los elementos que existían en esa oportunidad. En cuanto al tercer informe de la Sra. Aldana, no le parecía correcto haber pedido un informe de cierre, no siendo correcto conforme al Protocolo de Estambul, ya que no puede ser juez y parte, no puede evaluar y calificar su propia evaluación. Existiendo al menos una contradicción ya que en el primer informe dice que las secuelas son transitorios y luego dos meses después que son permanentes.

Al fiscal señaló que hizo meta pericia fundado en los antecedentes que le remitió la defensa, tuvo a la vista el informe inicial de octubre de 2019, luego otro de marzo de 2020, el de 7 de enero de 2020 y el de cierre del Servicio Médico Legal. El primero es informe de lesiones, luego el del Protocolo de Estambul, luego una ampliación de informe de lesiones de 24 marzo y luego el del 30 de abril de 2020 de termino. Considera incorrecto que en la evaluación de Protocolo haya sugerido una reevaluación y termino de lesiones por la misma profesión, siendo independiente del texto. Lo que es criticable es que debería haber pedido una segunda opinión. La sugerencia de haber enviado una ampliación da lo mismo si fue en el protocolo de Estambul o en otro análisis distinto. No corresponde que el mismo perito haga el informe inicial y luego el informe de cierre. A su juicio la lesión es menos grave



provocada por la declaración de la víctima y el acusado sería de 30 centímetros y por eso sería a corta distancia. Afirmó que para calificar la lesión de menos grave tiene presente que una lesión leve sana en menos de 15 días, siendo una calificación médico legal de lesiones, usando el código penal como referencia. No calificó la lesión. Colocó que las lesiones menos graves tardan entre 15 y 30 días en sanar conforme textos médico legales. Tuvo a la vista el informe de término y no tomó conocimiento de un informe de discapacidad del 30% de la COMPIN. No conociendo esa información y habría que analizar los fundamentos del COMPIN, habiendo sido doctor en la Mutual de Seguridad y le tocaba evaluar y reevaluar las calificaciones de la COMPIN, ya que no se compadece con los otros antecedentes realizadas por los organismos clínicos y por el propio Servicio Médico Legal. Habría un elemento más a considerar de haber tomado conocimiento y si hubiera sabido que se amplió a 40% de discapacidad por el mismo argumento de existir fundamento adecuado debía considerarse.

El Instituto Nacional de Derecho Humanos no hizo preguntas

A la pregunta del Consejo de Defensa del Estado señaló que ha hecho clases en la mayor parte de las Universidades chilenas siendo rector, estuvo de decano en la Universidad central, también trabajó en la Universidad de los Andes, en Chile y Universidad San Sebastián entre otras.

**NOVENO: Alegaciones de clausura y palabras finales del acusado:**

El **Ministerio Público** señaló que Santibáñez Palomera fue víctima de violencia Institucional por parte del acusado, quien cometió apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en perjuicio de la víctima. Si bien la defensa desde sus alegatos de apertura invierte las calidades de los intervinientes y pretende presentar a la víctima como el acusado por tener antecedentes penales y porque mintió respecto de la hora de ocurrencia de los hechos apareciendo como responsable que la lesión se haya agravado por no cumplir con el tratamiento kinésico y por haberle mentado a la Mutualidad. Sin embargo, es un absurdo bajo un análisis serio, ya que esa pretensión no puede prosperar por ser ilógica. El día 22 de octubre de 2019 se dirigía hacia su domicilio, una habitación en calle Janequeo n°1142, infringiendo la normativa de seguridad al estar vigente el toque de queda, restricción que jurídicamente constituye sólo una falta que no habilitaba a atentar con la integridad física y síquica de las personas. Se está en presencia del delito de apremios ilegítimos, incorporado con la ley 20.968 en noviembre de 2016 en cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Chile. No hay controversia que ocurre el 22 de octubre 2019, en la Plaza Condell de la Remodelación Paicaví cerca de las 19:30 horas aproximadamente.



Donde el Sargento 2° Héctor Herrera Villa controló junto a otros militares y le disparó a corta distancia resultando lesionado. Luego es reducido violentamente y se le traslada hacia Avenida Paicaví. Nunca lo amenazó o agredió o incurrió en un acto o intento hostil, simplemente caminó frente al acusado explicándole que venía de su trabajo “yo vengo de la pega” conforme declaración de Santibáñez Palomera y perito Gonzalo Paredes autor del peritaje audiovisual. La defensa pone el foco en la credibilidad de la víctima, pero la prueba es contundente en la forma y circunstancia de los hechos. No niega que la credibilidad de la víctima es relevante, pero respecto de lo esencial, pero no se puede desatender la irrefutable prueba, independientemente de lo que diga la víctima pudiendo estar afectada su memoria atendido el tiempo transcurrido o el miedo que le tocó vivir o la circunstancia que la primera declaración se le toma en horas de la madrugada a pocas horas del acaecimiento del hecho. Los motivos pueden ser muchos pero esta cuestión no es debatida, ya que las interrogantes han sido respondidas con la prueba de cargo con la declaración de Nicolás Salazar, Capitán Morales, peritos, documental y otros. Hace hincapié en la prueba n° 71, dos videos que fueron exhibidos en múltiples oportunidades que se complementan y fueron periciados sin adulteración ni editados circulando por redes sociales. El testigo Rodrigo Shinkes se refirió como circularon los videos, como toma conocimiento y que fueran relevantes para las acciones de su Institución. Por lo que hay que concluir que en este juicio sólo hay tres cuestiones controvertidas. Primero el disparo se encuentra justificado por el ordenamiento jurídico, se alega causal de justificación de 10 n° 10, cumplimiento de un deber, alegó legítima defensa y adelantó legítima defensa privilegiada conforme ley Nain-Retamal; la segunda cuestión es el carácter de las lesiones y el tercer punto cual es el tipo penal aplicable al caso, apremios ilegítimos conforme acusa el ministerio Publico o como ha señalado la defensa infracción al artículo 330 del Código de Justicia Militar o un delito común.

Hace alusión a la declaración del imputado quien señaló “porque el civil hizo caso omiso a la orden de detención y me veo acorralado y disparo” no hubo advertencia. Conforme informe pericial balístico de Ingrid Luengo incorporando arma, taco y posta de lo que se concluye que el arma es de fuego convencional que puede ser utilizada con munición real o antimotines, no perdiendo su naturaleza de arma de fuego. La vainilla fue usada por el arma y el taco formó parte de un cartucho y se extrajo de la pierna de la víctima. La víctima señaló que ese día cambió su vida siendo fiscalizado y trata de explicar que venía de su trabajo y que llevaba en su mochila ropa de trabajo y ocurrió el disparo, lo lesionaron, que lo humillaron y se reían de él, lo amarraron violentamente. Lo trasladan al Hospital, le extraen el cartucho escuchando su testimonio y las fotografías (N° 52) que fueron tomadas



en el centro asistencial, agregando que ya no puede trabajar en la construcción ya que perdió la movilidad de su pierna derecha, que jamás lo agredió o amenazó y lo que más le duele es la forma como lo trataron. Esto es pertinente para el tipo penal de apremios ilegítimos que tutela la integridad moral, que va más allá de la afectación física, se humilla o se menoscaba a la persona y por eso el hecho no es sólo el disparo, sino la violenta forma en que lo reducen, le amarran las manos los improperios que le dice el acusado, la forma violenta en que lo dejan en la calle siendo lo que le da sustento al tipo penal.

El perito Paredes que compaginó el video 1 y 2 y cuatro segmentos de videos están ampliados y relentizados explicó la dinámica de los hechos y permite ver aspectos relevantes para entender el contexto. Varios funcionarios realizan procedimiento al exterior de los bloques de departamentos, se ve gran cantidad de uniformados conforme fotografías (N° 76). Se pudieron extraer dos audios de los videos periciados, en uno se oye “yo vengo de la pega” en otro “tírate al suelo mierda” luego se oye el disparo, cojea, lo toman bruscamente, se acerca otro militar y se lo llevan. La exhibición es contundente con lo que ocurrió aquella tarde noche de octubre de 2019.

El Capitán Morales indicó el despliegue del personal de Ejército que formaba parte de una unidad fundamental, militares que salieron a controlar el toque de queda, indicando que eran 86 militares divididos en tres secciones que a su vez se dividían en escuadras, estando a cargo de la UFE n° 3. Llevaban fusiles y con la documental se detalla el tipo de armamento, la gran mayoría llevaba fusiles y el clase una escopeta antimotines, todos con armas de fuego y dentro de los 20 tiros llevan 3 de salva y 17 municiones de guerra. Siendo el sequito que rodeaba al Sargento Herrera el día de los hechos. Dijo conocer las reglas del uso de la fuerza señalando los principios de proporcionalidad, responsabilidad y gradualidad y que Herrera había dicho que le disparó a un civil que se le abalanzó. Indicó que la escopeta dijo que se podía disparar a no menos de 10 metros por el nivel de daño que ocasionaba el arma y se evidenció una contradicción con lo ya señalado en Fiscalía en donde estimó en su oportunidad que “creo que no es proporcional el uso de la fuerza que empleo” por tanto el propio superior jerárquico reconoce y declara que no es proporcional el uso de la fuerza al disparar.

El Inspector Salazar respecto de las fotos del arma y sitio del suceso, lo que se relaciona con la pericia planimétrica y geo referenciación y plantas o planos indicó conocer el lugar y para ver si obró causal de justificación se estableció que el lugar donde ocurren los hechos es un lugar encajonado, siendo un verdadero rectángulo de fondo de 10 metros y una sola entrada, ya que a ambos lados hay un muro de hormigón siendo el lugar donde se produce el disparo, rodeado



de militares y de ninguna manera se puede entender legitimado, no existiendo proporcionalidad en su acción.

La doctora Aldana nos habla de las lesiones y Kiyomi Kanda concluyó que la afectación sufrida por éste no puede ser mejor explicada que con los hechos que le tocó vivir. No puede estimarse que el disparo esté justificado ya sea por el artículo 10 n° 10 o por la legítima defensa. No respetar el toque de queda constituye una falta penal lo que no habilita la detención en razón 124 y 134 inciso 4to del Código Procesal Penal, ya que sólo procedía la citación, siendo una detención ilegal por lo que el proceder se torna abusivo. Empleando la fuerza irracional contra el infractor al que no le estaba permitido detener. Además de la ilegalidad del procedimiento afectado es además por haber infringido las reglas fijadas por la propia Institución. De la prueba videos no se aprecia que la integridad del militar haya estado comprometida, existiendo una abierta contradicción, evidenciando infracción tanto a la normativa interna como a la internacional. El armamento empleado es un arma de fuego por lo que debe ser considerado el mecanismo de acción y la mala calificación de arma no letal preguntado a la perito Aldana no es aplicable en la especie, ya que puede ocasionar lesiones graves o la muerte en cierto casos teniendo un potencial dañino innegable. El disparo fue a 1,9 metros de distancia pero hay que descontar la embargadora del arma, por lo que existió menos de un metro de distancia y el Capitán Morales dijo que no podía ser disparada a menos de 10 metros. Excedió el uso de la fuerza conforme lo que se dijo estando limitada por la legítima defensa y es para verificar un acto hostil lo que descarta y de estimar se estaría frente a una hipótesis de acto hostil. Existía a lo menos una sospecha razonable de que se perpetraría un acto hostil? Sin embargo, antes de usar el arma se debían tomar las medidas para disuadir ya que era el último recurso, y aun cuando Santibáñez Palomera continuará el desplazamiento hacia el militar se aprecia la existencia de la Cabo Huinao que estaba detrás de la víctima a poca distancia del señor Herrera y perfectamente podrían haber coordinado previo al uso del arma de fuego. El punto relevante es la proporcionalidad.

De las imágenes que se vieron Gastón Santibáñez se encontraba bajo custodia de la patrulla militar, ya no es aplicable la agravante en virtud del artículo 18 y normas constitucionales y Gastón Santibáñez estaba en la imposibilidad de desplazarse libremente, descartando que se constituya la causal del art 10 n° 10 ya que no podemos asumir que cualquier ciudadano en contexto de un control del toque de queda pudiera hacerse merecedor de un disparo a quema ropa lo que no es admisible en un estado de derecho. Tampoco hay legítima defensa, no obstante haber invocado la ley Nain-Retamal lo que se presume es la racionalidad, pero en ningún momento hay agresión ilegítima que



exige actualidad e inminencia y a la menor distancia que obtuvo fue a dos metros y en ningún momento estuvo amenazado o detenido.

Quedó con una secuela permanente conforme peritaje doctora Aldana lo que es compatible con la resolución de la COMPIN que estableció una incapacidad del 30%, no tomado en cuenta en la meta pericia, no concurriendo causal de justificación desplazando la figura del artículo 330 del Código de Justicia Militar solicitando un veredicto condenatorio.

En su clausura la querellante **Instituto Nacional de Derechos Humanos** indicó que los hechos de la acusación cumplen a cabalidad con el tipo penal por el que se acusó, lo que se cumplió conforme las pruebas incorporadas. La fecha, hora y lugar está plenamente acreditado. En cuanto a la hora se ha pretendido por la defensa sembrar un manto de duda respecto de la versión del acusado, destacando que este hecho no se considerara un accidente de trayecto por las diferencias de salida de su jornada de trabajo haciéndolo ver como un mentiroso sólo por las imprecisiones del horario, resultando trascendente lo señalado por la pericia del Servicio Médico Legal y las inconsistencias del relato no quitan validez a la vivencia, siendo como se dijo poco esperable que su relato fuera preciso. No existiendo duda que los hechos ocurrieran a las 19:30 horas estando el acusado desplegado en razón del estado de excepción que fue acreditado por la declaración del acusado y del testigo Claudio Morales que señaló que estaba a cargo de una de las unidades fundamentales, estando desplegados en la ciudad que dentro de una de las secciones eran comandadas por el acusado en igual sentido la documental n°27 en que el Jefe del estado Mayor da cuenta que el acusado estaba desplegado el 22 de octubre y la madrugada del día 23. En igual razón el documento n°28 en donde se indicó a los funcionarios que participaron individualizando al acusado y el arma que portaba estando en ejercicio de sus funciones en control del Orden Público y del toque de queda. Siendo en ese contexto que fue sorprendido en control de la patrulla militar armado con escopeta de repetición anti disturbios sin perjuicio de la apreciación directa de los dos videos que fueron periciados por el funcionario Paredes y los videos relentizados y su perfeccionamiento.

En su apertura adelantaron que el tribunal encontraría un correlato con los dichos de la víctima y serían el reflejo de lo dicho por la víctima cuyo relato se mantuvo en el tiempo al señalar que sólo intentaba señalar que no hacía nada y que sólo venía de su trabajo respondiendo un “tírate al suelo mierda” siendo la víctima luego del disparo, zamarreada, reducida violentamente junto a otro funcionario del Ejército, esposado con amarras plásticas y trasladado hasta la calle Paicaví donde es trasladado hasta los detenidos. Rodrigo Chinkes funcionario del I.N.D.H llegó al lugar momentos después, describiendo las fotografías que se consignaron, particularmente fotos n°7 a 13°



acreditándose que el acusado incumplió la normativa de las reglas del uso de la fuerza las que debían ser conocidas por todos los funcionarios. En la letra B.4 establecen el uso racional y proporcional bajo el concepto de legítima defensa, la que se define como la necesaria y proporcional incluyendo la fuerza cuando se está frente a un acto hostil. El acusado dijo que consideró que estaba frente a un acto hostil y las mismas reglas dicen que son aquellas que puedan traer aparejado un daño físico importante, pero el sólo hecho de caminar al acusado intentando explicarle las razones de su presencia en el lugar y mostrar el contenido de la mochila que portada pueda ser estimado como un acto hostil?. En el punto 8C establece que la legítima defensa debe primar la proporcionalidad en el uso de la violencia letal, no existiendo proporcionalidad en el video exhibido tal como lo declaró el Capitán Morales. El acusado usaba una escopeta antidisturbios, la que debe usarse cuando hay disturbios cuando hay mucha gente y no debe usarse a menos de 10 metros ya que puede generar un daño mayor y producir heridas más graves. Un acto hostil está definido en las reglas del uso de la fuerza incluyendo además las que pudieren derivar en un acto hostil, es decir producir la muerte o un daño importante, pero el acusado no dio cumplimiento al deber de advertencia y señaló que en múltiples oportunidades le dijo que se tendiera o detuviera, pero ante su pregunta indicó que no hizo advertencia antes de hacer el uso de arma de fuego. El ordenar que se tienda en el suelo no puede ser estimado como una advertencia.

En su apertura se preguntaba si era necesario ocupar la escopeta y provocar el daño que se provocó en la víctima ya que la misión era el resguardo del orden público. En la Remodelación Paicaví estaba a lo menos la UFE N° 3 compuesta por 86 funcionarios militares. Existía otro medio menos lesivo.? Considera que si, existía personal militar junto al acusado, existiendo una funcionaria que camina detrás de la víctima, otras formas de proceder, formas menos lesivas. Sin embargo, se provocó un sufrimiento grave. La distancia era 1,9 metros por lo que desde la boca del cañón y la víctima era sustancialmente menor. El acusado dijo estar encerrado, a pesar de existir 8 o 9 metros de distancia hasta el muro posterior como lo indicó la perito Cabezas conforme su pericia. Más allá del disparo a corta distancia resultan trascendente las acciones posteriores como es la reducción violenta, zamarreando a la víctima que había sufrido ya el disparo con evidentes señas de dolor, que sangraba pudiendo escuchar en el video n° 2 en el audio “mira la sangre ahí se alcanza a ver la mancha de sangre” no prestándole ayuda de manera inmediata. Decidiendo el acusado que estaba a cargo del procedimiento trasladarlo hasta el camión de detenidos y dejarlo allí junto a otros detenidos. El Capitán Morales dijo que sólo ante su orden ordena que desciendan a la víctima y que se le presten los primeros auxilios, lo que indiciario de infringir dolor,





señalando que lo trataron peor que un perro, se sentía fracasado, lo esposaron que se reían de él como dijo la víctima y sintomatología descrita por Kiyomi Kanda que dio cuenta que presentaba sintomatología ansiosa depresiva, disminución estado de ánimo, ideación suicida, cambio de su sentido corporal y eficacia personal existente aún un año y medio luego de ocurrencia de los hechos lo que revela la entidad de los sufrimientos. En cuanto a las lesiones, comparte el criterio del Ministerio Público. Estima que los hechos sólo pueden ser calificados bajo el tipo de apremios ilegítimos. Cobra relevancia el llamado a conocer los hechos desde una perspectiva con enfoque a los derechos humanos, la calidad de agente del estado es relevante trascendiendo a los delitos comunes, siendo esta calidad por el principio de especialidad debe primar sobre el tipo común no siendo antojadizo acusar por este tipo penal y de ahí que acusaran.

Existe un plus del injusto, por el cargo y función que cumplía el acusado y la desproporción en su actuar, el apartamiento de la normativa. Constituyendo un delito pluriofensivo provocando en la víctima sentimientos de humillación y degradación “me trataron peor que un perro” dijo. En relación a las causales de justificación estiman que deben ser desechadas particularmente por lo que adelantaron. En cuanto a la legítima defensa privilegiada estima que se ha acreditado que no existió agresión ilegítima, no existiendo acto hostil o intento hostil contemplada en las reglas de la fuerza descartándose el presupuesto base. Aunque se estimara que el simple hecho de caminar desarmado en dirección del acusado se estimare como acometimiento no pudo ser entendida como una potencialidad grave de su integridad física del acusado y mucho menos de un tercero. Además no hay uso racional del medio. Finalmente, en lo que respecta a la causal del 10 n° 10 se debe descartar, ya que la ley no lo exime de cumplir las reglas del uso de la fuerza e infracción de los principios de proporcionalidad y racionalidad. Por tanto se acreditó la existencia y participación por lo es de dictar un veredicto condenatorio.

La querellante **Consejo de Defensa del Estado** señaló en su clausura que el uso de la fuerza que es desplegada por el acusado no está respaldado por el ordenamiento jurídico. La defensa señala que sólo resguardaba el orden y seguridad pública. Sin embargo, señaló que hubo más de 180 incidentes reportados no acompañando antecedente que permita objetivizar dicha información. Indicó que se quemó SODIMAC, pero esa incidencia fue el día 21. El acusado no tenía sólo esa obligación de resguardo y protección tenía que ir en favor de la propia víctima. El acusado era agente del Estado y debía obrar con racionalidad y proporcionalidad. Las fijaciones filmicas hacen reafirmar que no existiría una legítima defensa privilegiada pudiendo constatar de la declaración del acusado que no había otra acción que desobedecer que se tendiese del suelo y avanzara hacia él. En dialogo



tampoco se logra advertir que si no le obedecía le iba a disparar, lo que tampoco pasó. No se obró en cumplimiento de un deber, ya que el actuar de los funcionarios públicos debe ser coincidente con las reglas del uso de la fuerza. Se tuvo a la vista las fijaciones fílmicas no existiendo parámetro que permita establecer que la actuación de la víctima pudiese ser considerada como una amenaza. Debe saber usar el arma. Si bien se argumentó que el acusado estuvo asignado a unidades distintas lo cierto es que tenía formación de soldado general y aprendió a usar armamento existiendo certificación anual durante el tiempo que están activos, desplegando estrategias de pelea como lo señaló el Capitán. Se está frente a una persona de a pie que infringió el toque de queda, siendo soldado se esperaba un manejo mínimo esperable. Estima que esta frente a un delito de apremios ilegítimos, no obstante haber acusado por un tipo penal diverso en su acusación particular. La defensa ha cuestionado el daño y la falta de la intención de atentar contra su dignidad. Mediaron graves consecuencias en la víctima, el arma de fuego usada, las consecuencias generadas en la víctima conforme su relato, la edad de la víctima que era de baja estatura y contextura delgada en situación de vulnerabilidad al momento de los hechos a diferencia del acusado que era un jefe de escuadra acompañado de otros funcionarios del ejército. La víctima no se quería abalanzar sobre el funcionario, no existiendo la amenaza denunciada por el acusado. Debiendo desestimar las justificaciones alegadas considerando que era un funcionario que en ejercicio de funciones públicas dispara a la víctima. Se evidenciaron contradicciones, Herrera Villa refiere que no tenía mayor manejo del arma, pero el Capitán Morales dice que para que se le pase un elemento antidisturbios debe tener capacitación de dicha circunstancia, lo que cobra relevancia ya que el arma sigue siendo un arma de fuego a pesar de tener munición distinta. Dijo que no sabía usar esa arma, que no había tenido instrucción, pero señaló que si le pegaba con la culata podía tener una fractura craneal o en las costillas y tener una perforación pulmonar, por lo que malamente podía llegar a esas conclusiones si no sabía del manejo del arma.

Señaló que habían sido agredidos en el lugar de los hechos, pero un funcionario de los derechos humanos dijo que no vio agresión de civiles a personal del Ejército y que los civiles que rondaban eran inferiores en número, siendo los militares superiores, por lo que resulta dudoso que contantemente habían sido agredidos en esa jornada. Santibáñez no estaba armado, no se le incauta elemento corto punzante, pero Morales dice que había una actitud defensiva ya que sacaría un elemento, pero al tenor de los videos resulta inverosímil, contradiciéndose en sus afirmaciones de los relatado al ministerio Público y lo señalado en estrados. La formación militar entrega habilidades básicas perfeccionadas durante la carrera militar



independientemente de haberse dedicado a ayudante de mozo o peluquero, por lo que estando en las circunstancias de excepción constitucional tienen la obligación de proteger aún más los derechos humanos estando frente a un civil desarmado que venía del trabajo existiendo una desproporción solicitando una sentencia condenatoria.

La **defensa** en su clausura señaló que el acusado cumplió la misión encomendada de controlar el orden público y específicamente el toque de queda, que los ciudadanos no se desplazaran luego de las seis de la tarde. El mando señaló que debían detener a quienes estaban transitando y entregarlos a carabineros. Hay veces que somos osados, pero decir que es una mera infracción que no amerita detención es temeraria esa alusión y en esa época la autoridad decía que se podía detener incluido el Ministerio Público. El mando le entregó un arma y le señaló que la podía usar en cumplimiento de las reglas del uso de la fuerza, era un arma no letal cuando se dieran los supuestos de esas normas. Hoy conforme artículo 18 conforme la ley Nain-Retamal. Solicitó la absolución ya que actuó en cumplimiento de un deber, pero además del artículo 11 n° 6 de la ley aludida, la que a diferencia de la lectura de los acusadores indica que se presume concurrir todas las circunstancias de la legítima defensa. La ley 21.560 es una ley que contempla estatuto que protege a personas de las fuerzas armadas y cubre todo el aspecto de la actuación de la función policial, los protege desde que salen de la misión y durante el proceso, modificando delitos como del artículo 150 letra E y posibilitando que las fuerzas militares hagan uso de sus armas cuando estén en cumplimiento del orden público en ocasión de cargo a fin de repeler o impedir una agresión que pueda afectar su integridad física, su vida o de un tercero usando las armas, nos guste o no. En términos de pena es reafirmar la vigencia normativa del derecho, por cuanto permite a dichos agentes de Estado hacer uso de sus armas para repeler o impedir una agresión, es decir presume que el agente público está en una situación de agresión presumiendo la agresión ilegítima, proporcionalidad y falta de provocación suficiente. Permite que se usen las armas y no tienen que esperar la agresión y si hay una agresión penal no aplico medida cautelares, se mantienen trabajando. En el juicio no ha aportado prueba suficiente, atendida la inversión de la carga de la prueba que haya existido una agresión ilegítima y que el medio probado haya no haya sido proporcional, lo que no ocurrió. Hoy no hay toque de queda, no hay estallido social, pero si se viera hoy fuera del tribunal a un militar armado y camináramos 18 pasos hacia él y no los detuviéramos eso no lo hace nadie ya que tiene un arma, a la luz del día.

Acá existió una agresión como una actitud humana que tiende a lesionar, ya que fue pacífico que Santibáñez Palomera estaba en toque de queda en la Remodelación Paicaví, llamando unas personas “aquí, aquí, aquí” existiendo dos personas y una de ellas cumple la orden del



Estado y el acusado militar de uniforme, Herrera retrocede lo que se ve y es reafirmado por el perito planimétrico al señalar que caminó 16 o 17 metros. Se le advertía, tírate al suelo, no obstante ello seguía avanzando hacia él, incluso la víctima dijo que le dio susto y por eso había disparado. Es pacífico que estaba escondido en un lugar y que enfrenta al militar dirigiéndose al acusado. Debe considerarse las circunstancias del caso concreto y quien desafía al profesional armado con desordenes que relató el funcionario investigador es Santibáñez Palomera. El único medio de cortar el avance fue con el disparo. Además, éste último se acercaba a una zona de seguridad o resguardo presumiéndose la agresión ilegítima, siendo inminente y autorizado por el ordenamiento jurídico para repeler o impedir esa agresión.

Se está frente a una agresión ilegítima, quien retrocede es Herrera, presumiendo la racionalidad del medio empleado. El Ministerio Público parte de la base que está probado que el arma era letal, siendo sólo especulaciones y la propia perito Aldana señaló que dependía del arma y munición y el Capitán Morales dijo que era un arma no letal, ya que no ocasionaba la muerte de una persona. En informe balístico incorporado señaló que los cartuchos poseían 12 postas de polímeros señalando que tenían poca masa ni gran alcance entre otros conceptos que revelan la ausencia de dicho carácter. En la R.U.F 1.7 autoriza el uso de la fuerza contra las personas que limiten o se oponga o intente limitar la función o tarea asignada, cuya misión era detener a las personas que infringían el toque de queda. Se estaba frente a un acto hostil, una amenaza del uso inminente de la fuerza que se demuestra derivar en un acto hostil, existiendo una sospecha razonable de ello y debe ser evaluado por quien este en posición. Señalando el Capitán que estaban autorizados para disparar el arma, en caso contrario saldrían a nada. La víctima caminaba hacia Herrera, estaba impidiendo la misión. Se dice que no hubo advertencias, la cabo Huinao declaró y se desprende que mediaron las advertencias, el perito audiovisual sólo indicó lo que quería, no señalando lo previo al hecho. Carrasco Vera dijo que se le habían hecho varias advertencias. Se hizo un uso racional de la fuerza ya que en forma concreta y categórica la proporcionalidad no se debe analizar en equivalencia matemática, sino al caso concreto. Entiende que se configura causal de justificación de legítima defensa conforme parámetro de ley 20.560 debiendo absolver de los cargos ya que su actuar ha sido justificado. Hay que analizar el tipo penal por el que se le acusó, debiendo existir una crueldad e inhumanidad, instrumentalización de la víctima, un absoluto dolo o intención de atentar a la dignidad humana, debiendo asimilarla al homicidio calificado del ensañamiento, equiparablemente también a los malos tratamientos de obra como hacer caminar a una persona desnuda en la lluvia, descalzas por piedras filosas que demuestren desprecio, lo que no ocurre en la especie, ya que se le hiere, lo amarra lo que es un



elemento justificatorio del mismo artículo 150, es decir derivadas de un acto legítimo de la autoridad. No abusando de su cargo, ejecutó una misión y conforme las instrucciones del mando conforme a la R.U.F. Se ha hablado de las consecuencias en la afectación a la integridad moral, pero conforme los hechos de la acusación no se ve una imputación o lesión de carácter síquica o transgresión a la integridad moral y los hechos podría ser impertinentes. Se probó que se le prestó auxilio, se le colocaron gasas e intentó hacer un torniquete. La acusación dice que recibió presiones no indicando por quien fueron proferidas no existencia evidencia que se le pegó en la cabeza, no hablando que fue Herrera, no existiendo prueba no pueden ser establecidos ya que no están contenidos en la acusación, ya que en caso contrario se está frente a un delito común. Tampoco resulta aplicable el artículo 330 del Código de Justicia Militar por cuanto a la prueba actuó conforme a un deber y cumplió la R.U.F, existiendo un acto hostil, con un arma no letal existiendo un intento de agresión, la propia víctima y el acusado dijo que le daba miedo.

Finalmente en cuanto a las lesiones, el artículo 397 establece un tipo penal descriptivo pero si de resultas de las lesiones hay que quedar imposibilitado para el trabajo. No existiendo prueba para establecer que hacía Santibáñez Palomera, la perito Kiyomi Kanda hizo un peritaje con falta de rigor que dice que era maestro de la construcción, pero no hay claridad para definir que la inhabilidad para el trabajo opera. Sin perjuicio, se debe acreditar la relación de causalidad, esto es que el daño sea consecuencia de la agresión. No se produjeron lesiones óseas, vascular, daño neurológico como declaró el perito Bernardo Morales y si se hubiere echo una kinesiología adecuada se hubiera mantenido el diagnóstico inicial de lesiones menos graves, no resultado privado que eran lesiones de carácter permanente. Fue la propia conducta de la víctima que no fue a kinesiología o de los facultativos que no le recomendaron tal situación lo que no puede imputarse al acusado. Finaliza indicando que se debe absolver por concurrir justificante de legítima defensa o cumplimiento de un deber y espera un veredicto absolutorio.

El Ministerio Público no hace uso de réplica al igual que los querellantes.

Dada la palabra al acusado indicó que ya tuvo la oportunidad de prestar declaración no deseando agregar nada más.

**DECIMO: Hechos acreditados.** Que el Tribunal, apreciando la prueba antes referida con entera libertad y sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, ha llegado a la convicción que se encuentran acreditados, más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos:



*“El día 22 de octubre de 2019, alrededor de las 19:00 horas, en las inmediaciones de la Plaza Condell de la comuna de Concepción, la víctima Gastón Alejandro Santibáñez Palomera, fue sometido al control de una patrulla militar integrada por al menos 3 funcionarios del Ejército de Chile, armados dos de ellos con fusiles de guerra y el acusado identificado como el Sargento Héctor Hernán Herrera Villa, estaba a cargo de una escuadra de militares y portaba un arma de fuego del tipo escopeta de repetición, con capacidad para alojar 5 cartuchos, marca Winchester, calibre 12, quien se encontraba en el ejercicio de sus funciones consistente en el control del cumplimiento del toque de queda decretado por la autoridad para mantener el orden público. En estas circunstancias, el Sargento del Ejército de Chile don Héctor Herrera Villa, abusando de su cargo y funciones, infringiendo la normativa sobre Reglas para el uso de la Fuerza en estado de emergencia (RUF), estando la víctima bajo su control y encontrándose impedida de desplazamiento libre ya que era apuntada con la escopeta que portaba el imputado, además de encontrarse rodeado de personal militar, y sin que efectuara siquiera intento de fuga o agresión a quien lo fiscalizaba, procedió el imputado a aplicar apremios ilegítimos a la víctima, consistentes en dispararle a quemarropa a unos 30 centímetros de distancia con la escopeta que portaba, impactando la pierna derecha de Santibáñez Palomera, hiriéndole a la altura del muslo, para luego violentamente reducirlo y detenerlo en el mismo lugar, trasladándolo a Avenida Paicaví, lugar donde es arrojado al suelo. Producto del disparo la víctima sufrió un trauma por proyectil de alta energía, debió ser sometido a una intervención quirúrgica para extraerle la munición y el taco del cartucho, que quedaron alojados al interior de su muslo derecho, resultando en definitiva con una lesión por perdigones en su muslo derecho, con secuela funcional, deterioro físico en miembro inferior derecho, lo que se traduce en una limitación funcional a la deambulacion, siendo calificadas como lesiones de mediana gravedad”.*

**UNDECIMO: Contexto, ubicación temporal y espacial de ocurrencia de los hechos:** Sin perjuicio de no ser un hecho discutido por los intervinientes los hechos atribuidos a Herrera Villa, se enmarcan dentro del llamado estallido social ocurrido en Chile en el mes de octubre del año 2019, situación refrendada con la incorporación del decreto N° 474 emanado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de 19 de octubre de igual año que decretó por 15 días estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la provincia de Concepción. Siendo en tal contexto, bajo la imposición de un toque de queda que impedía la normal circulación de las personas a contar de las 18:00 horas en que se habrían suscitado los hechos atribuidos por el persecutor.



En particular, para establecer el día y lugar preciso de ocurrencia de los hechos se contó con la declaración de la víctima Gastón Santibáñez Palomera, quien se ubicó en las inmediaciones de la Remodelación Paicaví, transitando por el lugar con destino a su domicilio en las cercanías del lugar. Sin perjuicio de esta declaración, la ubicación espacial pudo ser apreciada por este tribunal por medio de la exhibición de los videos incorporados (signados bajo el número 45 de otros medios de prueba incorporados) y prueba fotográfica exhibida en conjunto con la declaración de la perito Karina Cabezas Gatica. Tal profesional, evacuó un informe pericial planimétrico ubicando los hechos a la altura del edificio n° 982 de Avenida Paicaví, lo que es coincidente con la fotografía satelital y plano gráfico incorporado (N° 5 y 6 de otros medios de prueba) y con el oficio n° 140 emitido por la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción que informó que conforme sus registros la única persona detenida el día 22 de octubre de 2019 en un horario comprendido entre las 18:45 horas y 20:00 horas en las inmediaciones de Plaza Condell y Remodelación Paicaví fue don Gastón Santibáñez Palomera, a la sazón quien tiene la calidad de víctima de estos antecedentes. Ubicación concordante con lo declarado por diversos testigos como el Capitán de Ejército Claudio Morales Valdés, quien refirió que el 22 de octubre de 2019 le dieron la misión de resguardar el orden público en la Remodelación Paicaví; lo declarado por el Inspector Nicolás Salazar Andaur, quien ante llamado de fiscal de turno concurrió al sitio del suceso para comparar el video que circulaba en redes sociales con lo que distinguió como la Remodelación Paicaví y con lo que se pudo observar en las fotografías acompañadas al informe técnico del sitio del suceso signado bajo el n° 42 de otros medios de prueba incorporados. Además, en igual sentido lo expuesto por quien estuviere en los momentos posteriores a los hechos y fuere testigo de la detención de la víctima el funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos Rodrigo Chinkes Goldstein que conforme sus dichos llegó al citado lugar una vez concluidas las manifestaciones, pasadas las 19:00 horas viendo a quien con posterioridad reconocería como Santibáñez Palomera como el sujeto herido por personal militar que fuere herido y detenido en el lugar.

**DUODECIMO: Calificación jurídica y participación:** Que los hechos consignados en el considerando décimo con constitutivos del delito de apremios ilegítimos tipificados en el artículo 150 letra D del Código Penal desde que un agente del Estado abusando de sus funciones aplicó apremios ilegítimos cuyos alcances no alcanzan a constituir tortura correspondiéndole al acusado la participación de autor de conformidad al artículo 15 n° 1 del Código Penal de un delito en grado desarrollo consumado.



Dichos “apremios ilegítimos” u “otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” no tienen una definición legal en tratados internacionales o ley nacional y para determinar su alcance necesariamente deben compararse con la tortura, en base al grado de intensidad del sufrimiento provocado por el trato o castigo infligido.

Que hay consenso en la doctrina acerca de que en dicho ilícito es la integridad moral de la persona el bien jurídico que el legislador desea tutelar, que dice relación básicamente con la dignidad humana, con su derecho a no sufrir padecimientos físicos o psíquicos que supongan vejaciones, humillaciones o tratos análogos.

Qué especial importancia tiene el artículo 1° de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el artículo 2° de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura al ser fuente directa para determinar lo que debe entenderse por tortura y lo que no lo es, y así establecer también, según estándares internacionales, sin escapar a la normativa nacional cuando se está frente a los apremios ilegítimos. En razón de lo expuesto es de tener presente que en la discusión legislativa orientada a modificar el Código Penal conforme la ley 20.968 el ejecutivo ya precisaba que los tratos crueles e inhumanos o degradantes consisten en una versión degradada de la tortura, añadiendo que hay requisitos que son diversos, como son una menor gravedad e intensidad y la ausencia de la necesidad de que concurra la finalidad que está detrás de la tortura. Indicándose inclusive que el profesor Hernández propuso que se incorporase la frase “que no alcancen a constituir tortura” para efectos de dejar en claro que se trata de conductas similares a las del artículo 150 letra A; esto es, infringir dolores o sufrimientos y, además aplicar métodos que tiendan a anular o disminuir la capacidad de conciencia y voluntad del sujeto, pero en un estado inferior a la tortura.

**DECIMO TERCERO: Sujeto activo:** Que además de lo anterior, de la redacción del artículo 150 letra D, es posible extraer que se exige para la concurrencia del ilícito que éste se cometa por parte del empleado público con abuso del cargo o de sus funciones, que se erige como un elemento subjetivo especial, adicional al dolo. Es decir, un sujeto activo calificado, como es un funcionario público. En este sentido, tal calidad sin perjuicio de no ser cuestionada resultó suficientemente acreditada con la prueba documental incorporada. A saber, el oficio remitido y suscrito por el General de Brigada, Osvaldo Martínez, Jefe del Estado Mayor del Ejército Subrogante (N°21 otros medios de prueba) que informó que el acusado Héctor Herrera Villa es Sargento 2° de la Institución perteneciente a la dotación del Regimiento Chacabuco, quien en conjunto al Capitán Claudio Morales Valdés y otros funcionarios militares efectivamente patrullaron la ciudad de Concepción el día 22 de octubre y madrugada del día 23 en





horario de toque de queda. Por medio de tal oficio, a su vez se remitieron las hojas de calificaciones del acusado. (N°23, 24, 25 y 26 otros medios de prueba)

Fuera de lo anterior, conforme documento titulado Empleo de Medios de Emergencia (N°22) la Institución castrense informó que aquel día mediaron 3 UFE, compuestas a su vez por distintas secciones, siendo la UFE N° 3, primera sección comandada por el Capitán Claudio Morales Valdés y en el puesto n° 2 como C.V.M y R.OP el Sargento 2° Héctor Herrera Villa -acusado- informando que éste portaba un fúsil que individualizó. Esta última situación coincidente con las fotografías incorporadas (N° 35 N°1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8) en que se aprecia la escopeta utilizada consistente en el arma levantada por la perito Luengo Avello del Regimiento Chacabuco. Sin perjuicio del oficio emitido por la autoridad fiscalizadora de la Primera Comisaría de Concepción dirigida a la Fiscalía Local de Concepción por la que se acusó recibo de dicha escopeta Winchester de igual serie y la escopeta misma exhibida en audiencia individualizada bajo el n° 50 de los otros medios de prueba.

Conforme lo expuesto, la calidad de funcionario público requerido por la disposición del artículo 150 letra D del Código Penal, conforme a lo previsto por el artículo 260 del mismo cuerpo legal, resultó establecida, ya que a la fecha de los hechos desempeñaba un cargo o función pública en una institución creada o dependiente del Estado, la cual había sido llamada atendida la contingencia social y el estado de Emergencia decretado a auxiliar en la contención del orden público.

**DECIMO CUARTO: Premisa Constitucional en cuanto a la legitimidad del uso de la fuerza por agentes del Estado en un Estado de Derecho:** Que, como planteamiento inicial, cabe señalar que en virtud de las obligaciones que en materia de DD.HH ha contraído el Estado de Chile, la premisa básica que debe guiar el examen de los antecedentes y probanzas rendidas es la **excepcionalidad en el uso de la fuerza por parte de las policías o entidades encargadas en el caso concreto de mantener el orden público**, no pudiendo desatender lo consignado al respecto en instrumentos internacionales que gozan de jerarquía constitucional, como tampoco las interpretaciones que emanan de los órganos encargados de promover el cumplimiento y la defensa de los DD.HH. Lo anterior, considerando que el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, a través de sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, afectan los derechos de las personas apareciendo un conflicto entre la seguridad y el mantenimiento del orden público y el pleno respeto a dichos derechos, por lo que resulta indispensable establecer y delimitar el uso de la fuerza por funcionarios estatales. Es en búsqueda de ese equilibrio y en no desconocer la necesidad de que el mantenimiento del orden social puede requerir el uso de la fuerza bajo ciertos parámetros para hacer cumplir la ley por sobre los que incumplen cometiendo actos



delictuales o infraccionales es que tal ejercicio está autorizado. Tal situación reviste de mayor importancia en el contexto de manifestaciones públicas como ocurrió en nuestro país en donde el desorden o hechos de violencia afectaban las actividades normales de la ciudadanía coadyuvando conductas violentas o inminencia de ellas y otras exposiciones legítimas.

A saber, el resguardo de la integridad física y síquica de las personas además de estar reconocida en nuestra Carta fundamental en el artículo 19 n° 1, ha sido recogida en numerosos tratados internacionales ratificados por Chile como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de derechos Humanos que en su artículo 1.1 refiere que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 2.1 en igual sentido establece que “cada uno de los Estados parte en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto” con iguales limitaciones las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos teniendo presente además lo indicado en el artículo 5° de la carta magna que incorpora como límite a la regulación legal nacional en tanto contienen derechos esenciales a la naturaleza humana.

Conforme lo expuesto se han desarrollado ciertos principios internacionales de derechos humanos como son los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad que regulan el uso de la fuerza y de las armas de fuego y a partir de ellos se han establecido los límites que deben primar en el momento en que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley tome la decisión de actuar o no y de cómo hacerlo. En particular el **principio de legalidad** implica que el uso de la fuerza debe estar suficientemente fundado en la legislación nacional, como asimismo debe efectuarse en el cumplimiento del deber, empleando métodos, procedimientos y medios que hayan sido previamente autorizados por la ley y normas específicas. En relación con el principio de legalidad, por ejemplo, ha de exigirse que la legislación sea clara y coherente con los estándares internacionales de derechos humanos entendiendo que como premisa el uso de la fuerza sólo puede perseguir el logro de un objetivo legítimo: la protección de la vida y la integridad de las personas (Asamblea General de la ONU, 1979: artículo 3.c; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020: párrafo 2.4; Asamblea General de la ONU, 2017: párrafo 5). Respecto del **principio de necesidad** los



funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, correspondiendo hacer uso de esta cuando los otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto. Este estándar obliga a los funcionarios a utilizarla sólo cuando no exista otra alternativa razonable. Si su uso es inevitable, debe emplearse la fuerza mínima requerida de acuerdo con las circunstancias. En general, se prohíbe todo tipo de fuerza que tenga un efecto indiscriminado contra manifestantes pacíficos (Comité de Derechos Humanos, 2020; Asamblea General de la ONU, 2017)

En cuanto al **principio de proporcionalidad** está representado en el equilibrio entre el grado de resistencia o de agresión que sufre un funcionario y la intensidad de fuerza que se aplica para lograr que la persona se someta al control policial. Igualmente, este principio significa que el uso de la fuerza tiene como límite el no poder infligir más daño que aquel que se pretende evitar con su empleo y, en su caso, considerar las características particulares de la persona. En relación con el principio de proporcionalidad, debe existir un equilibrio entre la magnitud de la fuerza que se emplea y la amenaza que representa el sujeto, de manera tal que el daño infligido no sea mayor al beneficio legítimo que se persigue. (Asamblea General de la ONU, 1979; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020: párrafo 2.10; Comité de Derechos Humanos, 2020).

Finalmente, el de la **responsabilidad** en el sentido que el uso de la fuerza fuera de los parámetros permitidos por la ley no sólo conlleva las responsabilidades individuales por las acciones y omisiones incurridas, sino también la responsabilidad de los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y/o controlar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta, por parte de los subalternos. En este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala el deber que tienen los Estados de investigar los hechos que pudieran haber surgido durante la protesta social como producto de un uso abusivo de la fuerza por agentes estatales [...] de tal manera que sancione a los responsables; y se repare adecuadamente a quienes resultaron afectados en sus derechos.

**DECIMO QUINTO: Dinámica de los hechos:** En segundo término, respecto a la dinámica misma de los hechos, consistentes en la aplicación de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de dicho funcionario público, tales circunstancias han sido debidamente acreditadas a partir de la prueba testimonial, pericial y del registro de audio-video incorporado como “otros medios de prueba no regulados expresamente”, como se indicará a continuación.

La dinámica de los hechos y la posterior agresión, pudo ser apreciada atendida la incorporación de dos video grabaciones



incorporadas por el perito Gonzalo Paredes Gutiérrez, quien afianzó que dichos videos no fueron intervenidos y que si bien se ignora su procedencia al haber circulado por redes sociales, por el ángulo que fueron grabados se desprende inequívocamente que corresponden a una grabación tomada en altura, desde uno de los departamentos existentes en la llamada Remodelación Paicaví. En un primer video se pudo observar por el tribunal como un sujeto bordea una escalera de cemento, sujeto que portaba en sus espaldas una mochila de color negro ingresando a un área verde. Frente a éste -quien al tenor de la prueba sería la víctima- de frente se ve al acusado, (situación reconocida por éste) quien esta vestido con indumentaria conforme su función militar portando un arma de fuego de grandes dimensiones, quien atendido el avance de la víctima quien camina hacia él, retrocede. Es de señalar, respecto de este punto que si bien la víctima avanza hacia el acusado caminando siempre mantiene sus manos bajas al costado de su cuerpo, sin señal de intento de agresión inminente, no pudiendo estimar de manera alguna que se le abalance al acusado como se intentó justificar. Además, de la misma grabación se puede observar un segundo militar que va caminando tras la víctima, en señal de custodia y control persona que mantiene hasta momentos previos a la agresión una actitud pasiva y tranquila. Es en ese contexto que el acusado, siempre retrocediendo dispara hacia la parte baja de la víctima. Ya con la víctima en el suelo producto del disparo la que se aprecia con evidentes señas de dolor al gritar fuertemente lo que puede ser escuchado de la grabación y estando ésta en posición semi sentada, quejándose y tomando su pierna afectada. Es que el acusado de manera innecesaria -ya que Santibáñez Palomera estaba absolutamente disminuido- lo toma fuertemente desde su mochila que aún mantenía en su espalda, zamarreándolo fuertemente, dándolo vuelta, dejándolo boca abajo, previa solicitud de apoyo militar. Finalmente, igualmente se observa a un tercer militar que tiene a otra persona reducida en el suelo, apuntándolo en la espalda con un fusil.

En el segundo video se aprecia desde su inicio a varios militares en una explanada de cemento controlando a dos personas de quienes se ignoran mayores antecedentes, las que se encuentran ya reducidas en el suelo, observando varios funcionarios militares que entran y salen del enfoque de grabación, pudiendo apreciar en algún momento a doce de ellos. Al segundo 29 se escucha una voz diversa de la que realiza la grabación que grita de manera repetitiva “ahí, ahí, ahí” lo que provocó que un funcionario militar -el acusado- con armamento en mano corra hacia el bloque de departamentos de donde provendría la grabación bajando una escalera de seis peldaños, siendo seguido por otros dos funcionarios. En ese contexto al segundo 41 se observa como el acusado se percata de la ubicación de Santibáñez Palomera, quien estaba situado en un área que está más baja a la explanada referida



viendo a un segundo sujeto en la misma área, produciéndose a continuación la dinámica explicitada en el primer video.

Dichos hechos apreciados resultaron coincidente con la declaración de la víctima, quien se situó en el lugar portando una mochila con sus implementos de trabajo, señalando que “no sabía a qué hora empezaba el asunto del paro”, que ve que había gente y por tener miedo se mete por unos escalones hacia abajo donde hay unos departamentos, escondiéndose ya que le quedaba como media cuadra para llegar a su domicilio. Que ve unos militares que le apuntan, que trataba de explicar que venía de su trabajo, indicándole que él también había sido militar, “que no era para que lo trataran así”. Agregó que cuando estaba con el militar en instantes que le iba a mostrar su mochila es cuando recibe el disparo en su pierna, a corta distancia, luego de lo cual lo dieron vuelta con violencia, esposándolo, riéndose de él, votándolo en medio de la calle Paicaví, no entendiendo porque luego del disparo lo esposaron. Refirió finalmente que cree que el militar pensó que iba a sacar un arma o un cuchillo lo que habría motivado su reacción y que en ningún momento agredió al funcionario.

Lo señalado y lo que pudo ser apreciado demuestra la existencia inequívoca de un actuar abusivo por parte del Sargento 2° Herrera Villa, no sólo en el contexto de la agresión misma, sino con posterioridad. Ya que lo cierto es que, a juicio de estos sentenciadores, no se erige como proporcional la conducta del acusado tanto en el acto de fiscalización y control que realizaba, en la utilización de su arma de fuego, así como en el trato que profirió a la víctima con posterioridad al disparo, cuando ésta estaba totalmente incapacitada producto de las lesiones sufridas. No debe olvidarse que se estaba frente a un control por una infracción que jurídicamente era constitutiva de la falta penal del artículo 495 n° 1 del Código Penal que sanciona con multa a “el que contraviene a las reglas que la autoridad dictare para conservar el orden público o evitar que se altere, salvo que el hecho constituya crimen o simple delito” situación de excepción que no se daba en la especie, en donde incluso al tenor de lo dispuesto en los artículos 129 y 130 del Código Procesal Penal no se estaba frente a un delito flagrante, ya que la víctima al tenor de lo apreciado en ningún momento incurrió previo a la fiscalización en algún hecho que pudiese tener carácter de delito o estuviere si quiera cometiendo desordenes públicos en sentido estricto, que tampoco en su caso habilitaban para la detención del presunto infractor.

Sin perjuicio de lo expuesto, abona la calificación jurídica de apremios ilegítimos la violencia desmedida utilizada por el acusado. Toda vez, que resultó evidente el dolor infringido a la víctima, quien luego de recibir el disparo gritaba de dolor, situación que resulta plenamente creíble atendido el disparo de corta distancia de que fuere



objeto, situación reflejada en que el propio cartucho contenedor de perdigones quedó incrustado en el muslo de Santibáñez Palomera el que pudo ser extraído sólo con intervención quirúrgica. Este disparo a corta distancia pudo ser apreciado en el video y de lo señalado en la pericia de Carla Aldana al señalar que del relato se desprende que entre el cañón del arma de fuego y la superficie corporal mediaron de 20 a 30 centímetros lo que explicaría porque el taco se incrustó en el muslo de la víctima.

Además, especial consideración ha de tener el hecho de ser tratada de manera vejatoria con posterioridad a ser herida, estando ya absolutamente incapacitada como se pudo apreciar del video exhibido, al ser zamarreado, puesto boca abajo y maniatado de manos por el sólo hecho de infringir el toque de queda. Así luego de la agresión fue llevada hacia las cercanías, en donde no obstante la evidente lesión ocasionada con un arma de fuego, herida sangrante que le infringía dolor, fue subida por el acusado a un camión militar donde se encontraban el resto de los detenidos de la jornada -como fue posible observar de las fotografías exhibidas en conjunto a la declaración del testigo Chinkes Goldstein- manteniéndolo maniatado. No obstante, como se dijo estar Santibáñez Palomera completamente disminuido, situación que se mantuvo por un tiempo hasta la llegada de personal médico. Siendo sólo a posterioridad como lo relató su superior jerárquico el Capitán Morales, quien al oír sus gritos y apreciar su dolor evidente que se acerca al camión y ordena que éste sea bajado del mismo, para luego ser mantenido en la calle, tirado en el piso hasta la llegada de personal médico que lo atendió en definitiva. De lo expuesto se puede concluir que sólo ante la intervención del citado Capitán Morales se dispusieron los primeros auxilios de la víctima, cuestión que omitió realizar el acusado, quien estaba consiente tanto de la herida que había provocado como del dolor que padecía.

Son por los antecedentes expuestos que malamente se pueda estimar que dicho tratamiento posterior sean consecuencias del cumplimiento del deber y del acto de control o fiscalización que le habían encomendado al tenor del considerando 3° del artículo 150 letra D del Código Penal.

Conforme lo expuesto, el actuar de dicho agente del Estado atentó contra la integridad personal de la víctima, entendida como integridad física y psíquica, lo cual va unido indefectiblemente a la dignidad de su persona, elementos considerados como fundamentales a la hora de interpretar el tipo penal del artículo 150 letra D del Código Penal. Así lo ha señalado nuestra propia doctrina nacional, que a este respecto ha sostenido que "La clave para su interpretación -de dicha norma- puede encontrarse en la capacidad de los actos de que se trate



para provocar sentimientos de humillación y degradación en las víctimas” (Matus Acuña, Jean Pierre; Ramírez Guzmán, M. Cecilia, “Manual de Derecho Penal Chileno. Parte Especial”, Ed. Tirant Lo Blanch; 3° ed., 2019, p. 138.); y así lo ha recogido además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su jurisprudencia ha establecido que “la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta” (Norín Catrimán y otros vs. Chile, mayo 2014).

**DECIMO SEXTO: *Uso de la Fuerza por parte del acusado y ausencia de legítima defensa:*** Que dentro de la prueba documental incorporada esta las llamadas reglas de uso de la fuerza para las fuerzas militares desplegadas en zonas declaradas en estados de excepción constitucional de emergencia y catástrofe, también llamadas RUF. (N° 41 prueba documental) Reglas que en concepto de la defensa del encartado habrían sido respetadas en todo momento lo que lo habilitaba para actuar. En razón de tal documento, se explicitan las políticas, principios, responsabilidades y definiciones para el empleo de la fuerza militar, contemplando el uso racional y proporcional del empleo de las fuerzas para garantizar la auto-defensa, bajo el concepto de legítima defensa justificando su uso y el empleo de armas en su caso.

Analizando estas reglas son las mismas R.U.F las que establece que el personal uniformado debe actuar con una visión conjunta y en marco de la Constitución y leyes de la República (letra C n° 1 RUF) y que en el caso de recurrir al uso de la fuerza, se deben tomar las medidas necesarias para evitar daños colaterales. (Letra C n° 6 RUF)

Por su parte son las mismas R.U.F que señalan que la legítima defensa consiste en el uso de la fuerza necesaria y proporcional incluyendo excepcionalmente la fuerza letal, por un individuo o grupos con el fin de protegerse a sí mismo, a su unidad o a civiles ante un acto hostil. Acto seguido refiere que se debe entender por acto hostil, aquellas acciones que tienen como propósito o intención causar la muerte o daño físico importante hacia quien va dirigido. (Letra C n° 8 b y c RUF) Agrega que resulta también aplicable ante un intento hostil, pero en este caso no se autoriza el uso de la fuerza letal, ya que debe primar el principio de la proporcionalidad respecto de la amenaza o intento hostil. Conforme lo expuesto de la dinámica de hechos apreciados en el video, malamente se puede estimar que la víctima haya realizado un acto que haya tenido como propósito o intención causar la muerte o daño físico importante al acusado, ya que en todo momento, si



bien caminó hacia éste, no se apreció acto o intento de lesionar o atacar a la víctima. Sobre éste punto es de tener presente que la víctima era de contextura delgada, se presentaba desarmada, sin arma o instrumentos que pudiese servir para tal, versus un funcionario militar provisto de casco balístico, chaleco antibala, tenuta de hermetismo y botas militares que portaba un arma habilitada para disparar munición antidisturbios y conforme lo señalare su Capitán Morales y se desprende de la lógica y naturaleza del arma no podía ser disparada a menos de 10 metros de distancia a fin de precaver mayores daños, al ser usada para disipar personas que no se encuentran próximas a quien la utiliza.

Ahora bien, para el evento que se pudiese estimar que la actitud de caminar hacia el acusado pudiese ser estimado como un intento hostil -al tenor de la letra C n° 8 letra b final de las R.U.F- la respuesta la da el mismo articulado en su letra D al definir como se debe entender dichos termino al señalar que intento hostil “consiste en la amenaza del uso inminente de la fuerza que se demuestra a través de una actitud o acción que pudiese aparentemente en algún momento derivar en un acto hostil. Sólo se requiere una sospecha razonable de que se pretende perpetrar un acto hostil, antes de que se autorice el uso de la fuerza. La existencia del acto hostil debe ser evaluado por quien este enfrentado a ello, desde el nivel individual aislado, con un mando.” Sobre este punto, como ya se señaló a juicio de estos sentenciadores de lo apreciado en el video no medio por parte de la víctima algún acto directo encaminado a poner en peligro al acusado. Pero de estimarse que el caminar hacia el pudiese traer consigo algún intento hostil, ya sea poner en peligro su integridad física por un acto posterior o el eventual arrebató del arma que portaba como lo esbozó la defensa, necesariamente tal uso de la fuerza debe resultar ser indispensable para evitar ese mal lo que no ocurrió en la especie como se dirá. Además de lo anterior y si bien conforme las RUF la situación de estar frente a un intento hostil debe ser apreciado por el militar, no es menos cierto que fue el mismo acusado quien en su declaración señaló que no puede decir si el señor Santibáñez lo intentó agredir ya que no conocía sus intenciones y que también ignoraba si portaba algún objeto para agredirlo ni sabe si llevaba algo en sus manos.

A mayor abundamiento, las R.U.F establecen de manera imperativa (N° 9) que todo uso de la fuerza debe ser limitado en intensidad y duración al grado estrictamente necesario para alcanzar el objetivo propuesto, debiendo **ser proporcional al nivel de amenaza**, considerando métodos alternativos al uso de la fuerza física tales como negociación, métodos psicológicos y otros medios no letales que pueden incluir el despliegue de fuerzas más numerosas para demostrar





resolución o para utilizarlo como medio de disuasión. Ello se ve reafirmado al definir los conceptos de “necesidad militar” y “alterativas al uso de la fuerza” (N° 2 y 3 letra D R.U.F) al señalar que el principio de necesidad militar sólo autoriza el uso de la fuerza que sea necesaria para cumplir con la misión asignada. La necesidad militar no autoriza actos que estén prohibidos por la legislación nacional y que siempre que la situación operacional lo permita se deben realizar todos los esfuerzos razonables para resolver situaciones potenciales de confrontación hostil por otro medio que no sea el uso de la fuerza o de las armas, por ejemplo mediante la negociación o disuasión. Conforme los conceptos recién referidos corresponde cuestionarse lo siguiente: Era realmente necesario proceder a disparar el arma de fuego para cumplir la misión asignada.?

La respuesta ha de ser negativa, ya que si bien no resulta cuestionable que el despliegue militar estaba asentado en dicho lugar para resguardar el orden público, no se debe olvidar que no se estaba frente a una persona que estaba en actual enfrentamiento con las fuerzas de orden, o cometiendo algún delito flagrante, sino simplemente frente a un ciudadano que incumplía el horario de toque de queda que al tenor del artículo 495 N° 1 que como se dijo corresponde a una falta penal. El hecho de haber estado escondido en nada altera lo referido, ya que como se observa en el mismo video militares estaban deteniendo personas, reteniéndolas boca abajo en el piso lo que justificaría como señaló la víctima que se escondiera.

En cuanto a la proporcionalidad o aplicación de fuerza mínima exigida, esta no fue respetada por el acusado ya que el uso de la fuerza debía ser proporcional al nivel de amenaza, amenaza que como se dijo sólo y conforme una interpretación amplia era futura e hipotética, por lo que existiendo innumerables militares en el lugar y siendo la víctima custodiada por otro funcionario que lo seguía pasos atrás resultó totalmente desmedida. Ya que conforme al principio de necesidad militar la misión asignada -controlar el orden público y detener a los infractores del toque de queda- incluso sin entrar a cuestionar la eventual ilegalidad de dicha orden de detención no estaba en peligro. Agregando sobre este punto la regla n° 2.1 de los anexos de las R.U.F que prohíbe apuntar con armas de fuego en dirección de cualquier persona en caso que no sea necesario para el cumplimiento de la misión y la regla 2.2 que facultaba la realización de disparos de advertencia lo que no ocurrió en la especie.

A mayor abundamiento, tal incumplimiento de las citadas reglas fue reconocido por el Capitán Morales Valdés quien estaba a cargo de la Unidad Fundamental que se apostaba en el lugar, al señalar que a su juicio la actuación del acusado no fue proporcional y que la escopeta



antidisturbios se debe utilizar cuando hay multitudes y a una distancia no menor a 10 metros para evitar daños mayores como ocurrió en la especie.

Finalmente, es de señalar que se establece un deber de advertencia (n° 4 letra D R.U.F) señalando de manera imperativa que antes de recurrir al uso de la fuerza o empleo del arma de servicio, se deben tomar todas las medidas razonables para disuadir a toda persona de cometer un acto hostil, lo que conforme los dichos del propio acusado no se respetó, aun cuando estaba en conocimiento de las mismas reglas como reconoció en estrados, ya que si bien señaló que le dijo a la víctima que se detuviera en más de una oportunidad o que se tendiera, ésta última expresión efectivamente escuchada por el tribunal al gritarle a la víctima “tírate al piso mierda”, no le advirtió que dispararía tal como lo reconoce el propio acusado.

En nada altera lo argumentado por la defensa y el propio acusado al señalar que no tenía entrenamiento para combatir cuerpo a cuerpo estando frente a un funcionario militar que se dedicaba en los hechos a labores de peluquería o de mozo en el Casino Institucional, lo que si bien resultó efectivo al tenor a su hoja de vida funcionaria – y esto bajo el supuesto de mediar una agresión- tales asertos no resultaron creíbles atendida la naturaleza precisa de sus funciones y al tenor de los documentos incorporados (N° 28 y 29 de otros medios de prueba) en donde se establece como ciertas las habilidades de combate de Herrera Villa en diversos periodos anuales en los que fuere examinado. Así, como de lo declarado por su superior jerárquico el Capitán Morales Valdés al señalar que todo soldado tiene un periodo de formación individual, con certificaciones periódicas en donde le enseñan habilidades básicas de combate, lo que demuestra que para el evento de haber mediado un acto hostil, dicho profesional tenía herramientas para efectuar su función de una manera menos perjudicial y proporcional al control del orden público que se le había encomendado y a la situación fáctica concreta del momento.

Igualmente en nada altera dicha convicción lo apreciado en el video en cuanto se observa que al momento de caer la víctima al piso, luego de ser herida cae algo indeterminado que potencialmente podría haber servido para dañar al acusado o hacerle creer que escondía un arma. Toda vez, que no se incautó arma alguna en poder de la víctima, apreciándose lo que pudo ser un lápiz u otro elemento menor que al momento de la agresión y dinámica de los hechos no medió intento de uso por parte de Santibáñez Palomera. A mayor abundamiento, tal elemento, sólo pudo ser advertido cuando se desprende involuntariamente de sus ropas atendido el hecho de haber sido abatido por el disparo del que fuere víctima.



Conforme lo expuesto, la falta del presupuesto base de estar frente a una agresión ilegítima, sin perjuicio de la falta de proporcionalidad y de la idoneidad del medio empleado no se puede configurar la justificante esgrimida.

**DECIMO SEPTIMO: Desecha tesis de la justificante de ejecución típica por estar cumpliendo un deber.** Que no resultó discutido y resultó además ser un hecho probado que el acusado efectivamente estaba en servicio el día de los hechos y que sus funciones eran el resguardo del orden público, proceder a la detención de los infractores y que estaba facultado para el evento de ser necesario utilizar su arma de fuego conforme lo refirió el mismo acusado y fue ratificado por su superior jerárquico el Capitán Morales Valdés, quien comandaba la Unidad de fuerza desplegada en la llamada Remodelación Paicaví.

En relación a esta justificante según Etcheverry, para que el cumplimiento del deber justifique debe tratarse de un deber jurídico impuesta por una autoridad facultada o con potestad para definir la conducta debida, siempre que ésta orden sea lícita, ya que si la orden, no obstante ser típica es ilícita nunca tendrán el mérito de justificar la conducta. Además, la aplicación de la justificación está sujeta a que se cumpla con ciertos criterios de adecuación y proporcionalidad (Politoff), siendo implícita también la exigencia de necesidad, ya que estando frente a una colisión de intereses resulta indispensable estimar que uno de ellos tenga preferencia y justifique el sacrificio del otro interés. Cury por su parte nos señala que para que la conducta quede justificada, el ejercicio del derecho debe ser legítimo, ya que el legislador ha querido privar de justificación a quien se excede en el uso de sus facultades enfatizando la aserción de que todo derecho tiene un límite más allá del cual no existe como tal, no siendo más que una anticipación legislativa de la teoría del abuso del derecho. Así, los casos de ejercicio legítimo de una autoridad, oficio o cargo no son más que especificaciones de la misma idea ya que la justificante se funda la autoridad o cargo implican ciertos derechos cuyo ejercicio legítimo justifica las conductas típicas que en razón de ellos se ejecutan.

Como se señaló en el caso en particular, la actuación del acusado fue ilícita careciendo su actuación de proporcionalidad y necesidad, no mediando una agresión ilegítima tal como se razonare en los considerando previos, por lo que no resulta procedente acoger dicha justificante.

**DECIMO OCTAVO: Rechazo tesis de la Defensa estar frente a un delito diverso.** Igualmente se desechará la pretensión subsidiaria planteada por la defensa de estar en su caso frente al delito



contemplado en el artículo 330 del Código de Justicia Militar, al estimar como se dijo que se reúnen los requisitos del tipo penal del artículo 150 letra D. A mayor abundamiento, la jurisprudencia nacional que se ha remitido al análisis de este delito ha entendido por violencia innecesaria las agresiones físicas, sin motivo racional y que este tenga un carácter exacerbado, desmedido y, por ende, innecesario. En tal sentido se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema en el fallo Rol N°7315-2015 que en su considerando sexto nos refiere un concepto aplicable en la especie al señalar que: “El delito de violencia innecesaria se aplica a los funcionarios de Carabineros y se ha entendido por “violencias” la comisión de actos de agresión física o maltrato de obra y es menester que aquella sea empleada por el militar para vencer la resistencia opuesta a su actuación, pero es necesario que la misma sea “innecesaria”, es decir que para la ejecución del acto su empleo se haga sin motivo racional. Así, lo que se sanciona es el empleo de fuerza más allá de lo permitido, el exceso de ejecución, o cuando no sea necesario el uso de la fuerza por no presentar la persona en que se ejecuta resistencia de ninguna especie. Se exige, además, un elemento subjetivo que dice relación con el estado anímico del autor en orden a lo injusto de requerir que la violencia sea empleada sin motivo racional.” Además de lo expuesto, los bienes jurídicos resultan ser diversos ya que el bien jurídico protegido en el delito de violencia innecesaria, a grandes rasgos, sería el deber militar. Por la misma razón, este delito se encuentra consagrado en el Libro III título VI del Código de Justicia Militar el cual se encarga de regular expresamente los “Delitos contra los deberes y honores militares”. A partir de dicha base, lo lógico es apelar a que el bien jurídico que en concreto este delito busca proteger sería el del cumplimiento íntegro de los deberes emanados de la función militar, que en este caso, se trataría de evitar el abuso de autoridad a diferencia del bien jurídico contemplado en el artículo 150 del Código Penal que es la integridad moral. Sin perjuicio de lo expuesto, tal tesis subsidiaria se contradice con la fundamentación alegada por la defensa de Herrera Villa, ya que el delito de violencia innecesaria respecto de su culpabilidad se trataría de un delito complejo (sentencia Corte de San Miguel Rol N° 672/2020) que se conforma por un delito doloso el cual se referiría al empleo o hacer emplear violencias innecesarias; y de un delito culposo en virtud del nivel de gravedad del resultado de las lesiones que se provocan, cuestión que no se condice ni con la prueba aportada ni con la defensa alegada durante el transcurso del juicio.

**DECIMO NOVENO: Lesiones provocadas:** Que tal como se adelantare en el veredicto el tribunal no adquirió la convicción más allá de toda duda que concurriera en la especie el supuesto del artículo 150 e) n° 2 en relación al artículo 397 n° 1 del Código Penal, al estimar que



conforme la prueba rendida las lesiones provocadas a la víctima no revisten dicho carácter conforme se dirá.

Previo a ello es de señalar que la causalidad es un juicio probabilístico que obliga a acreditar la relación o vínculo que debe existir entre la conducta típica y el resultado lesivo. Conforme a la presunción de inocencia, dicho vínculo debe ser acreditado más allá de toda duda razonable por el acusador, por lo que debe ser excluida cuando no pueda ser explicada conforme los hechos acreditados en juicio. Partiendo de dicha premisa resulta válido preguntarse si la calificación de las lesiones pretendida por los acusadores tiene un correlato directo y suficiente existiendo una relación normativa de imputación entre el resultado y la conducta lesiva atribuida al autor. Si el acusador no logra probar la relación de causalidad entre la conducta y el resultado no es necesario analizar la imputación objetiva del resultado, a menos que puedan ser valorados de manera diversa, como ocurrió en la especie.

Así, si bien fue un hecho acreditado que las lesiones sufridas por la víctima se ocasionaron a consecuencia del disparo provocado por el acusado, igualmente resultó cierto al tenor de los propios dichos de la víctima que en su etapa de recuperación no realizó tratamiento de kinesiología, tal como fuere derivado conforme antecedentes médicos tenidos a la vista. Situación que de haberlo hecho pudo cambiar los resultados dañinos, tal como lo reconoce la doctora Carla Aldana, perito del Servicio Médico Legal, quien teniendo a la vista el informe pre hospitalario y el dato de atención de urgencia del día de los hechos calificar las lesiones en primera instancia como de mediana gravedad, lesiones que conforme su juicio deberían haber sanado, salvo complicaciones entre 16 a 25 días con igual tiempo de incapacidad. Tal diagnóstico se fundó en que el proyectil balístico afectó sólo partes blandas sin compromiso óseo, vascular o neurovascular, ya que en dicho caso la calificación hubiere sido de graves.

En pro de dicha conclusión, fue la misma perito que indicó que se debía potenciar desde los inicios de la cicatrización las sesiones de kinesioterapia para evitar así el desenlace de trofismo muscular, como en definitiva ocurrió. Asimismo, señaló que el diagnóstico definitivo del que se fundaba el persecutor para calificar los hechos pudo cambiar de haber mediado dicho tratamiento oportuno, reconociendo no haber tenido a la vista dicho tratamiento suponiendo su cumplimiento. En igual sentido la pericia incorporada por la defensa consistente en la declaración del doctor Bernardo Morales Catalán el que sin perjuicio de cuestionar la validez de la clasificación final señalada por la perito del Servicio Médico Legal concluyó compartir el diagnóstico primario de dicha profesional, ya que la herida sólo produjo lesiones de mediana



gravedad al afectar sólo partes blandas concluyendo incluso que no existe daño funcional ya que se puede recuperar, siendo la hipotrofia actual consecuencia de la inmovilidad de la víctima. En nada altera las argumentaciones del Ministerio Público al señalar que la COMPIN habría dictado la resolución N° 412 de 16 de enero de 2020 anexa al informe final de lesiones que establece un grado de incapacidad mayor y permanente de la víctima, toda vez que tal situación configura una apreciación médica clínica que escapa al estudio de causalidad necesaria para llegar a una convicción condenatoria.

En base a lo expuesto y estimando que las lesiones sufridas por Gastón Alejandro Santibáñez Palomera son de mediana gravedad habrá que resolver en consecuencia.

**VIGESIMO: Aplicación de la ley 20.560:** Que igualmente se argumentó por la defensa del encartado la aplicación de la citada ley con entrada en vigencia el pasado 10 de abril de 2023 en cuanto modificó el numeral 6 del artículo 10 del Código Penal añadiendo los párrafos 3°, 4°, 5° y 6° haciendo aplicables las presunciones simplemente legales que dicha normativa establece. Dicha ley modificó textos legales que indica para fortalecer el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile, siendo una ley más favorable al acusado, toda vez que introdujo la llamada legítima defensa privilegiada en favor de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería de Chile y las Fuerzas Armadas, cuando éstas realicen funciones de orden público y seguridad pública interior.

Que si bien éste tribunal estima aplicables en abstracto dicha normativa en razón del artículo 18 del código del ramo se ha señalar que conforme su inteligencia no se puede desprender que ésta establezca como presunción la integridad de los presupuestos de la justificante, ya que resulta indispensable que medie la figura basal como es la existencia de una agresión ilegítima. No obstante lo dicho, de igual manera tal como se razonó en el considerando décimo sexto la prueba rendida resultó idónea para establecer la ausencia de una agresión ilegítima y de estimarla concurrente -lo que éste tribunal como se dijo no comparte- medió igualmente una falta de proporcionalidad del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Por igual razón, habrá que desechar la pretensión de la defensa en orden a aplicar el inciso final del artículo 10 n° 6 introducido por la ley 21.560 (párrafo 4° agregado) siendo improcedente proceder a una rebaja de pena.

**VIGÉSIMO PRIMERO: Audiencia de determinación de Pena:** Que el Ministerio Público entiende aplicar lo dispuesto en el artículo 75



del Código Penal conforme la pena más grave entre la aplicación del artículo 150 letra D en concurso con el artículo 399 o 397 n° 2 según la calificación que en definitiva se realice. En base a lo anterior cualquier pena que se aplique sería de presidio menor en su grado máximo. Hace presente conforme el principio de objetividad que regula las actuaciones del Ministerio Público que en mérito de la declaración del acusado es merecedor de la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos al haber entregados medios de prueba como es la vainilla. No estima aplicable la justificante del artículo 10 n° 6 conforme la actual redacción de la ley 21.560 al no reunirse el presupuesto base de la agresión ilegítima la que sería inaplicable en los hechos. Sin perjuicio de estimar no concurrente la atenuante de irreprochable conducta anterior atendidas las anotaciones del acusado conforme extracto de filiación que incorpora: causa n° **359/2001** de la Primera Fiscalía Militar de Concepción en donde fue condenado el 22 de septiembre de 2006 como autor de cuasidelito de lesiones graves condenado a una pena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, pena remitida; causa **118/2011** del Juzgado de Letras y Garantía de Florida condenado con fecha 20 de junio de 2011 como autor de falta de lesiones leves condenado a una multa de una unidad tributaria mensual; causa **136/2011** del Juzgado de Letras y Garantía de Florida condenado el 20 de julio de 2022 como autor de la falta del artículo 494 n° 5 del Código Penal a una multa de una unidad tributaria mensual y causa **184/2016** del mismo tribunal condenado el 29 de noviembre de 2016 como autor de idéntica infracción a una multa de una unidad tributaria mensual. Adjunta además copias de tres sentencias por las faltas penales. No cuestiona que dichas condenas se encuentran prescritas, lo que no es obstáculo para estimar no concurrente la irreprochable conducta anterior del acusado. En base a lo expuesto solicitó la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias y costas de la causa.

La querellante el Instituto Nacional de Derechos Humanos entiende aplicable el artículo 75 del Código Penal, reconociendo la colaboración sustancial estando de acuerdo con la pretensión punitiva fiscal. Igual situación el Consejo de Defensa del Estado que se adhiere a la pena solicitada por el Ministerio Público y a las circunstancias modificatorias concurrentes.

La defensa por su parte refiere que el rango de pena está en el de presidio menor en su grado medio, esto es de 541 días a cinco años de privación de libertad. Hace presente que puede tener cabida una atenuante de rebaja de pena establecida en el inciso final, lo que permite una disminución de 1, 2 o 3 grados, salvo que concurra dolo. Cree que la agresión ilegítima es procedente ya que el acusado impidió



una agresión ilegítima teniendo presente la situación vivenciada el día de los hechos. Cree que la pena puede ser rebajada en un grado, salvo que concurra dolo, expresión que es infeliz, pero debe ser interpretada, refiriéndose a dolo directo, debiendo entenderse como dolo no intencionado, entendiéndose la existencia de un dolo eventual por lo que podría rebajarse la pena en un grado. Considerando el tiempo que su representado ha estado privado de libertad en esta causa bajo la medida de arresto total y prisión preventiva, arresto parcial estima concurrentes 487 días de abono a cualquier pena privativa de libertad. Teniendo presente circunstancias de rebajar la pena entiende que la pena debiera darse por cumplida de aplicarse la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo al proceder a su rebaja.

Para el evento que no se estime aplicable la circunstancia básica al estimar no justificada la actitud solicita se estime la atenuante concurrente del artículo 11 n° 9 del Código Penal como muy calificada por lo que pide la rebaja en un grado con igual pena pretendida y se le dé la pena por cumplida.

De no dar lugar a lo solicitado o dar lugar a la rebaja especial del artículo 10 n° 6, solicita que la pena sea de 800 días de presidio menor en su grado medio, siendo una pena racional, debiendo abonarse los 480 días y sustituir la pena por la de remisión condicional de la pena. Pide a su vez tener presente lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 18.216 respecto de las penas establecidas a personas de las fuerzas armadas y carabineros.

Finalmente para el evento de no acogerse las solicitudes previas y estima plausible la pretensión del Ministerio Público procedería la libertad vigilada de la ley 18.216.

Incorpora peritaje social de 20 de diciembre de 2019 suscrito por doña Valeria Uribe Torres, trabajadora social, Licenciada en trabajo social que bajo un objetivo de verificar un arraigo familiar, laboral y social del acusado a in de revisar medidas cautelares concluyó que Herrera Villa cuenta con arraigo laboral, familiar y social, constituyéndose como proveedor económico de su hija -adjunto certificado de nacimiento- además de colaborar en el cuidado de sus padres, ambos enfermos crónicos.

Dado traslado al Ministerio Público refirió que el artículo 10 n° 6 final incorporado por la ley 20.560 no es aplicable ya que el inciso razona como una atenuante muy calificada desde un punto de vista de legítima defensa incompleta debiendo ocurrir el presupuesto base cual es una agresión ilegítima. Entiende que no hay una modificación sustancial y si se le da una interpretación a la norma con la expresión "salvo que concurra dolo" se ha de referir a un dolo directo lo que se da





en la especie, no pudiendo estimar que se esté frente a un dolo eventual existiendo intención de disparar de manera directa.

Se opone a estimar que se califique la atenuante de colaboración sustancial ya que los antecedentes incorporados son muy gráficos. En relación con la extensión del mal causado ha de aplicarse el artículo 69 del Código Penal conforme las perniciosas consecuencias que se produjeron en el caso concreto, la situación de apremio de que fuere víctima y la incapacidad declarada teniendo presente el bien jurídico de la integridad moral que protege la norma.

La querellante el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicita que al momento de imponer la pena se tome en cuenta un enfoque de derechos humanos. Por su parte el Consejo de Defensa del Estado hace presente que los antecedentes incorporados relativo al informe social no son actuales al datar del año 2019 por lo que no se permite sostener su conducta pasada y posterior a los hechos.

**VIGESIMO SEGUNDO: Colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos:** Que se reconocerá tal como lo invocare el Ministerio Público la circunstancia atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos contemplada en el artículo 11 n° 9 del Código Penal, al haber el acusado prestado declaración en juicio renunciando a su derechos a guardar silencio, situándose en el lugar de los hechos reconociendo haber incurrido en el acto que fuere calificado como delito. Dicha colaboración se dio desde los actos iniciales de investigación al haber entregado el acusado la vainilla resultante del acto de disparo, la que mantenía en su poder, elemento que fuere utilizado para realizar la pericia incorporada en juicio.

No obstante, no se le dará el carácter de muy calificada como lo pretende la defensa, al no reunir la entidad suficiente para dicha calificación al haberse incorporado medios de prueba suficientes que sirvieron de convicción al tribunal tanto para determinar el hecho punible como su participación en el mismo de manera independiente a dicha declaración.

**VIGÉSIMO TERCERO: Pena aplicable y abonos:** Que, en cuanto al marco penal, el delito de apremios ilegítimos contemplado en el artículo 150 letra D del Código Penal se encuentra sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, teniendo presente las modificaciones introducidas por la ley 21.560 al ser más favorables.

Luego, ponderando la concurrencia de la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, sin agravantes, y tratándose de una pena que consta de dos grados, atendido lo prescrito en el artículo 68 inciso segundo del mismo cuerpo legal, corresponde descartar la aplicación



del grado máximo, por lo que, dentro de dichos límites se determinará la cuantía precisa de la pena de acuerdo a lo previsto en el artículo 69 del Código Penal, regulándose por el Tribunal, en definitiva, en su tramo inferior, esto es, de presidio menor en su grado medio en la cuantía que se indicará.

En cuanto a los abonos consta certificación de ministro de fe del tribunal de 19 de junio del presente año en donde se explicita que fue detenido el 23 de octubre de 2019 a las 13:00 horas, en audiencia de control de la detención, realizada el 24 de octubre de 2019, entre las 11:57 horas y las 13:02 horas, no se decretaron medidas cautelares, ordenándose su libertad. Resolución que es apelada por la querellante y la Fiscalía, decretando la Iltma. Corte de Apelaciones la medida cautelar de prisión preventiva. Con fecha 05 de noviembre de 2019, se realiza audiencia de presentación voluntaria del acusado, realizada entre las 11:39 horas y las 11:43 horas, ordenándose su ingreso en prisión preventiva. Con fecha 27 de diciembre de 2019, en audiencia de revisión de prisión preventiva del acusado, realizada entre las 10:09 horas y las 12:04 horas, se ordena su libertad, decretándose la medida cautelar del artículo 155 letra a) Código Procesal Penal en su modalidad total. Resolución que es apelada por el Querellante y la Fiscalía, decretando la Iltma. Corte de Apelaciones de esta ciudad, la medida cautelar de prisión preventiva. Con fecha 06 de enero de 2020, se realiza audiencia de presentación voluntaria del acusado, realizada entre las 16:41 horas y las 16:47 horas, ordenándose su ingreso en prisión preventiva. Con fecha 18 de febrero de 2020, en audiencia de revisión de prisión preventiva del acusado, realizada entre las 12:15 horas y las 14:37 horas, se ordena su libertad, decretándose la medida cautelar del artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal en su modalidad total, resolución que es confirmada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción. Con fecha 20 de abril de 2020, en audiencia de revisión, realizada entre las 10:43 horas y las 11:37 horas, se modifica la cautelar, decretándose las medidas cautelares del artículo 155 letra a) en su modalidad parcial, letras d) y g) del Código Procesal Penal. Con fecha 02 de julio de dos mil 2020 se ordena la suspensión de la medida cautelar de arresto domiciliario parcial, por los días 21 de julio a partir de las 22:00 horas hasta el día 23 de julio a las 6:00 am. Con fecha 17 de marzo de 2021 se ordena la suspensión de cautelar por los días 17 de marzo a partir de las 22:00 horas hasta el día 23 de marzo a las 6:00 del año en curso. Con fecha 25 de mayo de 2021 se ordena la suspensión de cautelar por los días 25 de mayo a partir de las 22:00 horas hasta el día 27 de mayo a las 6:00 am. Con fecha 28 de octubre de 2022 se ordena la suspensión de cautelar por los días 28, 29 y 30 de octubre de 2022. En audiencia de preparación de juicio oral celebrada el 13 de diciembre de 2022, se dejó sin efecto la medida cautelar del artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal, en



modalidad parcial, subsistiendo las de las letras d) y g) del artículo 155 del Código Procesal Penal, las que se mantienen vigentes hasta la fecha. Finalmente señalar que la Tenencia de Carabineros de Florida informó mediante Oficio N° 1223 del 30 de noviembre de 2021, 1 día de incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario parcial.

Así, considerando las privaciones de libertad con ocasión de esta causa se registra un total de 804 días de abono conforme el siguiente cuadro expositivo.

| Detalle                 | Fecha Inicio | Fecha de Término | Noches | Total días |
|-------------------------|--------------|------------------|--------|------------|
| Detenido                | 23/10/2019   | 24/10/2019       |        | 1          |
| Prisión preventiva      | 05/11/2019   | 27/12/2019       |        | 53         |
| Arresto total           | 28/12/2019   | 05/01/2020       |        | 9          |
| Prisión preventiva      | 06/01/2020   | 18/02/2020       |        | 44         |
| Arresto total           | 19/02/2020   | 20/04/2020       |        | 62         |
| Arresto parcial         | 21/04/2020   | 20/07/2020       | 91     | 61         |
| Suspende cautelar       | 21/07/2020   | 22/07/2020       |        |            |
| Arresto parcial         | 23/07/2020   | 16/03/2021       | 237    | 158        |
| Suspende cautelar       | 17/03/2021   | 22/03/2021       |        |            |
| Arresto parcial         | 24/03/2021   | 24/05/2021       | 62     | 41         |
| Suspende cautelar       | 25/05/2021   | 26/05/2021       |        |            |
| Arresto parcial         | 27/05/2021   | 27/10/2022       | 519    | 345        |
| Incumplimiento cautelar |              |                  | -1     |            |
| Suspende cautelar       | 28/10/2022   | 30/10/2022       |        |            |
| Arresto parcial         | 31/10/2022   | 13/12/2022       | 44     | 29         |
|                         |              |                  |        |            |
| TOTAL                   |              |                  |        | 804        |

**VIGÉSIMO CUARTO: Forma de cumplimiento:** Que, en cuanto a la forma de cumplimiento, si bien la defensa solicitó se imponga al acusado, en sustitución de la pena corporal la remisión condicional contemplada en el artículo 4° de la Ley N°18.216 al reunir los



requisitos para ello dado que la pena impuesta se encuentra dentro del rango previsto por la norma y que si bien ha sido condenado anteriormente tales penas están prescritas para los efectos de la ley 18.216 no se accederá a dicha forma de cumplimiento atendido resultar más gravoso ya que conforme la pena que se impondrá en definitiva y considerando los abonos reconocidos previamente la pena se tendrá por cumplida.

**VIGÉSIMO QUINTO: Otros medios de prueba no mencionados expresamente:** Que en nada altera lo concluido aquellos medios de prueba que fueron incorporados y no fueron mencionados de manera expresa.

**VIGÉSIMO SEXTO: Costas de la causa:** Que, habiendo sido condenado el acusado se le condenará al pago de las costas de la causa al tenor de lo prevenido en el artículo 47 del Código Procesal Penal.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 1º, 7º, 11 N° 9, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 21, 24, 25, 47, 50, 68, 68 bis, 69, 75, 76, 150 letra A, 397 n° 2 del Código Penal; 1, 36, 45, 46, 47, 49, 282, 295, 296, 297, 309, 323, 328, 333, 338, 339, 340, 341, 342, 343 y 348 del Código Procesal Penal; ley 20.968 y ley 21.560 se declara:

**I.-** Que se **condena** a **Héctor Hernán Herrera Villa**, ya individualizado, a la pena de **ochocientos días de presidio menor en su grado medio**, a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150 letra D del Código Penal en grado de consumado, perpetrado el día 22 de octubre de 2019, en la comuna de Concepción.

**II.-** Que la pena impuesta se tendrá por cumplida atendido el mayor tiempo que éste se mantuvo privado de libertad con ocasión de estos antecedentes conforme lo razonado en el considerando vigésimo tercero.

**III.-** Que se condena en costas al sentenciado.

Devuélvase al ministerio público los medios de prueba acompañados en la audiencia del juicio oral.

Ejecutoriada esta sentencia, comuníquese al Juzgado de Garantía de Concepción, para los efectos legales pertinentes.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactó la sentencia el juez interino Felipe Vega Letelier.

**RUC N° 1901144183-4**

**RIT N° 388-2022.**



Pronunciada por los magistrados titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, Cecilia Grant del Río, Jaime Vejar Carvajal y Felipe Vega Letelier, éste último en su calidad de interino.-

